

6ª REUNION — 4ª SESION ORDINARIA — JUNIO 6 Y 7 DE 1974

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, presidente provisional del Honorable Senado; del doctor AMERICO ALBERTO GARCIA, vicepresidente 2º del Honorable Senado; del doctor ALBERTO M. FONROUGE, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales; del doctor ITALO A. LUDER, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y del señor PEDRO L. CAMPORA, presidente de la Comisión de Acuerdos.

Secretarios: señor ALDO HERMES CANTONI y escribana pública IRMA S. de CESARETTI

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y OELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio
ANGELOZ, Eduardo César
AVALOS, Pedro Isaac
BARONI, Danilo Luis
BELENGUER, Emilio
BLANCO, Rodolfo E.
BRAVO, Leopoldo
CACERES, Rubén Osvaldo
CAMI ORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CARNIVALE, Luis
CARO, J. Armando
CERRO, Francisco Eduardo
CULASSO MATTEL, Luis
D'AGOSTINO, Lucio Roque
DE LA RUA, Fernando
DIAZ BIALET, Alejandro
ELIAS, Florencio
EVANS, Carlos H.
FONROUGE, Alberto M.
FROIS, Domingo Andrés
FRUGOLI, Amadeo Ricardo
GARCIA, Américo Alberto
GARCIA, Justino
GRUBISICH, Pablo Eliseo
HERRERA, Dermidio Fernando L.
HERRERA, José Jorge
JAUREGUL, Rafael Zenón
LEÓN, Luis A.
LORENZO, Jorge Luis
LORENZO, Ramón
LOSADA, Mario
LUDER, Italo A.
LUNA, Pedro Antonio
MANCINI, Omar A.
MARTÍNEZ, Julio César

MAYA, Héctor Domingo
MINICHELLI, de COSTANZO, Martha S.
MOREIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
MURGUIA, Edgardo P. V.
PAZ, Eduardo Alberto
PENNISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
POSE, Jorge Juan
PUGLIESE, Juan Carlos
RODRIGUEZ, Gines Froilán
ROMERO, Humberto Antonio
SALAS CORREA, Luis I.
SALMOIRAGHI, José César
SAPAG, Elias
VAL, Buenaventura Justo
VALLE, de GONZALEZ, Leni Rosa
VIVAS, Angel Juan Gregorio

AUSENTES CON AVISO:

BARBORA, de NASIF, Yamili
BRIZUELA, Hugo Genaro
COANEJO LINARES, Juan Carlos
CHAILE, Juan Carlos
FRANCO, Carlos A.
NAPOLI, Antonio Oscar
SOLARI YRIGUYEN, Hipólito
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON LICENCIA:

BENI, Juan Carlos E.
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Guillermo Ramón
ESPERANZA, Joaquín Horacio
MARTIARENA, José H.
PERONI, Carmelo
SAADI, Vicente Leóides

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicación de senador. (Página 611.)
- II.—Dictámenes de comisión. (Página 611.)
- III.—Petición particular. (Página 611.)
- IV.—Proyecto de declaración del señor senador Fonrouge relacionado con la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Malvinas, islas y territorios del Sur. (Página 611.)
- V.—Proyecto de comunicación del señor senador Fonrouge sobre pavimentación de la ruta entre Zárate y Solís, Buenos Aires. (Página 612.)
- VI.—Proyecto de resolución del señor senador León sobre sucursal de correos en Charata, Chaco. (Página 612.)
- VII.—Proyecto de resolución del señor senador León sobre edificio para la Escuela Nacional N° 355 de Charata, Chaco. (Página 612.)
- VIII.—Proyecto de resolución del señor senador León sobre mejora del servicio telefónico en Charata, Chaco. (Pág. 613.)
- IX.—Proyecto de comunicación del señor senador Lorenzo (J.L.) sobre solución del problema planteado con el personal del Banco de la Provincia de Santa Cruz. (Página 613.)
- X.—Proyecto de declaración del señor senador de la Rúa y otros señores senadores sobre aprovechamiento del alto Paraná. (Página 614.)
- XI.—Proyecto de ley del señor senador León sobre creación de la Comisión Asesora de Calificación Cinematográfica. (Pág. 616.)
- XII.—Proyecto de ley del señor senador Lorenzo (J.L.) sobre complejos deportivos en San Julián y Río Gallegos, Santa Cruz. (Página 618.)
- XIII.—Proyecto de ley del señor senador Murguía sobre fomento y organización del turismo. (Página 619.)
- XIV.—Proyecto de resolución del señor senador Angeloz sobre homenaje al señor Jacobo Feldman con motivo de sus bodas de oro en la promoción de las artes plásticas. (Página 622.)
- XV.—Proyecto de ley del señor senador Lorenzo (J.L.) sobre subsidio a municipalidades de Santa Cruz para la compra de equipos transmisores de televisión. (Página 622.)

XVI.—Proyecto de ley del señor senador Lorenzo (J.L.) sobre edificio para Correos y Telecomunicaciones en Pico Truncado, Santa Cruz. (Página 623.)

- 2.—Homenaje con motivo del Día del Periodista. (Página 623.)
- 3.—Homenaje al general Enrique Mosconi en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (Pág. 625.)
- 4.—A moción del señor senador Fonrouge se considera sobre tablas el proyecto de declaración del que es autor relacionado con la refirmación de la soberanía argentina sobre las Malvinas, islas y territorios del Sur. Se aprueba. (Página 626.)
- 5.—Pedido de pronto despacho formulado por el señor senador Lorenzo (J.L.) en el proyecto de comunicación relacionado con el problema existente con el personal del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Se aprueba. (Página 628.)
- 6.—Plan de labor. Se aprueba. (Página 629.)
- 7.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre ley orgánica del servicio exterior de la Nación. Se aprueba con modificaciones. (Página 629.)
- 8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación sobre cooperativismo eléctrico. Se aprueba. (Página 673.)
- 9.—Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles y de Comercio en el proyecto de comunicación sobre distribución de gas envasado en garrafas. Se aprueba. (Página 677.)
- 10.—Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley sobre reforma de la ley 346 (ciudadanía y naturalización). Se aprueba con modificaciones. (Página 678.)
- 11.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre planilla complementaria de subsidios, ley 20.665. Se aprueba. (Página 680.)
- 12.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre modificaciones del decreto ley 19.800/72 (fondo especial del tabaco) Se aprueba. (Página 683.)
- 13.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre modificación de la ley 14.378 (sobretasa por litro de vino expedido). Se aprueba. (Página 685.)
- 14.—Consideración del dictamen de la Comisión de Energía y Combustibles en el proyecto de resolución sobre instalación de una destilería de petróleo en la ciudad de Santa Fe. A moción del señor senador Pennisi vuelve a comisión. (Página 688.)

15.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Página 697.)

—En Buenos Aires, a los seis días del mes de junio de 1974, a la hora 19 y 20, dice el

Sr. Presidente (Allende). — Con la presencia de treinta y seis señores senadores, que forman quórum reglamentario, declaro abierta la cuarta sesión ordinaria del presente período legislativo.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Allende). — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

I

Comunicación de senador

El señor senador Cornejo Linares comunica inasistencia. (*Al archivo.*)

II

Dictámenes de comisión

PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos de ley:

Del señor senador Carnevale y otros señores senadores por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer las sumas que correspondan, dentro del importe fijado por el artículo 1º de la ley 20.665, para la atención de los subsidios que figuran en planilla anexa. (*Al orden del día.*)

—En revisión sobre modificación del decreto ley 19.800 (contribución al Fondo Especial del Tabaco). (*Al orden del día.*)

—En revisión sobre sustitución del inciso a) del artículo 9º de la ley 14.878 (sobretasa por litro de vino expedido). (*Al orden del día.*)

III

Petición particular

El Instituto Católico de Estudios Sociales solicita subsidio. (*A la Comisión de Educación.*)

IV

Refirmación de la soberanía argentina sobre las Malvinas, islas y territorios del Sur. — Proyecto de declaración del señor senador Fonrouge

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

1º — Que ve con agrado los actos que oficial o privadamente se organizan dentro y fuera del país, reafirmando la soberanía argentina sobre las Malvinas, islas y territorios del Sur.

2º — Que vería con agrado, así mismo, como testimonio de adhesión a los propósitos perseguidos por la ley 20.561, que el Poder Ejecutivo incluya como temas de interés nacional en todos los programas obligatorios de enseñanza, y en los diversos ciclos, el estudio de los siguientes puntos:

a) Historia

—El descubrimiento de las islas Malvinas. Los viajes de Américo Vespucio y Hernando de Magallanes.

—La bula de Alejandro VI *Inter coetera* y el Tratado de Tordesillas de 1494.

—Primera ocupación del archipiélago por Luis Antonio de Bougainville en 1764. Reconocimiento por parte de Francia de la soberanía de España sobre las islas.

—El entredicho anglo-español y desalojo de los ingleses de Puerto Egmont el 10 de junio de 1770.

—Los gobernadores españoles hasta la Revolución de Mayo, su presencia y acción en el sector Sur Atlántico.

—Las autoridades argentinas en Puerto Soledad e islas del archipiélago.

—El atropello norteamericano efectuado en 1831 a Puerto Soledad.

—La usurpación por Gran Bretaña y las reclamaciones diplomáticas argentinas.

—Intervención de las Naciones Unidas para resolver el diferendo.

—Estado actual de las negociaciones y soberanía nacional.

—Formas y medios argentinos por lo que se mantiene vinculación ante costas argentinas.

b) Geografía

—Estructura geológica de las islas Malvinas y su integración geográfica con la Patagonia.

—Plataforma submarina y mar epicontinental argentino.

—Cartografía insular: la obra de Manuel Hidalgo Nieto.

—Corrección toponímica.

—Clima, orografía, hidrografía.

—Producción e industrias. La explotación ovajera. La turba y las algas marinas. Potencial pesquero.

—Costumbres y caracteres de los isleños.

—Valores sociales, económicos, estratégicos y turísticos del archipiélago.

—Educación y sanidad.

3º — Que a tal efecto las autoridades competentes deberán adecuar la profundidad del estudio según el área de instrucción, asegurando que vaya ampliándose desde la preparación inferior hasta los más altos niveles educacionales, puntualizándose la razón y la justicia del reclamo patrio, el principio de soberanía que lo inspira y la vocación argentina por hallar soluciones pacíficas con todos los pueblos del mundo.

Alberto M. Fonrouge.

Sr. Fonrouge. — Solicito que quede reservado.

—Asentimiento.

también influya para hallar la buena voluntad de las partes y superar lo más pronto posible esta situación, teniendo en cuenta el pedido especial del señor senador Jorge Luis Lorenzo.

Sr. Presidente (Allende). — Si hay asentimiento, el proyecto pasará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social con recomendación de pronto despacho.

—Asentimiento.

6

PLAN DE LABOR

Sr. Luder. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Luder. — Voy a formular una moción a fin de ordenar el plan de trabajo para el día de hoy.

Propongo que después de tratar el orden del día 4, que se refiere al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, sobre ley del servicio exterior de la Nación, se consideren —en el orden que mencionaré— los órdenes del día 154, 6 y 7, y, además, los tres dictámenes de comisión que acaban de distribuirse a los señores senadores, que se refieren a la reforma de la ley 20.655 —sobre subsidios—, Fondo Especial del Tabaco y, por último, sobretasa por litro de vino expedido.

Sr. Pennisi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Pennisi. — Quisiera que se incluya, así mismo, en el plan de labor propuesto el dictamen de la Comisión de Energía y Combustibles referente a la instalación de una destilería de petróleo en la ciudad de Santa Fe.

Sr. Luder. — Podríamos tratar ese dictamen al final del plan de labor que he propuesto.

Sr. Presidente (Allende). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el plan de labor propuesto.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — Queda aprobado.

7

LEY ORGANICA DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION

Sr. Presidente (Allende). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre ley orgánica del servicio exterior de la Nación.

Por Secretaría se dará lectura al dictamen de la comisión.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación con las siguientes modificaciones:

1º — Suprímese el acápite.

2º — Substitúyese el artículo 9º por el siguiente:

Artículo 9º — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá designar agregados y/o adscritos especializados a las misiones diplomáticas, con la conformidad o a requerimiento de la Presidencia de la Nación o de los distintos ministerios, con afectación a sus respectivos presupuestos. Igualmente, y a requerimiento del Ministerio de Economía, podrá destinar a las misiones diplomáticas a los funcionarios del Servicio Económico Comercial Exterior, también con afectación a su respectivo presupuesto.

Los agregados especializados dependerán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Los pertenecientes a las fuerzas armadas mantendrán dependencia directa con sus organismos nacionales en cuanto se refieren a materias específicas de su arma, y los pertenecientes al Servicio Económico Comercial Exterior mantendrán dependencia del Ministerio de Economía en cuanto se refiere a materias específicas de su función. Las instrucciones que reciban, antes de ser ejecutadas, deberán ser puestas en conocimiento del jefe de la misión diplomática, a los efectos de mantener la coordinación indispensable y la conducción única en los asuntos internacionales.

Los agregados y/o adscritos así designados, inclusive los de las fuerzas armadas y del Servicio Económico Comercial Exterior, formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al jefe de misión.

Por vía reglamentaria se establecerá el orden del rango protocolar que debe adjudicarse a los agregados especializados y laborales, a quienes les serán reconocidos todos los derechos referidos a los funcionarios del cuerpo profesional activo.

3º — Substitúyese el primer párrafo del artículo 13 por el siguiente:

La incorporación al cuadro permanente activo se efectuará exclusivamente por la categoría «G», una vez aprobados la admisión al Instituto del Servicio Exterior de la Nación y los cursos correspondientes. Para

ingresar al Instituto del Servicio Exterior los candidatos deberán reunir las condiciones establecidas en el artículo 11, ser menores de 33 años de edad y poseer título universitario con validez nacional en disciplinas afines con la carrera.

4º — Modifícase el artículo 18 en la siguiente forma:

a) Substitúyese el inciso d) por el siguiente:

d) Los funcionarios que fueran pasibles de condena criminal, no comprendidos en el inciso c) del artículo 25 de la presente ley;

b) Agrégase como inciso i) el siguiente:

i) En los casos previstos en el artículo 52, segunda parte, de la presente ley.

5º — Suprímese en el inciso c) del artículo 20 la expresión «y de Marina».

6º — Substitúyese en el inciso d) del artículo 20 la expresión «artículo precedente», reemplazándola por «inciso precedente».

7º — Substitúyese el inciso j) del artículo 21 por el siguiente:

j) No permanecer sino por un lapso limitado y en las condiciones que fije la reglamentación correspondiente en destinos considerados como peligrosos o insalubres, que se calificarán de «régimen especial», computándose doble dicho lapso a los efectos de la jubilación o retiro.

8º — Substitúyese el tercer párrafo del inciso k) del artículo 21 por el siguiente:

De igual forma tendrán derecho a exportar libre de todo derecho y gravamen los bienes muebles, inclusive los de industria nacional, de uso personal y de su familia, así como del personal de servicio, y los que constituyan el ajuar de su casa en ocasión de ser trasladados al exterior o adquiridos durante su permanencia en destino y reintroducirlas en iguales condiciones de exención de derechos y gravámenes cuando regresen a la República.

9º — Agrégase como inciso q) del artículo 22 el siguiente:

q) No abandonar su puesto y continuar prestando servicios en caso de renuncia, hasta que la misma sea aceptada y se haya puesto en posesión del cargo a su reemplazante o a quien corresponda, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

10. — Substitúyese el artículo 25 por el siguiente:

Artículo 25. — El estado diplomático se pierde:

- a) Por renuncia expresa a dicho estado;
- b) Por las causas previstas en el artículo 18 inciso c) de la presente ley;
- c) Por condena criminal impuesta por delitos dolosos;
- d) Por presentarse en concurso civil o ser declarado fallido;
- e) Por la causal prevista en el artículo 41 inciso d) de la presente ley.

11. — Agrégase como segundo párrafo del artículo 33 el siguiente:

Los no favorecidos deberán acogerse a los beneficios del retiro o jubilación, salvo excepción debidamente fundada por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

12. — Substitúyese el artículo 38 por el siguiente:

Artículo 38. — Todos los funcionarios que posean estado diplomático podrán ser sometidos a la jurisdicción de un tribunal de honor a fin de dejar debidamente aclarado si han ajustado su conducta a la honorabilidad inherente a su investidura. Los tribunales de honor se formarán:

- a) Por pedido de cualquier funcionario que lo considere necesario en salvaguarda de su reputación;
- b) Por pedido de dos funcionarios integrantes del Servicio Exterior de la Nación, cuando consideren que otro funcionario de la misma jerarquía ha incurrido en falta que, prima facie, haga aconsejable su formación;
- c) Por decisión directa del señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto cuando considere que así corresponde.

13. — Substitúyese el artículo 39 por el siguiente:

Artículo 39. — La solicitud pertinente deberá ser presentada directamente al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto. La formación del tribunal no podrá ser denegada; pero si en el caso del inciso b) del artículo precedente resultare temeraria o manifiestamente infundada, hará pasible al solicitante de pena grave.

14. — Substitúyese el artículo 40 por el siguiente:

Artículo 40. — Cuando se constituya para juzgar la conducta de un embajador extraordinario y plenipotenciario, el tribunal de honor se integrará por tres funcionarios de esa jerarquía presididos por el de más antigüedad, y en caso de igual antigüedad, por

el de mayor edad. En los demás casos se integrará por dos funcionarios de igual jerarquía a la de aquel cuya conducta será motivo de juzgamiento de más antigüedad que él, presididos por otro funcionario de mayor jerarquía.

La función de miembro de los tribunales de honor es de inexcusable cumplimiento, pero no podrán ser designados para tales funciones quienes se hallen ligados por lazos de parentesco de cuarto grado por consanguinidad o segundo grado de afinidad entre sí o con respecto del denunciante o el imputado; los que hubieren intervenido en otro tribunal de honor, en carácter de denunciados por el acusado o denunciantes contra el mismo; quienes tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con el acusado o denunciante, o quienes hayan tenido participación en los hechos de modo que no estén en condiciones de pronunciarse libremente.

15. — Substitúyese el artículo 41 por el siguiente:

Artículo 41. — Los tribunales de honor procederán sumariamente y en forma reservada, debiendo labrar actas de sus reuniones y encuadrar su actuación en el respeto de la garantía constitucional del derecho de defensa. Sus decisiones deberán notificarse por escrito a los interesados bajo pena de nulidad y serán inapelables. La resolución que dicten dispondrá:

- a) El sobreseimiento del imputado, si no hubiere mérito para su condena;
- b) Hacer saber el desagrado del tribunal por la conducta del imputado por los hechos que han llevado a su formación, aunque no constituya falta punible;
- c) Apercibir al imputado con prevención de aconsejarse su destitución si la falta fuere leve;
- d) Aconsejar la pérdida del estado diplomático si la falta cometida lesionare el prestigio del Servicio Exterior de la Nación.

En todos los casos se dejará constancia testimoniada del fallo del tribunal de honor en el legajo personal del imputado, dándose intervención a la junta calificadora para su conocimiento y a efectos de que se adopten las medidas que correspondiere según la decisión del tribunal.

16. — Substitúyese el artículo 43 por el siguiente:

Artículo 43. — Las medidas disciplinarias se aplicarán en los casos de negligencia, indisciplina o incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.

Las transgresiones por parte de los funcionarios de la categoría «A» a las normas y preceptos emergentes de la presente ley, así como también a la conducta ética y moral ejemplar que deben observar constantemente, será severamente sancionada de acuerdo con el grado de importancia de la transgresión cometida, previa intervención de la Junta Calificadora y/o del Tribunal de Honor. Esta intervención tendrá lugar mediante disposición expresa del ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que se instruya el correspondiente sumario.

Las sanciones a que dé lugar el sumario podrán ser:

1. Retiro obligatorio;
2. Cesantía o exoneración, previo acuerdo de remoción por parte del Honorable Congreso de la Nación.

Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación comprendidos en las categorías «B» a «G», podrán ser objeto de las medidas disciplinarias siguientes:

- a) Apercibimiento verbal;
- b) Apercibimiento escrito;
- c) Suspensión;
- d) Disponibilidad;
- e) Cesantía;
- f) Exoneración.

Para su aplicación se tendrá en cuenta el carácter y la importancia del hecho cometido, el daño originario y los antecedentes del inculcado.

17. — Substitúyese el artículo 45 por el siguiente:

Artículo 45. — No se impondrá la suspensión de funciones por más de treinta días ni las medidas disciplinarias indicadas en los incisos d), e) y f) del artículo 43 sin previa instrucción de un sumario administrativo.

La reglamentación determinará las normas necesarias para garantizar la defensa del funcionario sumariado.

18. — Substitúyese el artículo 49 por el siguiente:

Artículo 49. — Los funcionarios podrán ser declarados en disponibilidad:

- a) A su solicitud, por razones particulares, cuando tuvieren más de cinco años en el Servicio Exterior de la Nación, en cuyo caso queda en suspenso la prohibición establecida en el artículo 23 inciso b), siempre que las actividades a que se refiere el mismo no sean gestiones de intereses extranjeros;

- b) Cuando la licencia por lesión o enfermedad contraída por causa o en ocasión de sus funciones exceda los periodos de dos años con el 100 % de sus haberes y el año de extensión con el 50 % previsto por la Legislación General Previsional de la Nación;
- c) Los que desempeñaren funciones electivas, mientras durase su mandato;
- d) Si hubieren sido designados en un organismo nacional, provincial o municipal;
- e) Si hubieren sido designados en un organismo internacional del que sea miembro la República;
- f) Por aplicación de la sanción prevista en el inciso d) del artículo 43, en cuyo caso no podrá exceder de un año.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto podrá, por razones de servicio, disponer el pase a disponibilidad de los funcionarios de la categoría «A», por un período de hasta dos años en la forma que determine la reglamentación.

19. — Substitúyese el artículo 50 por el siguiente:

Artículo 50. — En el caso de los incisos a) y b) del artículo anterior, la disponibilidad tendrá en su totalidad o fraccionadamente una duración máxima de un año. En el caso del inciso d), el funcionario podrá solicitar una prórroga no mayor de un año sobre el plazo máximo fijado para el inciso a) o por el período que dure el desempeño de la designación siempre que ésta, justificadamente, responda a un alto interés nacional. En el caso del inciso e), la disponibilidad se otorgará por dos años, pudiendo extenderse a cuatro a solicitud del interesado siempre que el ministerio juzgue que la designación responde a intereses del Estado.

20. — Substitúyese el artículo 51 por el siguiente:

Artículo 51. — El tiempo transcurrido en disponibilidad conforme al inciso b) del artículo 49 será computado a los fines del ascenso. En los demás casos dicho lapso no será computado.

El tiempo transcurrido en todos los casos de disponibilidad previsto en el artículo 49, excepto el del inciso a), será computado a los fines del retiro o jubilación.

21. — Substitúyese el artículo 53 por el siguiente:

Artículo 53. — Los funcionarios declarados en disponibilidad en virtud del artículo 49 no percibirán sueldo alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hasta

la fecha de reintegro a sus funciones, salvo los casos del inciso a), en que recibirán el 25 % de sus haberes; del inciso b), en que se les retribuirá conforme el mismo lo prevé y de la impuesta por razones de servicio a los funcionarios de la categoría «A», en que se les abonará el 50 % de su remuneración.

Tanto la disponibilidad por razones de servicio como la impuesta de acuerdo al artículo 43, inciso d), no podrá ser aplicada sin previo traslado a la República del funcionario que se encontrare en el extranjero y su reintegro al servicio se producirá automáticamente al cumplirse el término de la disponibilidad determinada, el que será improrrogable.

22. — Substitúyese el artículo 80 por el siguiente:

Artículo 80. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y tendrá las funciones y atribuciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.

23. — Substitúyese el artículo 90 por el siguiente:

Artículo 90. — Los títulos otorgados por universidades extranjeras o establecimientos de enseñanza de nivel primario, secundario o terciario a los funcionarios del servicio exterior destinados en el extranjero así como a miembros de su familia, serán reconocidos en la República conforme con las reglamentaciones de las universidades nacionales o de los organismos de conducción de la enseñanza de los respectivos niveles. Si los interesados no hubieren terminado sus estudios en el exterior, las universidades nacionales o los respectivos organismos reconocerán la validez de los estudios hasta el último curso completo aprobado en el extranjero. Si los estudios seguidos no lo fueran por el sistema de cursos completos, se reconocerán las materias aprobadas en el extranjero que tengan su equivalente en el respectivo plan de estudios argentino. Igual criterio se seguirá si hubiera completado cursos en el extranjero, en el caso de que la correspondiente carrera esté organizada por materias en la República.

El presente dictamen pasa directamente al orden del día, de conformidad con el artículo 91 del reglamento del Honorable Senado.

Sala de la comisión, 29 de mayo de 1974.

Italo A. Luder. — Luis Culasso Mattei. — Juan Carlos Chaile. — Yamili Bárbora de Nasif.

En disidencia parcial:

Luis A. León.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION

ACÁPITE

El Servicio Exterior de la Nación es el órgano que representa al Estado ante la comunidad internacional, ejecutando la policía exterior de la República y preservando, defendiendo y resguardando su soberanía, dignidad, prestigio e interés nacional en el exterior.

CAPÍTULO I

De su integración

Artículo 1º — La presente ley se aplicará al personal del Servicio Exterior de la Nación, integrado por los funcionarios que forman el plantel permanente activo, en jubilación o retiro y aquellos que no perteneciendo al mismo sean designados con arreglo a lo establecido en los artículos 5º, 9º y 10 de la presente ley.

Art. 2º — El Servicio Exterior de la Nación estará integrado por:

- a) El cuerpo permanente activo, constituido por los funcionarios con estado diplomático en actividad que se desempeñan indistintamente en funciones diplomáticas, consulares y en la Cancillería, y por aquellos que ingresen al Servicio Exterior conforme a las disposiciones de la presente ley;
- b) El cuerpo permanente pasivo en jubilación o retiro, constituido por los funcionarios que posean estado diplomático y que a su solicitud u obligatoriamente hubieran cesado de revistar en actividad conforme al régimen de jubilación que les haya sido aplicado;
- c) El servicio de agregados laborales, constituido por el personal adscrito al Servicio Exterior de la Nación propuesto por la Confederación General del Trabajo a requerimiento del Ministerio de Trabajo, conforme con las disposiciones del artículo 10 y que hayan aprobado los cursos especiales de capacitación que, a tal efecto, se dictarán en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, según las previsiones de la presente ley y su reglamentación.

CAPÍTULO II

De los funcionarios del Servicio Exterior

Art. 3º — El personal que integra el cuadro del Servicio Exterior de la Nación comprende las categorías siguientes:

- A) Embajador extraordinario y plenipotenciario.
- B) Ministro plenipotenciario de primera clase.
- C) Ministro plenipotenciario de segunda clase.
- D) Consejero de embajada y cónsul general.
- E) Secretario de embajada y cónsul de primera clase.
- F) Secretario de embajada y cónsul de segunda clase.
- G) Secretario de embajada y cónsul de tercera clase.

Art. 4º — El personal del Servicio Exterior de la Nación desempeñará indistintamente funciones en las misiones diplomáticas, en las representaciones consu-

lares y en la Cancillería, conforme al sistema de rotación que se determine.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo podrá excepcionalmente designar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al cuerpo permanente activo o pasivo del Servicio Exterior de la Nación, posean antecedentes relevantes. Este nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del presidente de la Nación que lo haya efectuado. Las designaciones previstas en el presente artículo no podrán superar el treinta por ciento del total de cargos que existan en la categoría A del escalafón.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo podrá asignar categoría diplomática de embajador, al solo efecto del rango protocolar, a personas ajenas al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación, para la realización de cometidos especiales y concretos y mientras duren los mismos.

La asignación de categoría diplomática en rangos inferiores podrá ser efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a los efectos protocolares.

Art. 7º — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá asignar a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación la categoría inmediata superior a la que posean, al solo efecto del rango protocolar y para la realización de cometidos especiales y concretos, con excepción de los funcionarios de las categorías B y C en el caso previsto en el artículo siguiente.

Art. 8º — La jefatura de las misiones diplomáticas será desempeñada por funcionarios de la categoría A. Los funcionarios de las categorías B y C podrán ser acreditados temporalmente como jefes de misión con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario cuando razones de servicio así lo aconsejen, volviendo a su anterior jerarquía cuando esas razones desaparezcan. En el caso que fuera necesaria la designación de encargados de negocio a.i., ella deberá recaer en el funcionario de la representación, perteneciente al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación, que siga en categoría y antigüedad en el grado al jefe de misión.

Este mismo criterio será aplicado para el reemplazo de los jefes de las oficinas consulares.

Art. 9º — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá designar agregados y/o adscriptos especializados a las misiones diplomáticas, con la conformidad o a requerimiento de la Presidencia de la Nación, de los distintos ministerios o secretarías de Estado, con afectación a sus respectivos presupuestos.

Los agregados especializados dependerán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Los pertenecientes a las Fuerzas Armadas mantendrán dependencia directa con sus organismos nacionales en cuanto se refiere a materias específicas de su arma. Los agregados y/o adscriptos así designados, inclusive los de las Fuerzas Armadas, formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al jefe de misión.

Por vía reglamentaria se establecerá el orden del rango protocolar que debe adjudicarse a los agregados especializados y laborales, a quienes les serán reconocidos todos los derechos referidos a los funcionarios del cuerpo profesional activo.

Art. 10. — Institúyese en forma orgánica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con carácter de adscripto al Servicio Exterior de la Nación, el Servicio de Agregados Laborales, que será regulado mediante el estatuto que se dicte al efecto.

Art. 11. — Para pertenecer al Servicio Exterior de la Nación es indispensable:

- a) Ser argentino nativo o por opción y mayor de edad;
- b) Tener pleno goce de los derechos civiles y políticos;
- c) Conducirse en forma honorable, pública y privadamente;
- d) Mantener una conducta económica ordenada e inobjetable;
- e) Poseer el funcionario y su cónyuge condiciones psicofísicas y de cultura social adecuadas;
- f) Que siendo casado, el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por naturalización;
- g) Prestar juramento de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional;
- h) Cumplir con los requisitos del ingreso establecidos en esta ley y su reglamentación.

INGRESO, PROMOCION Y EGRESO

Art. 12. — El ingreso, promoción y egreso de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación se efectuará con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional, la presente ley y su reglamentación.

Durante el receso del Honorable Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá designar o promover funcionarios para la categoría A ad referendum de la Honorable Cámara de Senadores, e igualmente podrá promover funcionarios a las categorías B y C, en las mismas condiciones.

Pedido el acuerdo, los funcionarios propuestos conservarán desde el punto de vista presupuestario su cargo anterior interinamente, hasta tanto se otorgue el mismo por parte del Senado de la Nación.

Prestado el acuerdo, no se requerirá un nuevo pedido para ulteriores traslados del personal del cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación de las categorías A, B y C.

El funcionario cuyo acuerdo fuera rechazado volverá al mismo cargo que ocupaba en el Servicio Exterior de la Nación.

INGRESO

Art. 13. — El ingreso al cuadro permanente activo se efectuará exclusivamente por la categoría G, una vez aprobados la admisión al Instituto del Servicio Exterior de la Nación y los cursos correspondientes. Los candidatos deberán reunir las condiciones establecidas en el artículo 11, ser menores de 30 años de edad y poseer título universitario en disciplinas afines con la carrera.

Una vez admitidos en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, tendrán dedicación exclusiva en carácter de aspirantes y serán becados hasta su egreso.

Los aspirantes que aprobaran los cursos y reunieran los demás requisitos exigidos por la presente ley, su reglamentación y la del Instituto del Servicio Exterior de la Nación serán designados en el cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación e incorporados a la categoría G del escalafón, reconociéndoseles como antigüedad en la carrera el tiempo de permanencia en el instituto.

Quienes no aprobaran los cursos o los demás requisitos exigidos podrán presentarse nuevamente y por última vez siempre que continúen reuniendo las condiciones básicas requeridas, pudiendo reintegrarse al instituto, pero sin el derecho a ser becados en caso de ser readmitidos.

Los aspirantes quedan sujetos a las obligaciones, prohibiciones y medidas disciplinarias establecidas en la presente ley en cuanto sean de aplicación a su calidad de aspirantes al Servicio Exterior de la Nación y de acuerdo con su reglamentación.

PROMOCIONES

Art. 14. — Anualmente se efectuarán los ascensos de los funcionarios del cuadro permanente en actividad que hayan cumplido las exigencias que determina esta ley en sus artículos 11 y 16 y su reglamentación. Los ascensos se realizarán por antigüedad y por méritos en la proporción que determine la reglamentación de acuerdo con las vacantes disponibles y sólo podrán efectuarse a la categoría inmediata superior.

Art. 15. — Las vacantes en la categoría A —embajador extraordinario y plenipotenciario— serán cubiertas normalmente por el Poder Ejecutivo, mediante el ascenso de los ministros plenipotenciarios de primera clase del cuadro permanente en actividad. Estos ascensos podrán ser realizados, si las condiciones del Servicio Exterior de la Nación así lo requieren, sin la periodicidad y plazos exigidos por los artículos 14 y 16 inciso b) de la presente ley.

Art. 16. — Son requisitos indispensables para el ascenso:

- a) Que existan vacantes en la categoría inmediata superior;
- b) Permanecer como mínimo tres años en las respectivas categorías;
- c) Para los funcionarios de las categorías E y D, haber aprobado los cursos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 17. — La junta calificadora deberá establecer el grado de prioridad que deberán ocupar los funcionarios en la propuesta de ascensos. En caso de que en alguna o en todas las categorías no existieran en el momento de la promoción el número de vacantes mínimas que establezca la reglamentación, se procederá de la siguiente forma:

El funcionario propuesto para el ascenso que no contara con la pertinente vacante, seguirá revistando en su categoría pero con el rango que le hubiere correspondido por el ascenso, hasta tanto pueda ocupar la primera vacante que se produzca.

Durante todo este tiempo percibirá la retribución que corresponda a su cargo más un sobresueldo equivalente a la diferencia entre su categoría y la inmediata superior.

La antigüedad cumplida en estas condiciones se considerará a todos sus efectos como correspondiente a la categoría inmediata superior.

EGRESOS

Art. 18. — Dejarán de pertenecer al Cuadro Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Los funcionarios que dejen de reunir las condiciones requeridas en el artículo 11 previo asesoramiento de la junta calificadora;
- b) Los funcionarios de las categorías A, B y C que fueran removidos previo acuerdo por parte del Honorable Senado de la Nación;
- c) Aquellos funcionarios a quienes se aplicara a resulta de un sumario la sanción de cesantía o exoneración;

- d) Los funcionarios que fueran pasibles de condena criminal impuesta por los tribunales comunes o federales;
- e) Los funcionarios que en dos oportunidades no aprobaran los cursos dispuestos en el artículo 16 inciso c) de la presente ley;
- f) Los funcionarios de la categoría G a E que habiendo permanecido en sus rangos por un período de diez años fueran promovidos automáticamente a propuesta de la junta calificadora según el artículo 37 inciso f), y luego de haber tenido dos años de antigüedad en su nuevo rango.

Los funcionarios de la categoría D que en igual forma hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la junta calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y que elevados sus pliegos hubieran sido aprobados por el Honorable Senado de la Nación, y luego de revistar por dos años en su nueva categoría.

Estas previsiones serán aplicables en ambos casos siempre que el funcionario no alcance el límite de edad establecido por el inciso siguiente;

- g) Los funcionarios que hubiesen alcanzado los siguientes límites de edad: setenta años en la categoría A; sesenta y siete años en la categoría B y C y sesenta y cinco años en las restantes categorías;
- h) Por renuncia expresa del funcionario.

CAPÍTULO III

Del estado diplomático

Art. 19 — El grado de cada funcionario del Servicio Exterior de la Nación con las funciones, los derechos, obligaciones y prohibiciones inherentes al mismo instituidos por la presente ley y su reglamentación constituyen el estado diplomático, del que no podrá ser desposeído su titular sino por las causales establecidas por la Constitución y esta ley.

FUNCIONES

Art. 20. — Además de las obligaciones señaladas en el artículo 22 son funciones de los integrantes del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Representar a la Nación;
- b) Promover los intereses de la República en la comunidad internacional, sostener los derechos que le acuerdan los tratados, costumbres y usos internacionales, velar por su prestigio y fomentar sus relaciones políticas, económicas, culturales y sociales, y difundir su conocimiento con arreglo a las orientaciones y directivas emanadas del superior gobierno de la Nación;
- c) Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a cargo de oficinas o secciones consulares pueden autorizar todos los actos jurídicos que según las leyes de la Nación correspondieren a los escribanos públicos y de Marina; su formalización tendrá plena validez en todo el territorio de la República.

Registrarán así mismo, nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento de hijos extramatrimoniales y todos los demás actos y hechos que originen, alteren o modifiquen el estado civil y capacidad de las personas cuan-

do sean solicitados y/o sean de su conocimiento, para su posterior inscripción en los registros de la República, de acuerdo con las normas legales pertinentes;

- d) Sin perjuicio de las facultades previstas en el artículo precedente, los jefes de misiones diplomáticas están autorizados, en casos de urgencia, a tomar juramentos o declaraciones de testigos residentes dentro de su jurisdicción, así como a autenticar cualquier acto notarial con las formalidades y condiciones exigidas por las leyes de la Nación para la validez de los instrumentos públicos. Los testimonios que expidan de dichos actos tendrán en la República el mismo valor que acuerden las leyes a los actos análogos debidamente autorizados.

DERECHOS

Art. 21. — Son derechos de los funcionarios en actividad del Servicio Exterior de la Nación con arreglo a las disposiciones legales que los reglamenten, sin perjuicio de otros establecidos en la legislación nacional:

- a) Usar el título y tratamiento que les acuerda su rango;
- b) Gozar de estabilidad en el Servicio Exterior de la Nación y ser promovidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
- c) No ser separados del Servicio Exterior de la Nación sino por las causales establecidas por la Constitución Nacional y la presente ley;
- d) Percibir los sueldos, retribuciones y otras asignaciones que correspondan a la categoría y a la misión que les fuere encomendada, en orden a las exigencias de representación de su función, jerarquía, permanencia en el cargo y las distintas obligaciones emergentes de su estado civil;
- e) Percibir las retribuciones en concepto de compensación, por gastos de vivienda adecuada, subsidio familiar y escolaridad de sus hijos, conforme a las exigencias que determinen los países de destino;
- f) Percibir órdenes de pasaje anual exclusivamente para sus hijos cuando de conformidad con la educación deficitaria en el país de destino se vea obligado a desplazarlos a terceros países o a la República para mantener su educación;
- g) Percibir los haberes correspondientes a su jubilación o retiro y dejar pensión para sus derechohabientes;
- h) Los funcionarios en retiro o jubilados forman la reserva del Servicio Exterior de la Nación y por lo tanto mantienen el uso de los atributos de su categoría;
- i) Requerir órdenes o instrucciones escritas del superior jerárquico, cuando por la naturaleza del asunto lo estime aconsejable;
- j) No permanecer sino por un lapso limitado y en las condiciones que fije la reglamentación correspondiente en destinos considerados como peligrosos, insalubres o de difícil adaptación que se calificarán de «régimen especial», computándose doble dicho lapso a los efectos de la jubilación o retiro;
- k) Introducir libres de todo derecho y gravamen los bienes muebles de uso personal, de los miembros de su familia y personal de servicio y los que constituyen el ajuar de su casa

en el exterior, cuando sean trasladados a la República, dentro de un plazo no mayor de 200 días desde la fecha de su llegada al país. Este plazo podrá ser ampliado por causa debidamente justificada, debiendo solicitarse tal ampliación dentro del lapso mencionado. De igual forma tendrán derecho a exportar libre de todo derecho y gravamen los bienes muebles de industria nacional de uso personal, y de su familia como así del personal de servicio, y que constituya el ajuar de su casa en ocasión de ser trasladados al exterior o adquiridos durante su permanencia en destino y reintroducirllos en iguales condiciones de exención de derechos y gravámenes cuando regresen a la República;

- l) Ser indemnizados por los daños y perjuicios personales o patrimoniales sobre sus bienes muebles que hubieren sufrido, ellos o los miembros de su familia, por causa que no proviniere de negligencia o imprevisión del funcionario y en ocasión de sus funciones en el exterior, para lo cual deberán haber presentado previamente a la Cancillería el inventario de sus bienes muebles, sujeto a la reglamentación que se dicte al efecto;
- m) El uso del pasaporte diplomático por el funcionario y los miembros de su familia, incluidos los hijos menores de 18 años hasta su regreso a la República. Como, así mismo, el uso de pasaporte diplomático por parte del funcionario retirado o jubilado y su cónyuge o viuda;
- n) Recurrir por vía administrativa ante la aplicación de toda norma o disposición que estimen inadecuada o medida disciplinaria que consideren injusta;
- ñ) Usar de las licencias ordinarias y extraordinarias;
- o) Sus derechohabientes recibirán los gastos de sepelio y en calidad de gastos de luto la cantidad prevista en los artículos 87, 88 y 89.

OBLIGACIONES

Art. 22. — Son obligaciones de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, con arreglo a las disposiciones legales que las reglamentan y sin perjuicio de otras establecidas en la legislación nacional, instrumentos internacionales, los usos y las costumbres:

- a) Prestar juramento, antes de asumir sus tareas, de guardar fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional y cumplir fielmente con sus obligaciones y deberes de funcionario del Servicio Exterior de la Nación en las condiciones estipuladas en las prescripciones de la presente ley y su reglamentación. La violación de este juramento hará pasible al funcionario de exoneración. El personal prestará juramento ante las autoridades superiores, de acuerdo con lo que establezca la respectiva reglamentación;
- b) Desempeñar las funciones o misiones que se le encomendaren con eficiencia y dedicación;
- c) Respetar el orden jerárquico del servicio y cumplir con las instrucciones, reglamentos, circulares y demás disposiciones que reciba;
- d) Promover el conocimiento del acervo nacional;
- e) Fomentar y estrechar las buenas relaciones con el país en que ejerce sus funciones;
- f) Defender el prestigio, la dignidad y los intereses de la Nación;

- g) Declarar bajo juramento los bienes que poseyeran y las modificaciones que experimentare su patrimonio;
- h) Prestar la atención necesaria a los nacionales argentinos y a sus intereses, de acuerdo con las normas pertinentes;
- i) Mantener cohesión permanente y espíritu de cuerpo en el servicio;
- j) Efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas de los fondos que recibiere;
- k) Preservar la inviolabilidad de toda documentación reservada, secreta y confidencial;
- l) Guardar absoluta reserva acerca de las cuestiones de carácter confidencial o secreto que conozcan en razón de sus funciones, aun cuando dejen de pertenecer al Servicio Exterior;
- m) Respetar el orden jurídico y las costumbres vigentes en el lugar de destino;
- n) Solicitar autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para contraer matrimonio;
- ñ) Observar una conducta pública y privada ajustada a la más estricta honorabilidad en su actuación social y económica;
- o) Mantener y perfeccionar los niveles de capacidad y eficiencia que exige el servicio;
- p) Ser convocados cuando revistan en el Cuerpo Permanente Pasivo, si necesidades del servicio así lo aconsejan y continuar sujetos —salvo dispensa expresa— a las obligaciones, limitaciones e incompatibilidades de los funcionarios en actividad.

PROHIBICIONES

Art. 23. — Prohíbese a los funcionarios del Servicio Exterior:

- a) Intervenir en la política del país extranjero en que desempeñen sus funciones;
- b) Ejercer actividades comerciales, profesionales o de gestión de intereses privados ajenos o propios en el extranjero;
- c) Representar a firmas comerciales o intereses extranjeros en el país, o hacer gestiones en su favor;
- d) Percibir otras remuneraciones oficiales en el ámbito federal, provincial o municipal, excepto las referidas a la docencia universitaria, y siempre que ellas no dificulten la dedicación debida a su función específica;
- e) Prestar servicios en el país extranjero del que fuera originario su cónyuge, con la excepción prevista en el artículo 94 de la presente ley;
- f) Los funcionarios del cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, que pasen a situación de retiro o jubilación, así como también los funcionarios mencionados en los artículos 5º, 9º y 10 de la presente ley, no podrán formar parte de directorios ni ejercer ningún tipo de comercio o funciones de carácter honorario o remuneradas relacionadas con empresas de intereses extranjeros;
- g) Que su cónyuge y/o las personas a su cargo desempeñen tareas, remuneradas o no, en el país extranjero donde estuvieren destinados;
- h) Hacer uso indebido de documentos o noticias reservadas, confidenciales o secretas.

Art. 24. — Prohíbese a los funcionarios del Servicio Exterior, salvo autorización expresa:

- a) Asumir la representación o protección de los intereses de un tercer Estado o de sus nacionales;
- b) Integrar comisiones con el propósito de asumir una actitud colectiva ante el gobierno del país de destino, salvo extrema gravedad y urgencia debidamente comprobadas;
- c) Efectuar declaraciones que comprometan la política interna o externa de la República;
- d) Entablar acciones judiciales o prestar declaración testimonial o efectuar renuncia de su inmunidad de jurisdicción en su lugar de destino, prohibición que alcanza a la familia a su cargo;
- e) Ejercer la docencia, la que sólo se podrá autorizar en el ámbito universitario y siempre que no interfiera con la dedicación y eficiencia que debe a su función.

Art. 25. — El estado diplomático se pierde:

- a) Por renuncia expresa del interesado, quien no podrá abandonar su puesto hasta que aquélla sea aceptada y haya puesto en posesión del cargo a su reemplazante o a quien corresponda, de acuerdo con lo que el reglamento establezca;
- b) Por cesantía;
- c) Por exoneración;
- d) Por condena criminal impuesta por delitos dolosos por los tribunales comunes o federales;
- e) Por presentarse en concurso civil o ser declarado fallido.

CAPÍTULO IV

Del Consejo Superior de Embajadores

Art. 26. — Créase un Consejo Superior de Embajadores, de carácter permanente, cuyas funciones serán asesorar al ministro en materia de política exterior y en los asuntos de especial relevancia que conciernan a la conducción general del ministerio.

Art. 27. — Los funcionarios de la categoría «A», del cuerpo permanente en actividad que hubieren cumplido 65 años pasarán a revistar automáticamente en la Cancillería para integrar el Consejo Superior de Embajadores, salvo la excepción prevista en el artículo 28.

Art. 28. — El límite de edad indicado en el artículo anterior podrá ser ampliado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en forma de excepción, en caso que lo juzgue conveniente.

Art. 29. — Podrán por derecho integrar el Consejo Superior de Embajadores los funcionarios de la categoría «A», del cuadro permanente en actividad que hayan revistado por lo menos 12 años en el cargo.

Art. 30. — Una vez integrado el Consejo Superior de Embajadores sus miembros podrán ser trasladados al exterior en misiones permanentes, previo dictamen de la junta calificadora, cuando razones de interés nacional así lo aconsejen, pero podrán cubrir también en cualquier momento misiones especiales concretas y transitorias.

Art. 31. — El consejo funcionará mediante salas que respondan a especialidades tales como:

- a) América latina;
- b) Organismos internacionales;
- c) Política económica exterior;
- d) Asuntos culturales;
- e) Asuntos consulares;
- f) Y aquellas que las necesidades de servicio aconsejen establecer en adelante.

Art. 32. — El número de integrantes será limitado y sujeto a la proporción que se establezca por reglamentación. El tiempo de permanencia de los funcionarios en el Consejo Superior de Embajadores será de 3 años.

Art. 33. — Si al tiempo de constitución o renovación del consejo hubiese mayor número de embajadores en situación de revista en la Cancillería para acceder al mismo, se efectuará un sorteo.

Art. 34. — Los funcionarios integrantes del Consejo Superior de Embajadores dejarán de pertenecer automáticamente al mismo:

- a) Por renuncia al servicio activo;
- b) Al cumplir setenta años de edad;
- c) En caso de traslado al exterior o cese de funciones;
- d) Al finalizar el tercer año de su permanencia, si no le fuera expresamente prorrogado el plazo por un nuevo período no superior a dos años;
- e) Por exigencias de la rotación o sorteo que corresponda efectuar entre sus miembros.

Art. 35. — El funcionamiento, forma de integración y misión asesora del Consejo Superior de Embajadores serán establecidos por la reglamentación.

CAPÍTULO V

De la junta calificadora

Art. 36. — En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto funcionará una junta calificadora de cinco miembros, presidida por el subsecretario que tenga a cargo la superintendencia de la administración del personal, e integrada por cuatro miembros en actividad con rango de embajador, escogidos por orden de precedencia entre quienes se encuentren en funciones en la Cancillería. El director de personal actuará como secretario asesor. Los cuatro embajadores se renovarán cada dos años.

Art. 37. — Serán funciones de la junta calificadora proponer y/o asesorar al ministro de Relaciones Exteriores y Culto en:

- a) Lo referente a la selección de los aspirantes a ingresar al Instituto del Servicio Exterior de la Nación, promociones, traslados, disponibilidades, retiros, jubilaciones, aun las de oficio, aplicación de sanciones disciplinarias, y cualquier otra materia vinculada con el régimen de la presente ley que afecte la relación existente entre el Estado y los funcionarios que pertenezcan o hubieren pertenecido al Servicio Exterior de la Nación, así como también a los aspirantes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación;
- b) Los recursos a que dieran lugar las actuaciones mencionadas en el inciso a) anterior, de acuerdo con lo establecido en el inciso n) del artículo 21 de la presente ley;
- c) Lo referente a la integración del Consejo Superior de Embajadores;
- d) Anualmente confeccionará el escalafón de los funcionarios del cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación teniendo en cuenta la antigüedad en la carrera y en el grado. El escalafón será público;
- e) Materia de los dictámenes del Tribunal de Honor que le sean elevados;
- f) Propondrá la promoción automática de los funcionarios de la categoría G a E que no ha-

yan ascendido en el término de 10 años, y los de la categoría D que no lo hubieran hecho en 12 años conforme con las previsiones del artículo 18 inciso f);

- g) Intervenir y asesorar en las cuestiones de su competencia referentes al personal administrativo técnico-profesional y de servicios generales.

TRIBUNAL DE HONOR

Art. 38. — En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto funcionará un tribunal de honor encargado de pronunciarse exclusivamente sobre si la conducta de los funcionarios sumariados constituye un agravio al honor de los cuadros del Servicio Exterior de la Nación.

Art. 39. — Los sumarios que se substancien a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación deberán ser elevados una vez finalizados a dicho tribunal, que dictaminará si las acciones u omisiones en que ha incurrido el funcionario imputado vulneran el honor del cuerpo diplomático argentino.

Art. 40. — Dicho tribunal de honor estará constituido por dos funcionarios más antiguos de la misma jerarquía que reviste el imputado, y presidido por otro funcionario de rango superior. La designación de este cuerpo se efectuará por resolución ministerial, eligiendo de entre los funcionarios que se hallen prestando servicio en Cancillería. Una vez finalizado el sumario, su informe será elevado a la junta calificadora.

Art. 41. — En caso de no existir sumario previo, un funcionario podrá ser llevado por sus pares ante el tribunal de honor mediando razón fundada, a cuyo efecto se hará el pedido formal ante el ministro de la instauración del sumario correspondiente.

CALIFICACIONES

Art. 42. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, con excepción de los pertenecientes a la categoría A, serán calificados anualmente por sus superiores jerárquicos.

Todo funcionario tiene la obligación de calificar a sus subordinados inmediatos cuando éstos se hayan desempeñado a sus órdenes durante un lapso no menor de cuatro meses.

El informe de calificación será secreto y estará destinado a reflejar la forma en que se hayan desempeñado durante un período determinado, apreciando sus cualidades y de acuerdo a lo que determine la reglamentación de la presente ley.

CAPÍTULO VI

Del régimen disciplinario

Art. 43. — Las medidas disciplinarias se aplicarán en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.

Las transgresiones por parte de los funcionarios de la categoría A a las normas y preceptos emergentes de la presente ley, así como también a la conducta ética y moral ejemplar que deben observar constantemente, serán severamente sancionadas de acuerdo con el grado de importancia de la transgresión cometida, previa intervención del tribunal de honor y de la junta calificadora. Esta intervención tendrá lugar mediante disposición expresa del ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que se instruya el correspondiente sumario. Las medidas a que dé lugar el sumario podrán ser:

- 1) Retiro obligatorio.
- 2) Cesantía o exoneración previo acuerdo de remoción por parte del Honorable Congreso de la Nación.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto podrá aplicar, sin intervención del tribunal de honor y la junta calificadora, una sanción consistente en la disponibilidad del funcionario por un período de uno a dos años.

Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, comprendidos en las categorías B a G, podrán ser objeto de las medidas disciplinarias siguientes:

- a) Apercibimiento verbal;
- b) Apercibimiento por escrito;
- c) Suspensión;
- d) Disponibilidad;
- e) Cesantía;
- f) Exoneración.

Para su aplicación se tendrá en cuenta el carácter y la importancia del hecho cometido, el daño originado y los antecedentes del inculpaado.

Art. 44. — Las medidas disciplinarias serán aplicadas por las siguientes autoridades:

- a) Apercibimiento verbal o escrito, por el superior jerárquico;
- b) Suspensión hasta cinco días por el jefe de la misión diplomática o consular, como así mismo por los jefes directos de los organismos en Cancillería;
- c) Suspensión hasta diez días, por resolución del subsecretario con superintendencia sobre asuntos de personal a requerimiento del jefe de misión diplomática o de la representación consular, como así mismo por los jefes directos de los organismos en Cancillería;
- d) Suspensión de diez a noventa días y la disponibilidad, por resolución ministerial.

Toda medida disciplinaria será comunicada de inmediato al organismo encargado del personal, y por éste a la junta calificadora.

Art. 45. — No se impondrá la cesantía o exoneración sin previo dictamen de la junta calificadora.

En caso de que exista un funcionario sumariante, éste dará vista de las conclusiones a que llegue al sumariado, acordándole un plazo que fije el reglamento pertinente, para que pueda presentar las pruebas de descargo.

Art. 46. — Cuando la gravedad de la imputación requiera apartar al imputado de sus funciones, se podrá disponer la suspensión preventiva por un período no mayor de 90 días.

Art. 47. — Cuando el funcionario estuviese procesado criminalmente por un delito doloso cuya gravedad requiera apartar previamente al imputado de sus funciones, y en el caso en que la substanciación del proceso criminal supere al plazo establecido en el artículo precedente, dicho plazo será ampliado hasta el momento en que quede consentida la sentencia.

Art. 48. — Los sumarios se iniciarán por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

CAPÍTULO VII

De la disponibilidad

Art. 49. — Los funcionarios podrán ser declarados en disponibilidad:

- a) A su solicitud, por razones particulares, cuando tuvieran más de cinco años en el Servicio Exterior de la Nación; en este caso queda en suspenso la prohibición establecida en el artículo 23, inciso b), siempre que las actividades a que se refiere el mismo no sean gestiones de intereses extranjeros;
- b) Cuando la licencia por lesión o enfermedad contraída por causa o en ocasión de sus funciones exceda los periodos de dos años con el 100 % de sus haberes y el año de extensión con el 50 % previsto por la legislación general provisional de la Nación;
- c) Los que desempeñaren funciones electivas, mientras dure su mandato;
- d) Si hubieren sido designados en algún organismo nacional, provincial o municipal;
- e) Si hubieren sido designados en un organismo internacional del que sea miembro la República;
- f) La prevista por el artículo 43, inciso d), en cuyo caso su duración será de un año. Si al cabo del año no fuese reincorporado a la actividad quedará fuera de la carrera.

Art. 50. — En el caso de los incisos a) y b) del artículo anterior, la disponibilidad tendrá en su totalidad o fraccionadamente una duración máxima de un año. En el caso del inciso d), el funcionario podrá solicitar una prórroga no mayor de un año sobre el plazo máximo fijado para el inciso a) o por el periodo que dure el desempeño de la designación siempre que ésta, justificadamente, responda a un alto interés nacional. En el caso del inciso e), la disponibilidad se otorgará por dos años pudiendo extenderse a cuatro a solicitud del interesado siempre que el ministerio juzgue que la designación responde a intereses del Estado. En el caso del inciso f) no podrá ser nunca mayor de un año.

Art. 51. — El tiempo transcurrido en la disponibilidad prevista en el inciso b) del artículo 49 será computado a los fines del ascenso. En los demás incisos dicho lapso no será computable.

El tiempo transcurrido por los motivos señalados en los incisos b), c), d) y e) del artículo 49 y en el artículo 43 inciso d), será computado a los fines del retiro o jubilación.

Art. 52. — La disponibilidad será ordenada por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, excepto la prevista por el artículo 43 inciso d), que será dispuesta por el ministro de Relaciones Exteriores basado en dictamen de la Junta Calificadora.

Si el funcionario, al vencer los plazos previstos en el artículo 50, no hubiere solicitado su reincorporación o una prórroga en el caso que corresponda, se decretará su cesantía.

Art. 53. — Los funcionarios declarados en disponibilidad en virtud del artículo 49, no percibirán sueldo alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hasta la fecha de su reintegro a sus funciones, salvo el caso del inciso b) en que recibirán la remuneración prevista.

La disponibilidad impuesta de acuerdo al artículo 43 inciso d) no podrá ser aplicada sin el previo traslado a la república del funcionario que se encontrase en el extranjero.

El cargo del funcionario en disponibilidad podrá ser cubierto presupuestariamente. La reincorporación se producirá por resolución ministerial y en caso de no

existir vacante, el funcionario ocupará automáticamente la primera que se produzca en su categoría.

CAPÍTULO VIII

De los traslados

Art. 54. — Todos los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación están sujetos a ser trasladados.

Todo traslado será dispuesto por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y deberá ser cumplido como orden de servicio.

A los efectos de la aplicación de la presente ley y su reglamentación se entiende por traslado, el pase de un país a otro y, dentro del mismo país, de una ciudad a otra.

El funcionario tendrá un plazo de treinta días continuos para emprender viaje, a contar del día siguiente al de su notificación. Este plazo podrá ser modificado por disposición ministerial, cuando necesidades de servicio así lo requieran.

Art. 55. — Los funcionarios de la categoría „D, a „G, deberán prestar funciones en forma alternada por los periodos siguientes:

- a) 2 años consecutivos como mínimo y 4 como máximo durante su permanencia en la República;
- b) 4 años consecutivos durante su permanencia en el exterior.

El límite máximo de a) y el término de b) podrán prolongarse o acortarse por el periodo de un año por resolución fundada del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 56. — Obligación de servir en América latina y en funciones consulares:

- a) Será obligación de todo funcionario en el transcurso de su carrera servir en dos oportunidades, como mínimo, en países de América latina;
- b) De igual forma será obligación prestar servicios, como mínimo en dos oportunidades en funciones consulares, tanto en la Cancillería como en el exterior.

Antes de disponer el traslado de un funcionario, la Junta Calificadora tendrá en cuenta esta circunstancia a fin de proponer el destino en forma prioritaria para cubrir países de América latina con los funcionarios mejor calificados.

Art. 57. — Los funcionarios del Servicio Exterior destinados por primera vez a un cargo permanente en una misión diplomática o consular, independientemente de los gastos de embalaje y flete, recibirán en esa única oportunidad para gastos de instalación, con el coeficiente correspondiente al país de destino, el importe igual a dos meses de retribución si fueran solteros o viudos sin hijos, y a tres meses si en el momento de iniciar el viaje estuvieran casados. Esta última asignación también la recibirán los viudos y los solteros que deben atender las necesidades de los miembros de su familia conforme lo determina el artículo 92 siempre que los familiares a su cargo viajen con él.

Art. 58. — Cuando los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación con familiares a su cargo sean trasladados percibirán, antes de emprender viaje, para compensar los gastos de instalación, la suma equivalente a dos meses de retribución —uno si se tratase

de solteros o viudos sin hijos— calculada conforme al país de coeficiente más favorable, así como los gastos de embalaje y flete, salvo que el traslado fuese dentro de la misma ciudad. Al pasar a prestar servicios a la Cancillería, se aplicará para los gastos de instalación el coeficiente del país de su anterior destino.

Art. 59.— En el caso de que un funcionario sea trasladado al país para dejar de pertenecer al Servicio Exterior ya sea por jubilación, retiro u otra causa, le corresponderán todos los derechos inherentes al traslado en los siguientes casos:

- a) Cuando hayan sido designados en virtud de los artículos 5º, 9º, 10 o sean de aplicación los incisos f), g) y h) del artículo 18;
- b) Cuando el funcionario solicitare la disponibilidad de conformidad con el artículo 49, inciso b).

En caso de que la cesación de funciones en el exterior sea consecuencia de la pérdida del estado diplomático, el funcionario tendrá derecho dentro del plazo que fije la reglamentación, a los pasajes para él, su familia y el empleado personal previsto en el artículo 61, así como a los gastos de embalaje y flete.

Art. 60.— Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que deban viajar en cumplimiento de un traslado recibirán los pasajes correspondientes para ellos y los miembros de su familia. Cuando se tratare de una misión especial o comisión de servicio de la República al extranjero, el funcionario podrá requerir un pasaje más para su cónyuge si debiera permanecer fuera de su destino permanente más de 45 días. El plazo será de quince días cuando se trate de comisiones de servicio entre países extranjeros.

Art. 61.— Los funcionarios de las categorías A, B y C en todos los casos, y los de las restantes categorías que tuvieran por lo menos un hijo menor de 12 años, tendrán derecho a un pasaje para un empleado personal.

Art. 62.— Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación podrán ser llamados en comisión a la República por razones de servicio, mediante resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y por el plazo que fije la reglamentación. En tales desplazamientos, durante su permanencia en la República, los viáticos serán liquidados sin el coeficiente del país de destino y en la forma que establezca la reglamentación.

CAPÍTULO IX

De los haberes y asignaciones

Art. 63.— Los haberes, asignaciones, suplementos y gastos previstos en la presente ley que correspondan al personal del Servicio Exterior de la Nación y a las representaciones diplomáticas y consulares, serán liquidados y abonados por trimestre anticipado, y en el exterior desde la fecha de partida en la divisa que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el coeficiente y complementos que correspondan al país de destino y que periódicamente fijará o reajustará el Poder Ejecutivo, siempre que la ley no disponga otra forma de pago. El mismo coeficiente se aplicará al sueldo anual complementario.

La reglamentación establecerá la asignación con coeficiente que, en concepto de salario familiar, percibirán los funcionarios durante su desempeño en el exterior.

Cuando pasen a prestar servicios a la Cancillería se liquidarán sus haberes con el coeficiente del anterior destino, hasta la llegada a la República.

Cuando se desempeñaren en cargos superiores en la Cancillería recibirán una suma que nunca podrá ser superior al índice de equivalencia del veinticinco por ciento del sueldo mensual, para atender gastos de representación con la obligación de rendir cuenta detallada de la inversión conforme lo establezca la reglamentación.

Art. 64.— Los funcionarios de las categorías B y C, que de acuerdo con el artículo 8º fuesen acreditados como jefe de misión, con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario, percibirán mientras se desempeñen como tales un sobresueldo equivalente a la diferencia entre su propia remuneración y la que correspondería al funcionario de la categoría A.

Art. 65.— Los encargados de negocios *ad interim* recibirán, desde el momento en que invistan ese carácter y por el término del interinato, un sobresueldo por responsabilidad de funciones equivalente al 20 % de la remuneración que le correspondería al funcionario de la categoría A.

Art. 66.— Todo funcionario del Servicio Exterior de la Nación que estuviere acreditado ante varios gobiernos podrá solicitar el reintegro de los gastos de representación y de oficina en que incurriera con motivo de sus funciones concurrentes, y percibirá los viáticos correspondientes a los periodos en que deba permanecer en los países en que no tuviere su residencia habitual.

Así mismo, se le otorgarán las órdenes de pasajes pertinentes.

Art. 67.— El funcionario que en virtud de usos o de exigencias transitorias de servicio deba trasladarse a otra ciudad, dentro del mismo país, podrá modificar su residencia previa autorización del ministerio.

En ese caso, recibirá una retribución extraordinaria equivalente a la tercera parte de su remuneración total y se le otorgarán pasajes para él y para su familia.

Art. 68.— Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que fueren designados para el desempeño de misiones especiales u otras comisiones de servicio tendrán derecho a pasajes y a los viáticos que fijará la respectiva reglamentación.

Cuando para el cumplimiento de dicho cometido deban desplazarse desde el ministerio, y la permanencia en el exterior exceda de treinta días, recibirán, en substitución de los viáticos, la remuneración que percibiría el funcionario de igual categoría en el país donde desempeñará su misión. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá anticiparles los viáticos o remuneración que corresponda y las órdenes de pasajes, así como también en caso necesario una suma para gastos de representación con cargo a rendir cuenta.

Las personas que el Poder Ejecutivo designe para el desempeño de misiones especiales ante gobiernos extranjeros o en congresos, conferencias y reuniones internacionales, así como los miembros que integren las delegaciones, recibirán los pasajes, los viáticos y gastos de representación que se determinarán en cada caso.

Art. 69.— Las representaciones diplomáticas y consulares recibirán los gastos de representación que para cada una de ellas determine anualmente el ministerio, conforme a las exigencias propias de su función.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto establecerá las normas a que deberán ajustarse los jefes de las representaciones diplomáticas y consulares para las rendiciones de cuentas de dicha partida, teniendo presente que esos gastos no se asignan con carácter personal al jefe de misión sino que tienen como objeto atender los compromisos protocolares oficiales de todos los funcionarios de la representación.

Art. 70. — En los países en que la embajada no posea para residencia del jefe de misión diplomática una propiedad del Estado, se destinará, con cargo a rendir cuenta, la suma necesaria para su arrendamiento y se determinarán, también anualmente las partidas destinadas a las representaciones diplomáticas y consulares para alquilar de sus oficinas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto establecerá las normas a que deberán ajustarse los jefes de las representaciones diplomáticas y consulares en el arrendamiento de inmuebles a fin de que los contratos de locación que suscriban ad referendum puedan ser ratificados de oficio por el Ministerio.

Art. 71. — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto determinará anualmente los gastos e inversiones que demande el funcionamiento de cada misión diplomática y oficina consular y establecerá la forma y responsabilidad emergente de la aplicación de dichas partidas.

Art. 72. — A fin de determinar las sumas que corresponda asignar en virtud de los artículos 69, 70 y 71, las representaciones diplomáticas y consulares elevarán anualmente al Ministerio, en el plazo y forma que determine la reglamentación, el presupuesto detallado de sus necesidades.

CAPÍTULO X

Del régimen de licencias

Art. 73. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación tendrán derecho a las siguientes licencias:

- Ordinaria anual de treinta y cinco días corridos. Será otorgada con la remuneración total, y, con coeficiente cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior;
- Licencia especial de 35 días corridos para ser utilizados en la República luego de cada dos años de permanencia en el extranjero, que será otorgada con la remuneración total con coeficiente y las órdenes de pasaje para el funcionario y su familia. Esta licencia excluye, durante el año en que sea acordada, el derecho a lo previsto en el inciso anterior;
- Las demás licencias otorgadas a la administración pública nacional, que se concederán conforme a las normas que rigen. En el caso de que corresponda percibir haberes, serán otorgadas con coeficiente cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior;
- Semestral de 20 días para los funcionarios destacados en los países denominados de régimen especial, de acuerdo al artículo 21, inciso j) y que serán otorgadas según las circunstancias lo exijan;
- Extraordinaria, que no podrá exceder de 3 meses cada 5 años y que interrumpe el plazo para gozar de la licencia de los incisos b) y d), y excluye durante el año en que sea acordada el derecho a la licencia del inciso a). Esta licencia será otorgada al 50 % del haber y sin coeficiente.

Las licencias ordinarias deberán ser usadas en el año calendario correspondiente, caducando al finalizar el año en que debieron ser tomadas. Solamente por razones de servicio y autorizado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto podrán usarse al año siguiente.

CAPÍTULO XI

De las jubilaciones, retiros y pensiones

Art. 74. — El régimen de previsión aplicable a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación estará integrado por las normas generales establecidas para los agentes de la administración pública nacional, y las normas específicas referidas a ellos que modificaren aquéllas.

Art. 75. — La prestación de servicios en los destinos indicados en el artículo 21, inciso j), será computada doble a los efectos del retiro o jubilación, si así lo solicitare el interesado.

Art. 76. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que sin alcanzar los límites de edad previstos en el inciso g) del artículo 18 estén en condiciones de obtener la jubilación ordinaria podrán ser jubilados de oficio.

Art. 77. — Los funcionarios que sin tener derecho a la jubilación tuvieran una antigüedad de 20 años en la administración pública, de los cuales 15 como mínimo cumplidos en el Servicio Exterior de la Nación, y cesaran en sus funciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la presente ley, tendrán derecho al haber de retiro.

Art. 78. — Los funcionarios retirados en virtud de las disposiciones de la presente ley percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un haber de retiro mensual equivalente al 2,5 % de la retribución correspondiente al funcionario de igual jerarquía en actividad y en la República, por cada año de servicio computable para el retiro. Tal derecho se extenderá hasta que el funcionario tenga 60 años de edad, si estuviere entonces en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, y hasta los 65 años en caso contrario.

Art. 79. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que se acogieren a los beneficios de la jubilación o fueren jubilados de oficio de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, desde el momento en que dejaren de pertenecer al cuadro permanente en actividad y hasta que obtuvieren el beneficio de la caja respectiva, percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un anticipo de jubilación equivalente al 70 % del que presumiblemente les correspondiere, calculado sobre los importes que por todo concepto hubieren constituido su última retribución, excluidos asignación familiar y viáticos sujetos a rendición de cuentas. La liquidación será efectuada por el ministerio, previa acreditación por parte del interesado de haber iniciado el trámite jubilatorio ante la caja y se computará como pago a cuenta del haber jubilatorio, deduciéndose de la retroactividad que se acumulare. Si el monto de los anticipos excediere de la retroactividad a percibir, la diferencia será deducida por la caja de los haberes del beneficiario mediante un descuento que no podrá exceder del 20 % del importe mensual de los mismos. El ministerio deberá comunicar que efectúa el anticipo a la caja, la que a su vez le hará saber la fecha en que comience el pago de los haberes jubilatorios. En el caso de que en definitiva no se acordare la jubilación por la caja, el ministerio formulará los cargos de reintegro correspondientes.

CAPÍTULO XII

Del Instituto del Servicio Exterior de la Nación

Art. 80. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación es un organismo descentralizado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con las facultades que le son atribuidas por la presente ley y su reglamentación.

Art. 81. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación tiene por misión fundamental desarrollar la capacidad vocacional del aspirante y es eminentemente formativo de los principios éticos y morales que informan la conducta de los integrantes del Servicio Exterior de la Nación.

Art. 82. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación complementa su cometido, con sujeción a la misión señalada en el artículo anterior, mediante:

- a) La selección y preparación de los aspirantes al ingreso, según lo dispone el artículo 13;
- b) La capacitación profesional técnico y práctica de los aspirantes, así como también de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, conforme lo exige el inciso c) del artículo 16;
- c) El cumplimiento de todas las actividades docentes y de investigación que determine la reglamentación.

Art. 83. — La dirección del Instituto del Servicio Exterior de la Nación estará a cargo de un funcionario con rango de embajador del cuadro permanente del Servicio Exterior de la Nación.

CAPÍTULO XIII

De las disposiciones generales

Art. 84. — Cuando los subsecretarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sean designados entre funcionarios de carrera del Servicio Exterior de la Nación serán elegidos entre los de la categoría A.

Art. 85. — Queda prohibida toda designación honoraria en el Servicio Exterior de la Nación.

Art. 86. — Cuando un funcionario del Servicio Exterior de la Nación se lesionara o contrajera alguna enfermedad por causa o en ocasión de sus funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto abonará los gastos de asistencia médica, internación y medicamentos, sin perjuicio del retiro o jubilación que pudiera corresponderle.

Art. 87. — En caso de fallecimiento de un funcionario del Servicio Exterior de la Nación mientras estuviese destinado en el extranjero, el Estado se hará cargo del repatrio de los restos del extinto hasta el domicilio fijado en la República por su familia y de los siguientes gastos:

- a) De acondicionamiento y sepelio;
- b) De los pasajes de regreso a la República de los miembros de su familia y del empleado previsto en el artículo 61;
- c) De embalaje, fletes y acarreos que se originen como consecuencia del derecho acordado en el artículo 58.

Así mismo, se reconocerá a la familia el derecho a los gastos de traslado que le hubieren correspondido al extinto.

Art. 88. — Cuando falleciere un miembro de la familia, el Estado repatriará los restos y se hará cargo de

todos los gastos de acondicionamiento y traslado hasta el lugar en la República que determine el funcionario.

El Estado abonará además el pasaje de regreso de la o de las personas que acompañen los restos y otorgará al funcionario una licencia especial conforme se determine en la reglamentación de la presente ley.

Art. 89. — En caso de fallecimiento del funcionario en actividad, mientras revista en Cancillería, y del jubilado o retirado, sus derechohabientes percibirán gastos de sepelio y gastos de luto. Estos últimos serán equivalentes al pago de tres meses de remuneración para el activo y de dos meses de la prestación para el jubilado o retirado. Igual temperamento se aplicará para el caso de fallecimiento de un miembro de su familia conforme con el artículo 92.

Art. 90. — El personal del Servicio Exterior de la Nación y los familiares que hubiesen terminado en el extranjero sus estudios en una universidad autorizada para extender diplomas habilitantes podrán ejercer su carrera en la República, como si su diploma emanara de una universidad nacional, a cuyo efecto cualquier universidad del país deberá otorgar el diploma argentino correspondiente. Si no hubieran terminado su carrera, las universidades y demás instituciones de enseñanza primaria, secundaria, especial o universitaria reconocerán la validez del título respectivo, y si no hubieren alcanzado a obtenerlo, se reconocerán las materias aprobadas en el extranjero equiparables a las que se rinden en la República.

Art. 91. — Son argentinos nativos los hijos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación o de cualquier funcionario argentino de carácter nacional, provincial o municipal, o dependiente de un organismo internacional, que nazcan en el extranjero en ocasión de la prestación de servicios por parte de los padres.

Art. 92. — Se entiende por familia a los fines de esta ley: el cónyuge, los hijos e hijastros menores de edad y los mayores incapacitados para el trabajo, las hijas e hijastras solteras y los ascendientes de primer grado, tanto del funcionario como del cónyuge, cuando aquél compruebe que subviene a sus necesidades.

Art. 93. — A partir de la sanción de la presente ley queda prohibido a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación contraer matrimonio con ciudadanos extranjeros que no hayan previamente obtenido su carta de ciudadanía.

Art. 94. — Únicamente se destinará un funcionario al país de origen del cónyuge cuando razones de interés nacional así lo impongan y siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

- a) El cónyuge deberá tener ocho años en el ejercicio de la ciudadanía argentina;
- b) El cónyuge debe haber residido en la República durante ocho años, ya sea en forma continua o discontinua.

Art. 95. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que desempeñen funciones en el exterior conservarán su domicilio legal en la República.

Art. 96. — El jefe de la misión diplomática permanente será la autoridad máxima de la República en el país en que está acreditado y, en virtud de tal investidura, le serán subordinadas jurisdiccionalmente las oficinas, agencias u otros organismos dependientes de ministerios, secretarías de Estado o entidades estatales de cualquier naturaleza, ya sea nacional, provincial o municipal.

CAPÍTULO XIV

Del personal administrativo técnico profesional y de servicios generales

Art. 97. — El personal administrativo técnico profesional y de servicios generales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mientras preste servicios en las representaciones diplomáticas y consulares de la República, tendrá los derechos y obligaciones establecidos en esta ley para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, dentro de las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 98. — Al personal administrativo técnico profesional, mientras permanezca en funciones en el exterior, se le asignará rango de secretario de embajada y cónsul de tercera clase.

CAPÍTULO XV

Del Ceremonial del Estado

Art. 99. — Dependiente directamente del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, funcionará el Ceremonial del Estado, organismo único de la gestión protocolar de carácter nacional, que estará a cargo del jefe superior del Ceremonial del Estado con categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario.

La reglamentación establecerá la forma de su integración, funciones y competencia.

CAPÍTULO XVI

De las disposiciones transitorias

Art. 100. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que se encuentren en actividad a la fecha de vigencia de la presente así como también todos aquellos reincorporados, designados o nombrados de conformidad con las leyes 20.508 y 20.549, con excepción de los que fueren designados de acuerdo con el artículo 5º de esta ley, formarán parte integrante del cuadro permanente activo una vez que cese la vigencia de la ley 20.549.

Art. 101. — Establécese que los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que actualmente revistan en la categoría B, ministros plenipotenciarios, y que pasaron a integrarla por o durante la vigencia del decreto ley 19.300/71, ya sea por pertenecer entonces a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase o por promoción, respectivamente, revistarán, a partir de la promulgación de la presente ley, en la categoría C ministros plenipotenciarios de segunda clase. El resto pasará a integrar la categoría B ministros plenipotenciarios de primera clase.

Art. 102. — Previo a la aplicación de los artículos 18 inciso f) y 37 inciso f) la junta calificadora procederá, dentro de los noventa días desde la sanción de la presente ley, a proponer en base a sus antecedentes y demás elementos de juicio el reescalonamiento, por esta única vez, de aquellos funcionarios que hayan sido evidentemente postergados en sus ascensos sin que mediaren justificativos para esa postergación.

Art. 103. — Como caso de excepción, a efectos de reorganizar adecuadamente el cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, facúltase por esta única vez al ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que, hasta el 31 de diciembre de 1974, pueda efectuar promociones siempre que existan vacantes y sin necesidad de cumplir los requisitos de los incisos b) y c) del artículo 16.

Art. 104. — Dentro de los 180 días de promulgada la presente ley el Ministerio de Bienestar Social de común acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto estudiará un régimen provisional para el personal del Servicio Exterior de la Nación, que contemple las particularidades y naturaleza de las funciones que preste el mismo.

Art. 105. — La disposición contenida en el inciso p) del artículo 22 regirá a partir de la fecha en que entre en vigencia el régimen a que se refiere el artículo 104.

Art. 106. — Los distintos ministerios, secretarías de Estado u organismos descentralizados nacionales, provinciales o municipales adoptarán los recaudos necesarios para instruir a sus dependencias respecto a lo determinado en el artículo 96, dentro de los treinta días de la promulgación de la presente.

Igualmente, en el plazo y forma que establezca la reglamentación quedarán disueltas las oficinas de ceremonial o de audiencias diplomáticas de todas las dependencias del Estado, las que transferirán al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para facilitar la gestión del Ceremonial del Estado mencionado en el artículo 99, los créditos existentes en sus respectivos presupuestos destinados a la atención de gastos protocolares.

Art. 107. — La reglamentación de la presente ley será dictada por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dentro de los noventa días de la fecha de su publicación. Hasta tanto se concrete esa medida, regirán las disposiciones reglamentarias contenidas en el decreto 5.182 del 24 de febrero de 1948 y sus modificaciones, en cuanto sean aplicables a la presente.

Art. 108. — Derógase el decreto ley 19.300/71 y todas las otras disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 109. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alberto J. Vignes.

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 8 de marzo de 1974.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Elevo a vuestra honorabilidad el proyecto de ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación. En el proceso de elaboración de dicha ley ha privado esta idea: la estabilidad del cuerpo de funcionarios que lo componen es el requisito esencial para mantener la eficiencia del servicio. Por otra parte, un cuerpo administrativo específicamente adecuado asegura el elemento indispensable para lograr los propósitos que se persiguen: una cancillería que cuente con su servicio diplomático y el administrativo adscrito coherentemente estructurado para desempeñarse en el exterior.

La experiencia recogida a lo largo de muchos años, durante los cuales a menudo hemos observado distorsiones en la misión fijada a cancillería, guió la redacción del texto. De ahí el planteo formulado en su encabezamiento, en donde se concibe al servicio como un órgano de características especiales dentro de la administración pública, destinado a asegurar la soberanía de la Nación y lograr la prevalencia del interés nacional en la formulación y ejecución de la política exterior, tal cual lo establece la ley de ministerios.

Otro objetivo fundamental de la ley es la obtención a corto plazo del instrumento humano idóneo necesario para realizar una gran política exterior para lo cual se utilizará el recurso de cohesionar sus cuadros. Todo ello permitirá estructurar un cuerpo orgánicamente jerarquizado dentro del Ministerio, regido exclusivamente por esta ley.

Al margen de este enfoque substancial en el proyecto elevado se mantienen las bases y líneas generales de la ley 12.951, con las innovaciones exigidas para su actualización.

Como elementos nuevos no reglados por la ley 12.951 figuran:

— La creación de un Consejo Asesor denominado «Consejo Superior de Embajadores», el que se enriquecerá con la experiencia y capacidad adquiridas en la más alta categoría de la función diplomática, avalada con una antigüedad en el cargo de más de doce años.

— El número de integrantes de dicho Consejo Superior y su permanencia en la función será limitado para poder mantener cierta flexibilidad en el movimiento dentro de las categorías superiores.

— Se prevé un mecanismo para los primeros secretarios y consejeros que no hayan sido promovidos en diez años, procediéndose previo dictamen de la junta calificadora a su promoción automática con obligación de retiro a los dos años.

— Para conservar la proporción regular de ascensos a las distintas categorías, se compensará económicamente la diferencia del ascenso hasta que se produzca la vacante.

— Se crea un Tribunal de Honor, como instancia previa a la intervención de la junta calificadora, que entenderá solamente en los sumarios instaurados para dictaminar si ha habido injuria al cuerpo. Su instauración tiende a asegurar en los cuadros un estilo profesional más genuino.

— Se prevé un régimen previsional adecuado a las peculiaridades y necesidades propias del sector.

— Se incorpora el servicio adscrito de agregados gremiales y profesionales a los que se engarza en la estructura sometiéndolos a condiciones de ingreso por medio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

Corresponde finalmente hacer notar la vigencia que hoy tienen las consideraciones vertidas en el mensaje en oportunidad de elevarse el proyecto de ley 12.951.

Por consiguiente, las disposiciones que someto a consideración de vuestra honorabilidad constituyen el cuerpo legal básico que permitirá reestructurar en forma adecuada el Servicio Exterior de la Nación.

Por ello, al aprobarlo, se habrá realizado un importante servicio al país.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.

Alberto J. Vignes. — Benito P. Llambi. —
José B. Gelbard. — José López Rega.

Sr. Presidente (Allende). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Luder. — Señor presidente, señores senadores: la política exterior es la acción de un país proyectada al campo internacional en función de los intereses nacionales, cuyas fronte-

ras pueden no coincidir necesariamente con los límites geográficos. Los ejecutores de esa acción, o sea el personal del servicio exterior, están llamados a cumplir una tarea que no se ajusta a reglas estáticas, sino a una realidad variable y cambiante que cotidianamente el diplomático debe enfrentar y mensurar con capacidad, prudencia, tacto y vocación de servicio.

Para encomendar esa misión a funcionarios idóneos, los Estados seriamente comprometidos en su política exterior procuran elegir hombres profesionalmente capacitados y dotados de las cualidades necesarias de equilibrio, sagacidad, patriotismo, ponderación y firmeza que deben acompañar a todo diplomático.

Ambas circunstancias evidencian la importancia que reviste proveer al servicio exterior de un instrumento legal que permita una estructuración adecuada y un accionar eficaz para el cumplimiento de una de las obligaciones esenciales del Estado, como es el desarrollo y ejecución de su política internacional. La historia enseña que es muy alto el precio que se paga por los errores cometidos en el manejo de la política exterior cuando la negligencia o la inoperancia reemplazan a la responsabilidad y a la eficiencia.

Es fácil advertir que la Argentina está llamada a cumplir un papel importante en el plano internacional; principalmente en Latinoamérica, donde se ha convertido en el virtual vocero de los intereses de la región frente a los Estados Unidos de América. Pero la génesis de una política exterior está sujeta a un proceso lento y doloroso en el que intervienen muchos factores, menos el de la improvisación ni por parte de quien la fija y conduce ni tampoco por quienes deben ejecutarla, en este caso el cuerpo diplomático, que es el que implementa las acciones dictadas para la concreción de una política exterior coherente con el tiempo que vivimos y con la tradición histórica del país.

En el texto del proyecto de ley despachado por la comisión se ha volcado todo lo que pueda conducir a la organización de un Servicio Exterior adecuado a la actual circunstancia que libere y encauce las fuerzas creadoras de los servidores que cumplen sus tareas no sólo en las grandes capitales, sino también en rincones alejados de los principales centros de poder.

He puesto el acento en esa especial característica de un servicio destinado a operar primordialmente en el exterior, porque ello determina que la ley deba contemplar no sólo el funcionamiento de las embajadas o consulados como oficinas diplomáticas o consulares, sino la adecuación del hombre que las integra a medios geográficos, humanos, climáticos, culturales y etnográficos tan diversos de los nuestros. Esta realidad que el integrante del cuerpo debe afrontar, y que se proyecta sobre él y su familia, requiere una acendrada vocación para el servicio y una disciplina adecuada a la tarea diplomática. La profesión de diplomático, co-

mo todas las profesiones, sufre las implacables críticas de quienes están fuera de ella y, por lo tanto, no conocen el revés de la trama. Por su aparente brillo, por su necesario *status* de dignidad externa que acompaña su ejercicio, ofrece fácil blanco a la incompreensión.

El descuido en la formación del cuerpo diplomático es un grave daño que a corto plazo debe pagar el país en su política exterior. Por ello, es preciso asegurar el acceso a sus filas con una rigurosa selección psicofísica, profesional e intelectual; preservarlo de la tentación de asumir como real lo externo de la profesión, cuando es sabido que su verdadera tarea —la de la negociación— se rodea de un ambiente de silencio, prudencia, tacto, disciplina interior y conocimiento de la materia internacional, trabajo más de gabinete que de salón; y, además, comprender que los éxitos circunstanciales no hacen al fortalecimiento constante y seguro de la imagen del país y que la eficacia de un servicio exterior depende de una acción tesonera y silenciosa, nutrida de un sinnúmero de valores imponderables, difíciles de contabilizar, pero que sumados proyectan a la Nación en el ámbito internacional.

El gobierno aspira a organizar y mantener un cuerpo diplomático que responda a las exigencias de la hora actual del mundo, en que la actividad negociadora y diplomática es de una realidad abrumadora, tanto en las relaciones bilaterales como en los foros internacionales.

La Argentina ya no puede ni debe dar espaldas a su propia realidad. La historia nos enfrenta con una responsabilidad en esta hora del mundo y debemos estar a la altura de nuestro destino. Cuando los países llegan a la madurez que ha alcanzado el nuestro, su posición internacional influye en la formulación de las políticas nacionales. Su acción en lo exterior e interno responde a una unidad de concepción que se nutre de los intereses de la comunidad política como entidad nacional.

Dotar al país de un servicio exterior adecuado significará servir ese propósito, y a ello tiende el proyecto de ley que se encuentra a consideración de esta Honorable Cámara.

Numerosas leyes han tenido vigencia en el tiempo, regulando el servicio exterior. Así, cronológicamente, se han sucedido las siguientes normas: la ley 4.711, del año 1905, de organización del cuerpo diplomático; la ley 4.712, del año 1905, de organización del cuerpo consular; el decreto ley 127/35, reglamentario del servicio exterior de la Nación; el decreto ley 30.991-44, aprobado por ley 13.891; la ley 12.951 del Servicio Exterior de la Nación, sancionada en 1947 y reglamentada por el decreto 5.182/48; el decreto ley 17.702/68; el decreto ley 19.300/71, actualmente en vigencia, que no ha sido reglamentado, por lo que se continúa aplicando el decreto 5.182/48, reglamentario de la ley 12.951.

Cabe destacar que la ley 12.951 constituyó un verdadero avance, tanto en lo que se refiere a las disposiciones articuladas para adecuar los cuadros del servicio exterior a la política externa, así como para conceder a sus integrantes los beneficios sociales instaurados en el país en la época en que se sancionó. Dicha ley fue derogada por el decreto ley 17.702/68 y éste, a su vez, por el 19.300/71, ambos dictados por gobiernos de facto y que produjeron una verdadera distorsión en los cuadros escalafonarios, pues las modificaciones introducidas, más que al mejoramiento del servicio, apuntaron al favorecimiento de grupos afectos al régimen imperante, provocando, como era lógico, un grave deterioro en la eficiencia del servicio y el corolario inevitable de decepción y malestar de quienes resultaron infundada y arbitrariamente postergados cuando no separados de sus cargos por el artificio de requisitos reglamentarios.

Ello sería suficiente para justificar la necesidad de promover la revisión del ordenamiento legal vigente y legitimar la adopción de las medidas necesarias para corregir sus defectos.

Los propósitos que animaban a los autores en su intención de perdurabilidad los evidencian el hecho de que el decreto ley 19.300/71 omitió toda mención a la intervención del Honorable Senado de la Nación en el procedimiento para la designación y remisión de las más altas jerarquías del servicio exterior, como así mismo suprimió la situación de revista del personal que se desempeñara en cargos políticos electivos. O sea que descartaba la posibilidad de que esa ley rigiera en una época de normalidad institucional, o al menos descreía en forma pública que el país pudiera reencontrarse con sus instituciones.

El mensaje del Poder Ejecutivo reconoce haber seguido en el proyecto los lineamientos de la ley 12.951, cuya bondad está dada por el hecho de que los reformadores surgidos al amparo de gobiernos de facto no pudieron menos que reconocer en los hechos el acierto y la eficacia de sus principios. Confirma este aserto la circunstancia concreta de que no sólo se recogió textualmente el extenso articulado de dicha ley, sino que en la práctica se siguió aplicando su reglamentación.

Destruída la legislación creada por la ley 12.951 y anulada la dinámica emergente de ella, el Poder Ejecutivo vio entorpecida la concreción de sus decisiones en materia de política internacional, por obra del ordenamiento vigente. En su reemplazo, somete a la consideración de este Honorable Congreso el proyecto de ley que estamos considerando.

En cuanto a los méritos de la iniciativa, cabe destacar, repito, que se inspira en los principios que consagró la ley 12.951. Aprovecha los frutos fecundos de su aplicación en el lapso comprendido entre 1947 y 1955. La mejora con el resultado de la experiencia, para adecuarla a los

cambios operados en el específico quehacer de los diplomáticos.

Deseo destacar que las características y exigencias especiales de la función diplomática, las particularidades propias de sus tareas, el ámbito en que se desarrolla su actividad y su misión permanente de salvaguardia de la soberanía nacional fuera de las fronteras de la República hacen necesario que la situación legal de los funcionarios del servicio exterior esté reglada por un instrumento específico distinto del que rige para el resto de la administración pública. Por ello, también son distintas las obligaciones y exigencias a las que están sometidos, así como las limitaciones e incompatibilidades.

Las modificaciones más importantes que introducen el proyecto del Poder Ejecutivo y el que se somete a consideración de esta Honorable Cámara, son las siguientes:

En primer lugar, se define la constitución del servicio exterior de la Nación, haciendo radicar la característica distintiva de sus integrantes en la posesión del «estado diplomático».

Se crea e incorpora el servicio de agregados laborales, adscrito al servicio exterior de la Nación. Se faculta a la Confederación General del Trabajo para proponer los candidatos, cuya designación se canaliza a través del Ministerio de Trabajo, homologándose su incorporación mediante el pase del Instituto del Servicio Exterior de la Nación para su debida capacitación.

Se propicia la apertura de cargos en las categorías de ministros plenipotenciarios, que el decreto 19.300 había unificado, con el propósito de determinar que el acceso al rango de embajador se produzca a edades adecuadas, lográndose además una jerarquía superior decantada y experimentada.

Se estructura una verdadera carrera diplomática mediante un escalafón orgánico, estable y jerarquizado, autorizándose solamente un treinta por ciento de designaciones fuera de la carrera en el más alto nivel y con carácter temporario de embajadores.

Se asigna cierta elasticidad al otorgamiento de rangos diplomáticos a los efectos protocolares, para hacer posible el cumplimiento de determinados cometidos especiales, temporarios y concretos.

Recogiendo el aporte de la experiencia y reconociendo el importante papel que cada día con mayor intensidad cumple en la vida diplomática el cónyuge del funcionario, se establece la obligatoriedad de que aquél sea argentino nativo o por naturalización, y que tanto el funcionario como su cónyuge posean condiciones psicofísicas y cultura social adecuadas.

Se establece el cumplimiento de la disposición constitucional que exige el acuerdo previo del Honorable Senado para la designación de ministros, en las dos categorías, y de embajador.

Se perfecciona, en base a la experiencia recogida, el ingreso y permanencia en el Instituto del Servicio Exterior, estableciendo la exigencia

de dedicación exclusiva a los aspirantes admitidos, becándolos hasta su egreso.

Se instituye un mecanismo de sostén para mantener la proporción regular de los ascensos a las distintas categorías, compensando la diferencia de asignación por promoción hasta que se produzca la vacante.

Se prevé un sistema de consideración hacia los primeros secretarios y consejeros que no hayan sido promovidos en diez años procediéndose, previo dictamen de la junta calificadora, a su promoción automática con obligación de retiro a los dos años siguientes.

A la exigencia de satisfacer cursos de perfeccionamiento en el Instituto del Servicio Exterior, establecida para los primeros secretarios y consejeros, se la completa con la sanción de separación del servicio si no aprobaran dichos cursos en dos oportunidades.

Con el fin de no desaprovechar los conocimientos adquiridos en los largos años de servicio, sufragados por el Estado, se elevan los límites de cese por edad a 70 años para embajadores, 67 para ministros y 65 para las restantes categorías.

Con el propósito de tender a la estructuración de una verdadera carrera, se dispone que el cuerpo permanente pasivo puede ser convocado si exigencias del servicio así lo requieren, y así mismo se establece que debe continuar sujeto a las obligaciones, limitaciones e incompatibilidades propias de los funcionarios en actividad.

Con igual finalidad se introduce la prohibición de representar a firmas comerciales o intereses extranjeros en el país o hacer gestiones en su favor, a fin de ir sometiendo cada vez a mayores exigencias la carrera diplomática, sobre la base de aventar posibles arribistas y abrirla, en cambio, a quienes demuestren poseer acendrada vocación de servicio.

Se establece la prohibición de prestar servicio en el país extranjero del que fuera originario el cónyuge, salvo que éste tuviera ocho años en el ejercicio de la ciudadanía argentina o hubiera residido igual tiempo en la República.

Prohíbese tanto a los funcionarios del cuadro permanente activo que se retiren o jubilen, así como también a los embajadores designados directamente por el Poder Ejecutivo, conforme con el artículo 5º, a los agregados especializados y a los agregados laborales, formar parte de directorios o ejercer cualquier tipo de funciones honorarias o remuneradas, relacionadas con empresas de intereses extranjeros.

Para encauzar la actividad del funcionario hacia la dedicación exclusiva, se le prohíbe ejercer la docencia. Sólo se le podrá autorizar en el ámbito universitario, siempre que no interfiriera en la dedicación y eficiencia que debe a su función.

Se introduce una nueva causal para perder el «estado diplomático», consistente en la pre-

sentación en concurso civil o en ser declarado fallido.

Se incorpora a la estructura un consejo asesor denominado Consejo Superior de Embajadores, en el que se da cabida, en proporción determinada, a embajadores que hayan cumplido 65 años de edad y también a los que sin tener esa edad hayan adquirido una antigüedad de por lo menos 12 años en el rango. Para dicho consejo se limita el número de integrantes y su duración a fin de poder mantener cierta fluidez en los egresos superiores.

A fin de agilizar las tareas de la Junta Calificadora se reduce el número de sus miembros y se ajustan sus funciones en consonancia con las disposiciones de la ley.

Se crea un Tribunal de Honor que tiene como objetivo asegurar en los cuadros un estilo profesional más genuino y una conducta personal, el que dictaminará sobre si las acciones u omisiones en que ha incurrido el funcionario imputado, o su estilo de vida, vulneran el honor del cuerpo diplomático argentino.

Se restaura la disponibilidad para quienes desempeñaren funciones electivas y mientras dure su mandato.

En los casos de traslado se reduce de 45 a 30 días el plazo para que el funcionario emprenda viaje y se haga cargo de su destino.

Consecuentemente con lo instituido en la ley de ministerios, y para acentuar los propósitos de la integración latinoamericana, se establece para los funcionarios la obligatoriedad de prestar servicios, por lo menos en dos oportunidades, en países de Latinoamérica. Igualmente, se exige desempeñar funciones consulares en dos oportunidades como mínimo, para contribuir a la capacitación integral del funcionario.

En función de que la tarea diplomática se cumple en forma más completa cuando en ella opera la actividad de ambos cónyuges, a lo que se agrega la necesidad de fomentar el mantenimiento de la unidad conyugal, se propone la sanción de la norma que disminuye los lapsos para que los funcionarios tengan derecho al pasaje para su cónyuge cuando cumplen misiones transitorias.

Se establece una sobreasignación más justa para retribuir a las encargadurías de negocios, fijándola en un 20 por ciento de la remuneración del jefe de misión, en lugar del 30 por ciento del sueldo del funcionario.

Se fija un sentido funcional general a la partida para atender gastos de representación, al determinarse claramente que no se trata de una asignación de carácter personal para el jefe de misión, sino que tiene por objeto atender los compromisos protocolares oficiales de todos los funcionarios de la representación, conforme lo establezca la reglamentación.

Se actualiza el régimen de licencias y se introducen algunas variantes que hacen al mejor

servicio y velan por el mantenimiento de las condiciones psicofísicas de los funcionarios.

Se introduce el principio de que cuando los subsecretarios del ministerio sean designados entre los funcionarios de carrera, serán elegidos de la dotación de embajadores para mantener el adecuado nivel jerárquico.

Por la calificada representación que ejercieron en nombre de la Nación, por la que les exige mantener el estado diplomático de que están investidos y por continuar sometidos al régimen de las obligaciones, de las incompatibilidades y limitaciones aun después de pasar a integrar el Cuerpo Permanente Pasivo, se han extendido los gastos de sepelio y luto a los derechohabientes del jubilado y retirado.

Consecuentemente con la disposición del inciso f) del artículo 11, a partir de la sanción de la ley se prohíbe a los funcionarios contraer matrimonio con extranjeros que no hayan previamente obtenido la carta de ciudadanía argentina.

Se refuerza el concepto de que la autoridad máxima de la República en el país en que está acreditada es el embajador, y se le subordinan jurisdiccionalmente todos los organismos de carácter estatal, con evidente beneficio para la imagen del país en el exterior y el éxito de la gestión internacional de la Nación.

Con el objeto de obviar los inconvenientes que en algunos países ocasiona la no tenencia del pasaporte diplomático, y para la misma seguridad del propio agente, se asigna rango diplomático de tercer secretario de embajada al personal administrativo técnico-profesional, mientras permanezca en funciones en el exterior.

Por razones orgánicas que hacen a la eficaz prestación de la importante función que cumplen, se hace depender directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Cere monial del Estado, que actualmente depende de la Casa Militar.

A efectos de reajustar la situación de revista de los funcionarios con jerarquía de ministro plenipotenciario como consecuencia del desdoblamiento de dicha categoría, se establece el mecanismo a aplicarse.

Con el propósito de regularizar las situaciones injustas que puedan producirse como consecuencia de la aplicación lisa y llana de las disposiciones contenidas en los incisos f) de los artículos 18 y 37, se autoriza a la junta calificadora, por esta única vez, a proponer el reescalafonamiento de aquellos funcionarios que hayan sido evidentemente postergados sin causa en sus ascensos.

Consecuentemente con lo indicado en el punto anterior, se faculta por esta única vez al ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que hasta el 31 de diciembre de 1974 pueda efectuar promociones sin tener en cuenta la permanencia en categoría y la aprobación de cursos.

De las innovaciones mencionadas explicitaremos, para no extendernos, las más importantes, comenzando por la creación del Consejo Superior de Embajadores y del Tribunal de Honor.

La misión que se acuerda al Consejo Superior de Embajadores es la de órgano «asesor» en asuntos de especial relevancia que conciernan a la conducción general del ministerio, tal como lo expresa el artículo 26, sin que ello constituya una superposición de funciones con los organismos de cancillería que cumplen funciones específicas, cuya atención les reclama la dedicación exclusiva, por la complejidad propia de los asuntos que se tramitan y deben resolverse a nivel de la estructura orgánica.

La integración del Consejo de Embajadores no constituye óbice para que el funcionario sea designado en una misión permanente o transitoria en el exterior, como lo señala el artículo 30, si razones de servicio así lo exigieren.

En el proyecto se establece que para integrar el consejo se requiere tener la jerarquía de embajador y más de sesenta y cinco años de edad. Pero además se ha considerado de alta conveniencia conferirles el derecho a integrarlo a aquellos funcionarios que sin haber alcanzado esa edad, hayan revistado por lo menos doce años en el cargo de embajadores, término que se ha fijado en virtud de que permite suponer fundadamente la adquisición de una experiencia fecunda, que puede y debe ser aprovechada en beneficio de la conducción de las relaciones exteriores.

El artículo 11 del proyecto determina en su inciso c), que para pertenecer al servicio exterior de la Nación es indispensable conducirse en forma honorable, pública y privadamente. El desempeño honesto y correcto se tutela con las normas disciplinarias. La conducta honorable, pública y privada, mira a otros valores que hacen, en lo personal, a la dignidad de cada uno: y en lo social y exterior, a la fama o prestigio que debe ser inherente a la condición de funcionario del servicio exterior. La creación del Tribunal de Honor, sin perjuicio de las normas disciplinarias, permite revisar las conductas que puedan resultar menoscabantes de la honra consubstanciada con la condición de integrante de este servicio, aconsejando las distintas medidas que la ley prevé.

El proyecto fija en un máximo del treinta por ciento, como lo expresé anteriormente, las designaciones como embajadores de personas ajenas al cuadro permanente y solamente en el nivel de embajador. La ley vigente no establecía esa limitación expresa y sólo lo autorizaba con carácter excepcional, lo que importa una limitación aparentemente más estricta en su espíritu, pero mucho más lata en su aplicación, si nos remitimos a la experiencia de mucho tiempo.

El proyecto estructurado tiene por objeto la organización del servicio exterior con el propósito esencial de obtener el instrumento humano

idóneo capaz de la mayor eficiencia en el cometido que le corresponde en la ejecución de la política exterior del país. Dentro de ese concepto, la carrera diplomática se estructura poniendo en la cúspide de la misma el cargo de embajador, al que sólo llegarán los que hayan acreditado los mayores méritos y demostrado mejores condiciones a lo largo de su desempeño en el servicio.

Estos funcionarios, altamente capacitados y seleccionados, son los que se encuentran en las mejores condiciones para asumir con eficacia el cumplimiento de las tareas propias de cada servicio. Sin embargo, no puede desconocerse, porque sería negar la realidad, la conveniencia de que en determinadas circunstancias el Poder Ejecutivo designe excepcionalmente a un funcionario ajeno al servicio exterior para que asuma su representación y por ende la jefatura de la misión diplomática en el destino prefijado. Con ello se da al sistema una adecuada flexibilidad, que, al par que posibilita al Poder Ejecutivo el uso de esta prerrogativa mediante el acuerdo del Senado, asegura la posibilidad de la culminación de su carrera para los integrantes del cuadro permanente, que tendrán la certeza de que el setenta por ciento de las vacantes de la categoría máxima serán cubiertas con funcionarios de carrera.

Otra disposición importante es la que prescribe la subordinación jurisdiccional de todos los organismos al embajador a fin de asegurar una coordinación de esfuerzos y una mejor atención de los intereses argentinos, con evidente beneficio para reflejar la imagen del país en el exterior.

Es evidente que la acción diplomática no se puede ejercitar aisladamente, independiente de todas las actividades que puedan realizar los diferentes organismos nacionales en el exterior, donde a veces designan representantes o instalan oficinas. Una eficiente acción del país en el exterior exige una constante y fluida coordinación de los distintos organismos, y especialmente que aquel que tiene a su cargo la responsabilidad de la política exterior posea un completo conocimiento del accionar del país en el lugar.

La falta de coordinación entre distintos organismos que ejecuten políticas paralelas sin comunicación, y lo que es más, sin una conducción que en determinado momento pueda unificarlos, importaría no sólo una duplicación de esfuerzos sino, lo que es más grave, el riesgo de acciones no concurrentes que podrían frustrar la mejor posibilidad nacional.

Por el artículo 3º se crean las categorías de ministro plenipotenciario de primera y segunda clase, como ya he dicho. A los efectos del reescalafonamiento del personal, el artículo 101 dispone que los funcionarios, ministros plenipotenciarios, que actualmente se desempeñan en esa categoría y que pasaron a revistar como ministros plenipotenciarios por o durante la vigencia

del decreto ley 19.300, pasarán a ser ministros plenipotenciarios de segunda clase desde la vigencia de esta ley, mientras que el resto revisitará como ministro plenipotenciario de primera clase.

El decreto ley 19.300, del año 1971, como acabo de explicar, unificó las dos categorías de consejero y las dos de ministro plenipotenciario que tenía el régimen legal anterior. Ello posibilitó que un consejero de segunda clase, mediante una sola promoción, ascendiera dos categorías saltando las de consejero de primera y de ministro plenipotenciario de segunda, lo que no habría ocurrido si se hubiera mantenido la vigencia del decreto ley 17.702/68 o el régimen de la ley 12.951.

El restablecimiento de las dos categorías en las jerarquías de ministros plenipotenciarios que requieren para su provisión el acuerdo del Senado, constituye una verdadera necesidad orgánica y del servicio y, al mismo tiempo, permitirá abrir el escalafón y prolongar la asimilación y el aprovechamiento de la experiencia antes de llegar al último grado de las jerarquías del servicio exterior.

Por su parte, la disposición transitoria del artículo 102 establece que la Junta Calificadora procederá, dentro de los noventa días, a proponer, en base a sus antecedentes y elementos de juicio, el reescalafonamiento, por esta única vez, de aquellos funcionarios que hayan sido evidentemente postergados en sus ascensos sin que mediaren justificativos para esa postergación.

El dictado de esta norma es fundamental pues se asienta en la necesidad de corregir las distorsiones operadas en el escalafón con motivo de movimientos de personal realizados en función de las disposiciones legales que modificaron la ley 12.951, sin prever que la falta de armonización de las mismas produciría el desajuste de la posición escalafonaria de muchos funcionarios y postergaciones injustificadas y, por lo tanto, arbitrarias. La norma proyectada permitirá, por única vez, normalizar la situación de revista de funcionarios cuyos antecedentes lo justifiquen.

Nos vamos a referir, por último, a las modificaciones del proyecto del Poder Ejecutivo propiciadas por la comisión con el objeto de aclarar, perfeccionar y completar la ley.

En primer término se propone la supresión del acápite contenido en el proyecto por entender que la ley debe contener esencialmente disposiciones normativas y que además las funciones que competen al Ministerio de Relaciones Exteriores como órgano cabeza del servicio exterior de la Nación se encuentran establecidas en la ley orgánica de ministerios. Por consiguiente, se estima que dentro de la economía del proyecto, y por razones de técnica legislativa, no encuentra suficiente justificación ni es de necesidad un acápite con definiciones acerca de la eventual función del servicio exterior, ya que esta ley regula la estructuración orgánica de su personal,

sus deberes y derechos, pero en lo que concierne a las funciones que como órgano asesor y coadyuvante del Poder Ejecutivo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las mismas se encuentran enumeradas y definidas por la ley 20.524, orgánica de ministerios.

En el artículo 99, disposición que se refiere a los agregados especializados, se ha introducido la modificación de establecer que los agregados pertenecientes al Servicio Económico Comercial Exterior se designarán a requerimiento del Ministerio de Economía y que, sin perjuicio de su subordinación al jefe de misión, mantendrán dependencia del Ministerio de Economía, en cuanto se refiere a materias específicas de su función, pero con la condición de que las instrucciones que reciban tanto ellos como los agregados de las fuerzas armadas antes de ser ejecutadas, deben ser puestas en conocimiento del jefe de la misión a los efectos de mantener la coordinación indispensable y la conducción única en los asuntos internacionales.

Es de todos conocido, y obedece a una imperativa necesidad nacional, la intensa acción de promoción de las exportaciones y del intercambio comercial exterior en que se encuentra empeñado el gobierno. La acción en el exterior que debe cumplir el Ministerio de Economía en ejercicio de la competencia que le asigna la ley 20.524, dentro de las cuales se encuentra la elaboración y ejecución de las políticas de comercio exterior, hace preciso que los funcionarios del Servicio Económico Comercial Exterior mantengan con el Ministerio de Economía su dependencia funcional, sin perjuicio de la dependencia jerárquica del jefe de misión que unifica la acción y la oportunidad de la gestión.

De esta manera las instrucciones y las gestiones se realizarán con la dinámica de urgencia y de canales ágiles y directos que el comercio internacional actualmente exige y además se obtiene la unificación de la acción y oportunidad de la gestión en el país extranjero.

En el artículo 18 se rectifica el inciso d), dejando aclarado que la condena que produce la separación del cuerpo permanente activo debe obedecer a delitos no dolosos, ya que la condena por delitos dolosos produce la pérdida del estado diplomático, conforme al artículo 25, inciso c), al cual remite.

Así mismo, en esta disposición se agrega como causal de egreso del cuerpo diplomático el vencimiento de los plazos en disponibilidad sin haber sido reincorporado.

Se modifica el artículo 13 estableciéndose que la exigencia de la edad límite para ingresar al Instituto del Servicio Exterior es de 33 años.

Así mismo, se introduce la exigencia de que el título universitario requerido debe ser el expedido con validez nacional, o sea, reconocido por nuestras universidades o autoridades encargadas de la conducción de la enseñanza terciaria, a fin de evitar que numerosos títulos o di-

plomados universitarios que otorgan facultades extranjeras y que no habilitan en modo alguno para la función diplomática, pudieran ser utilizados para cumplir con el requisito legal.

En el artículo 20 se suprimen entre las funciones consulares las de realizar las que corresponden a los escribanos de Marina, por el hecho de que por decreto ley 15.247/56 fueron suprimidas las escribanías de Marina cumpliendo sus funciones las escribanías de registro, y por consiguiente, al establecer la ley que realizarán los actos que corresponden a los escribanos públicos, queda comprendido las que antes tenían a su cargo las escribanías de Marina.

En el artículo 21 se suprime en el inciso j) la inclusión de «destinos de difícil adaptación» como lugares de régimen especial con permanencia reducida y cómputo doble del tiempo, por entenderse que ya la existencia de lugares peligrosos o insalubres cumple acabadamente el objetivo. Por otra parte, así como los lugares peligrosos —por ejemplo, en estado de guerra, lucha civil— o insalubres —zonas endémicas, etcétera— son fácilmente determinables con criterios objetivos y generales que valen para todos, en cambio, el concepto «de difícil adaptación» es totalmente subjetivo y sin valor general, ya que la facilidad o no de adaptarse a un destino depende de cada persona y de su particular modalidad. Se entiende que un beneficio excepcional como es la limitación o reducción del tiempo de permanencia y el cómputo doble de servicio sólo puede obedecer a criterios objetivos y generales y no a pautas subjetivas y particulares que pueden distorsionar el propósito de la ley.

En el artículo 22, dentro de las obligaciones del personal diplomático se agrega la de no abandonar su puesto y continuar prestando servicios en caso de renuncia hasta que la misma sea aceptada y sea substituido por su reemplazante. Es obvio que los intereses nacionales, especialmente en el exterior, exigen que el funcionario, aunque renuncie, debe permanecer atendiendo hasta que sea legalmente substituido.

Por último, en el artículo 25 se perfecciona la redacción, dejándose expresamente aclarado que la pérdida del estado diplomático por renuncia se produce cuando se renuncia concretamente a dicho estado, puesto que en caso contrario la renuncia sólo tiene el efecto de producir la separación del cuerpo permanente activo, como lo señala el artículo 18.

Además, se ha agregado como causal de pérdida de dicho estado diplomático la resolución del tribunal de honor que así lo aconseje conforme el artículo 41, inciso d). A su vez, el agregado hecho al artículo 33 establece que los embajadores que no hubieren sido sorteados para integrar el Consejo Superior de Embajadores, deberán acogerse al beneficio del retiro o jubilación, salvo excepción debidamente fundada por resolución ministerial. Ello es así, atento a que según la ley los embajadores que

cumplieron 65 años de edad pasan automáticamente a revistar en el ministerio y no haberse dispuesto el destino que tendrían quienes no fueren sorteados para integrarlo.

Los artículos 38, 39, 40 y 41, relativos a los tribunales de honor, han sido modificados a efectos de establecer con claridad sus atribuciones, los principios básicos de procedimiento que aseguren la más estricta imparcialidad, el derecho de defensa y la sanción de quienes los promovieren arbitrariamente. En igual forma, se prevén las decisiones a que puede arribar un tribunal de honor y en qué caso se formará el mismo, así como la responsabilidad de quien lo promueva temeraria o maliciosamente, quienes deberán integrarlos, las incompatibilidades o inhabilidades para ello y las diferentes conclusiones y sus efectos.

Se modifica el artículo 43, referido al régimen de sanciones disciplinarias, por entender que el mismo no tenía, en primer lugar, la claridad que requiere una disposición de esta naturaleza. Por otra parte, se dejan perfectamente establecidas las causales motivantes de sanciones disciplinarias —negligencia, indisciplina, incumplimiento de las disposiciones reglamentarias—.

Así mismo, se ha suprimido la sanción de disponibilidad que hasta por un lapso de dos años y sin sumario previo podía aplicar el ministro a los funcionarios de la categoría «A» —embajadores—, según el proyecto del Poder Ejecutivo, por entender que por la gravedad de esta sanción, durante la cual no percibirían remuneración alguna, resultaba incompatible con la economía y el propósito de la ley y, además, que las sanciones establecidas para dichos funcionarios por su entidad resultan ya suficientemente adecuadas a su responsabilidad y a las necesidades disciplinarias de la institución.

En la modificación introducida al artículo 45 se deja expresamente establecido que toda suspensión por más de treinta días, así como las sanciones disciplinarias de disponibilidad, cesantía y exoneración previstas en el artículo 43 para el personal de categoría «B» —ministro plenipotenciario de primera clase— a «G» —secretario de embajada y cónsul de tercera clase—, no podrán ser impuestas sin sumario previo, consignando que la reglamentación deberá establecer las normas que garanticen y aseguren el ejercicio del derecho de defensa por parte del funcionario objeto del sumario.

La modificación introducida en el artículo 49 tiene por objeto, en primer lugar, dejar aclarado que la sanción de disponibilidad que prevé el artículo 43 para el personal de categorías «B» a «G» no podrá exceder de un año. Y, por otra parte, se faculta al ministro a que, por razones de servicio, pueda pasar a disponibilidad a los funcionarios de categoría «A», hasta por un período de dos años, lapso durante el cual percibirán el cincuenta por ciento de sus emolumentos, como establece la modificación que también

se propicia al artículo 53. Se ha suprimido la facultad de sancionar con disponibilidad hasta dos años y sin sueldo como establecía el primitivo artículo 41, pero se entiende que por razones de servicio puede ser excepcionalmente necesario al canciller ordenar la disponibilidad de un funcionario de categoría «A», estableciéndose el límite temporal y el haber que percibirá durante ese lapso.

Los artículos 50 y 51, referidos a los plazos de disponibilidad y formas de computar el período, sólo han sido objeto de modificaciones formales para adecuarlos a las reformas introducidas al artículo 49, o corregir errores materiales y de redacción que tenía el proyecto.

En el artículo 53 se establece que el funcionario de categoría «A» puesto en disponibilidad por razones de servicio percibirá el cincuenta por ciento de su haber mensual. Según el proyecto del Poder Ejecutivo no percibía suma alguna. Así mismo, y a fin de evitar interpretaciones contradictorias, se deja expresamente establecido que el reintegro al servicio de todo funcionario en disponibilidad se produce automáticamente al término de la misma, es decir, no dependerá de una decisión que podría, por esa vía, prolongar *sine die* la disponibilidad, con el perjuicio que significa, atento la reducción del sueldo que importa.

Por otra parte, se ha suprimido la facultad de cubrir presupuestariamente el cargo del funcionario en disponibilidad, el que, en consecuencia, no está vacante sino que permanece ocupado por el funcionario, ya que la disponibilidad no altera su situación de revista, cualesquiera sean los efectos que produce sobre la obligación de prestar servicios y la remuneración.

Por último, el artículo 90 del proyecto del Poder Ejecutivo otorgaba validez a los estudios cursados en universidades extranjeras y, así mismo, autorizaba a ejercer la profesión en el país sin necesidad de reválida. La comisión ha entendido que quienes perteneciendo al cuerpo diplomático realicen estudios en el extranjero para ejercer su profesión en el país deben ajustarse a las reglamentaciones de las universidades nacionales y rendir los exámenes propios de la reválida. El mismo criterio se aplicará con todo tipo de estudios, ya sea de nivel primario, secundario o terciario, se trate de carreras terminadas o cursadas parcialmente, de tal modo que quienes pretendan hacerlos valer en el país deben someterse a las reglamentaciones vigentes dictadas por las universidades nacionales o por los organismos de conducción de la enseñanza en los distintos niveles. Es decir, que se mantiene así un trato igualitario con todo habitante del país que sale al exterior a cursar sus estudios y, además, se adecua el ejercicio profesional a las modalidades y necesidades de nuestro país.

Estos son los lineamientos generales del dictamen de la comisión con respecto al proyecto

de ley para el servicio exterior. La política internacional de la Argentina de hoy, consciente de su destino histórico y lanzada a la búsqueda de sus grandes vías, necesita un cuerpo de ejecutores adecuado a esa realidad y a ese futuro.

Además, la política internacional tiene un carácter instrumental y persigue la seguridad y el desarrollo del país. Este último aspecto no se refiere solamente al crecimiento económico sino que se tratan de alcanzar los fines valiosos que la comunidad se ha propuesto, esto es, la plena participación política de toda la ciudadanía, la integración de todos los sectores sociales y regionales naturales incorporándolos a la producción moderna y al consumo, la instauración de un orden social justo para asegurar la paz interna y el bienestar de todos los habitantes, poniendo a su alcance los bienes materiales y espirituales que la civilización ha creado.

El proyecto de ley que hoy estamos considerando también sirve a estos objetivos, porque contribuirá a ejecutar una política exterior independiente y a fortalecer nuestro poder de decisión.

—Ocupa la Presidencia el doctor Américo Alberto García, vicepresidente 2º del Honorable Senado.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: no cabe duda de que el perfeccionamiento del servicio exterior de la República tiene el rumbo de mejorar una herramienta fundamental como es el manejo de nuestras relaciones exteriores, en esta etapa de imprescindible recuperación de muchos aspectos de la vida argentina.

El exhaustivo informe del señor miembro informante me releva de caer en el detalle del estudio de la ley, en muchos de cuyos aspectos nosotros coincidimos, y por eso, en nombre de nuestro sector, hemos firmado el despacho con disidencias parciales.

Se dijo bien aquí que los profesionales del servicio exterior sirven al prestigio de la República. No siempre ese prestigio se expresa por la superficie del país, por su población importante o por su poderío militar. En el mundo internacional ello se logra, casi siempre, por medio de su rumbo moral en los negocios externos; en la afirmación de un frente internacional que señale una actitud de conjunto nacional o en la muestra de su estabilidad democrática.

Estamos estudiando una ley que viene marcando un corolario de un proceso de legislación que lo podríamos iniciar en 1905, cuando se dicta la ley 4.711. En 1944 se aprueba un Estatuto Orgánico para el Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del decreto 30.991/44, el cual fue ratificado por ley 13.891. En 1946 se sanciona la ley 12.951 de organiza-

ción del servicio exterior, cuyo decreto reglamentario lleva el número 5.128/48. Posteriormente sufrió varias modificaciones, en muchas de cuyas discusiones participó nuestro sector, como cuando se reformó el artículo 10 de la citada ley, sancionándose la que lleva el número 16.486.

Por el decreto 16.906/66 se creó una junta de disciplina en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, el decreto 17.702/68 modificó las disposiciones de la ley 12.951 y su modificatoria, 16.486, siendo luego substituido por el decreto ley 19.300 del año 1971.

El servicio exterior es una función pública que no puede constituir privilegio, sino que, por el contrario, representa una afirmación eminentemente patriótica.

El mundo contemporáneo se ha interdependizado como consecuencia de la revolución técnica y científica que va acortando las distancias geográficas y el tiempo y, entonces, toda la vieja diplomacia —la de Bizancio, la de la Edad Media y hasta la del Congreso de Viena en 1815— quedó atrás en el juego de relación entre las naciones. Y todo aquello que a lo largo de miles de años fue engendrando el mundo es dejado de lado, porque en veinte años la evolución técnica y científica ha avanzado a pasos tan agigantados que dentro de poco los aviones cubrirán la distancia París-Buenos Aires en cuatro horas.

Es decir que este mundo crea desafíos distintos para respuestas también distintas. Nosotros, señor presidente, que deseamos ubicar a nuestra República en este mundo conflictuado y con preguntas importantes, tenemos que tratar de formar un hombre argentino para integrar el servicio exterior que comprenda que es el representante de la Argentina en el extranjero y que los países miran en él, en función de los hombres a quienes está representando, a nuestra República.

Esto es importante destacarlo porque, evidentemente, habrá que reconocer, salvo honrosas excepciones, y a veces no tanto, que nuestro servicio exterior no representaba idealmente lo que nosotros queríamos para los argentinos.

Los hombres de nuestro servicio exterior deben ser soldados apasionados de nuestra vigencia institucional. Lamentablemente, en todos los tiempos hemos visto que muchos de ellos, que constituían la expresión del país en el extranjero, eran simplemente intrascendentes burócratas internacionales.

Si queremos dar la imagen que merece nuestra República, que tiene uno de los mayores índices de alfabetismo del mundo y que en su historia nunca utilizó estrategias inmorales; si deseamos continuar en la senda que nos supieron legar algunos de nuestros importantes estadistas, diplomáticos y políticos, debemos tener la imaginación necesaria, como legisladores, para dictar la ley que posibilite la más alta eficiencia de nuestro servicio exterior, lo que

descuento que constituye seguramente la aspiración mejor de los señores senadores.

Toda la bibliografía de la diplomacia ha ido quedando un poco atrás, al igual que sus definiciones. Alguien decía que sus integrantes eran «los negociantes». Actualmente el negocio se mezcla con una serie de actitudes indispensables para el hombre de nuestro servicio exterior. Por ejemplo, actualmente no predominan los negocios exteriores bilaterales, sino que existe una dicotomía entre relaciones multilaterales en función de los organismos internacionales y relaciones bilaterales entre las naciones. Antes parecía que el mundo era la guerra o la negociación; luego de la bomba atómica se ha comprendido que ésa no puede ser la disyuntiva.

Pienso que esta ley tiene que servir a una democracia que viene transitando el camino de las relaciones internacionales, en el que tendrá que perfeccionarse. Estoy de acuerdo con el señor senador Luder en cuanto a que tenemos que crear las condiciones de una tecnificación y una profesionalización de nuestro servicio exterior, sin creer por ello que no hay otros hombres en la República que en circunstancias trascendentes, con su capacidad y su rumbo intelectual, puedan crear tal vez mejores condiciones que algunos diplomáticos de carrera.

Advierto que esta ley quizá no es totalmente completa. También es cierto que las grandes causas de la República hacen olvidar las circunstancias en las que a veces el país no salió con dignidad. Nadie se acuerda de que un embajador de la dictadura militar propuso en 1967 en Buenos Aires la formación de la Fuerza Interamericana, pero todos tienen presente que la Argentina dijo un día al mundo que la victoria no da derechos. Nadie se acuerda de la carta de Storni a Cordell Hull, en 1944, pero todos tienen presente la doctrina Drago. Nadie se va a acordar de una negociación como la que se hizo con Libia, donde el país va a recibir el barril a más dólares que el precio internacional. Los negocios internacionales tienen que servir para crear las condiciones de nuestra liberación.

Por eso la diplomacia hoy dejó de ser la juguetería de los viejos salones del rococó, para transformarse en una militancia apasionada al servicio de las causas del país, al que el integrante del servicio exterior debe interpretar.

Por eso, el hombre del servicio exterior tiene que beber en las raíces del propio mundo argentino, porque sin interpretar a ese mundo no nos podrá representar. Sin amarlo nos representará deficitariamente; sin comprenderlo irá cometiendo alguna de las faltas de las anécdotas negativas que he señalado de otras circunstancias.

Esta es una ley, como lo expresó el señor miembro informante, que crea todo el espectro de las posibilidades de manejo de nuestras relaciones exteriores, en función del servicio exterior de la Nación. No he de decir que la ley sea mala, pero para mí no es todo lo buena que

quisiéramos. En nombre de mi partido me reservo, pues, la instancia necesaria para que, con un estudio mesurado, entre todos podamos rellenar los pequeños resquicios de los muy lógicos errores humanos que esta ley tiene.

De todas maneras creemos que es un paso en la perfección de nuestra legislación, y a lo largo de su articulado crea algunas condiciones que evidentemente implican un mejoramiento con respecto a lo anterior.

Estoy de acuerdo con que en la comisión se haya suprimido el acápite que traía el proyecto de ley, pues cometía el error de decir que el servicio exterior es el órgano que representa al Estado.

Esta ley crea la integración, en el servicio exterior, del cuerpo permanente activo, el cuerpo permanente pasivo y el servicio de agregados laborales, que está constituido por el personal adscrito al servicio exterior, propuesto por la Confederación General del Trabajo a requerimiento del Ministerio de Trabajo.

Aquí se me ocurre que si hubiéramos seguido legislando con el mismo sentido de integración que nuestro bloque busca, tal vez hubiese sido justo decidir que en la propuesta de la Confederación General del Trabajo tuvieran participación las minorías a través de una ley de asociaciones profesionales con este contorno. Debemos tener en cuenta que, dentro del ritmo actual de integración de la República, hubiera sido más aceptable que los representantes a proponerse estuvieran, como nosotros, buscando afanosamente la unidad nacional.

No estoy de acuerdo con la creación, por el artículo 3º, de dos cargos de ministros plenipotenciarios, de primera y segunda clase. Advierto que después de anular nuestro país las legaciones y de acuerdo con la modalidad actual de las relaciones diplomáticas, no es aconsejable crear un nuevo escalafón. A nuestro criterio no tiene sentido el desdoblamiento.

Se faculta al Poder Ejecutivo, como es lógico, a designar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, en una proporción del 30 por ciento. En esto nosotros no tenemos ningún tipo de problemas, porque pensamos que constitucionalmente el manejo de las relaciones exteriores del país está a cargo del presidente de la República. Por eso, incluso esta ley establece que el ingreso a la carrera se hará exclusivamente por la categoría G, o sea por el Instituto del Servicio Exterior y los cursos correspondientes.

Yo no sé si en este aspecto el interrogante que me planteo es legítimo, pero pienso que por este artículo podrían crearse las condiciones para establecer un porcentaje, no sé si del 15 o del 20 por ciento, bajando el 40 por ciento que existía en el artículo 10 de la ley 12.951. Podría ser por nombramiento directo del Poder Ejecutivo por esta circunstancia de excepción que a veces se da en el ámbito de la actividad internacional. Si bien es cierto que está contemplada en algunos

de los artículos con carácter transitorio, pienso que podría ser más perfecto si se dejara la puerta abierta para darle categoría permanente. Esto no lesiona la estabilidad en el alto concepto que deben merecer los hombres que intervienen en este proceso de nuestro servicio exterior. Pero pienso que crear esta posibilidad sería útil y más fluido para el manejo de nuestras relaciones.

El artículo 8º crea, a mi criterio, un interrogante. Por este artículo se permite desempeñar temporalmente las jefaturas de las misiones diplomáticas a los funcionarios de las categorías B y C. Esta norma rige también en la actualidad. En la práctica ocurre que existen numerosos jefes de misión que desde hace años se desempeñan como tales sin ser embajadores. Estos funcionarios, por otra parte, no desean ser ascendidos al rango de embajador. De esa manera, prolongan su carrera en el ministerio. Este régimen parece injusto pues no permite la renovación natural del servicio, en perjuicio de las jóvenes generaciones, y otorga una serie de ventajas económicas a funcionarios que por su rango no son acreedores a las mismas.

Podrá argumentarse que este sistema es empleado en algunos países como Italia y Francia; pero debe señalarse que en ellos el número de embajadores es mucho menor que en la Argentina.

Estamos de acuerdo con que todos los agregados militares o los designados por los distintos ministerios dependan siempre del jefe de la misión, porque pensamos que ello da coherencia y unidad a la actitud argentina en el exterior.

Por el artículo 13 se establece que el ingreso en el cuadro permanente activo se efectuará exclusivamente por la categoría G, una vez aprobados la admisión al Instituto del Servicio Exterior de la Nación y los cursos correspondientes. Ya preanuncié que soy partidario de que se establezca un porcentaje que podría ser el 20 por ciento, y que el mismo siga en cierta medida disminuyendo el establecido por la modificación del artículo 10 de la ley 12.951, que se transforma luego en ley 18.848.

En el artículo 13 se establece también que quienes no aprobaran los cursos o los demás requisitos exigidos podrán presentarse nuevamente y por última vez siempre que continúen reuniendo las condiciones básicas requeridas, pudiendo reintegrarse al instituto, pero sin el derecho a ser becados en caso de su readmisión. Yo considero que tendríamos que eliminar "... pero sin el derecho a ser becados en caso de ser readmitidos". Todos, señores senadores, hemos debido rendir examen en alguna oportunidad y sabemos que a veces el resultado no refleja fielmente la real capacidad y conocimiento.

Considero que la modificación que propongo significa un aliento para muchos hombres y hace al proceso de democratización que deseamos. Si un hombre rinde satisfactoriamente su segundo examen debe adquirir también el derecho a ser

becado en caso de ser readmitido. Puede tratarse de una persona de extracción humilde que no haya tenido los medios para seguir el curso. Si tenemos en cuenta esta observación, estaremos creando la posibilidad de incorporar las clases populares a la conducción política de los negocios exteriores, lo cual servirá también a la comprensión que yo solicitaba hace un momento.

Estamos totalmente de acuerdo con que los ascensos se hagan, exclusivamente, a la categoría inmediata superior, porque esperamos que no se repitan algunos hechos que no sirven para nada, como el de los ascensos de algunos comisarios retirados.

Con respecto a los egresos —para abreviar mi exposición— el proyecto establece que «los funcionarios de las categorías A, B y C que fueran removidos previo acuerdo por parte del Honorable Senado de la Nación», dejarán de pertenecer al servicio exterior. Lo mismo ocurriría con «aquellos funcionarios a quienes se aplicara a resulta de un sumario la sanción de cesantía o exoneración».

Aquí deseo proponer un agregado —que oportunamente me ha permitido advertir la comprensión del miembro informante de la mayoría, señor senador Luder— en el sentido de que aclaremos que hay gente que ha sido separada por razones ajenas a su voluntad. Podríamos hacer un agregado en el inciso c) del artículo 18, que quedaría con el siguiente texto: «Aquellos funcionarios a quienes se aplicara a resulta de un sumario la sanción de cesantía o exoneración, o separados por causas ajenas a su voluntad». Este agregado lo propondré en su momento, pero lo anuncio ahora.

También se establece la separación del servicio exterior según las edades: «setenta años en la categoría A; sesenta y siete en la categoría B y C, y sesenta y cinco años en las restantes categorías».

Pasamos al capítulo III, «Del estado diplomático», en el que se establece que «el grado de cada funcionario del servicio exterior de la Nación con las funciones, los derechos, obligaciones y prohibiciones inherentes al mismo instituidos por la presente ley y su reglamentación, constituyen el estado diplomático, del que no podrá ser desposeído su titular sino por las causales establecidas por la Constitución y esta ley».

Después se refiere a las funciones, aspecto que ha explicado muy bien el señor miembro informante. Entre ellas se señala la obligación de «promover los intereses de la República en la comunidad internacional, sostener los derechos que le acuerdan los tratados, costumbres y usos internacionales», etcétera.

Luego enumera los derechos, que son, por supuesto, el de «usar el título y tratamiento que les acuerda su rango»; el de «gozar de estabilidad», amparada por la Constitución; el de «percibir los sueldos, retribuciones y otras asignaciones que correspondan a la categoría», etcétera.

En esta parte referida a los derechos, con sentido social el proyecto contempla la retribución «en concepto de compensación, por gastos de vivienda adecuada, subsidio familiar y escolaridad» de los hijos de los funcionarios, e incluso la percepción de «los haberes correspondientes a su jubilación o retiro y dejar pensión para sus derechohabientes» en el caso de fallecimiento.

En el inciso j) del artículo 21 —al que me estoy refiriendo—, tal como lo expresó el señor miembro informante, se elimina el concepto «de difícil adaptación», porque ello implicaba un especial subjetivismo.

El inciso n) dice: «Recurrir por vía administrativa ante la aplicación de toda norma o disposición que estimen inadecuada o medida disciplinaria que consideren injusta». Nosotros proponemos el siguiente texto: «Recurrir por vía administrativa o judicial ante la aplicación...», etcétera.

Con respecto a las obligaciones, en el artículo 22 se prescriben las de «desempeñar las funciones o misiones que se le encomendaren con eficiencia y dedicación»; «respetar el orden jerárquico del servicio y cumplir con las instrucciones, reglamentos, circulares y demás disposiciones que reciba»; «promover el conocimiento del acervo nacional»; «fomentar y estrechar las buenas relaciones con el país en que ejerce sus funciones»; «defender el prestigio, la dignidad y los intereses de la Nación»; «prestar la atención necesaria a los nacionales argentinos y a sus intereses», etcétera.

Llegamos así al artículo 23, donde se establecen las prohibiciones. Surgen del mismo algunas incompatibilidades; en efecto, se establece que los funcionarios del servicio exterior sólo podrán ejercer la docencia en el ámbito universitario y siempre que ello no interfiera con la dedicación y eficiencia que deben a su función.

Se enumeran una serie de prohibiciones, pero a mi criterio, este artículo está peor redactado que la reglamentación de la ley 12.951, que no voy a leer para no extender mi exposición.

Por ejemplo, el artículo 23 dice en el inciso c): «Representar a firmas comerciales o intereses extranjeros en el país, o hacer gestiones en su favor».

No surge de este inciso que los funcionarios del servicio exterior no puedan ser asesores de empresas nacionales.

Sr. Luder. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. León. — Con mucho gusto, señor senador.

Sr. Luder. — Entiendo que complementado este inciso c) con lo dispuesto en el inciso b) resulta bastante claro su alcance, en cuanto a que no pueden ejercer actividades comerciales, profesionales o de gestión de intereses privados ajenos o propios en el extranjero. Y en cuanto a lo de representante y asesor, es más o menos lo mismo dentro del espíritu de la ley. Por lo menos, lo dejo dicho como interpretación del

miembro informante, respecto a que representar intereses extranjeros o asesorarlos, a los fines de esta ley, tiene el mismo alcance.

Sr. León. — Soy totalmente solidario con el criterio de que no represente intereses extranjeros en el país...

Sr. Luder. — Me refiero al inciso c), respecto del cual el señor senador dice que la prohibición de representar no es suficiente y debería agregarse la de asesorar.

Sr. León. — No es problema, señor senador. Hago la siguiente pregunta: si aquí le prohibimos asesorar o representar a firmas comerciales o intereses extranjeros, ¿puede entonces ser, por ejemplo, apoderado de una empresa nacional?

Sr. Luder. — No, señor senador. Tal vez la redacción no esté todo lo clara que debiera ser. Pero cuando el inciso b) expresa: «Ejercer actividades comerciales, profesionales o de gestión de intereses privados ajenos o propios en el extranjero», se trata de una inhabilidad total que concuerda con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 49, que aclara más ese concepto. Existe incompatibilidad entre el estado diplomático y el ejercicio del comercio y la profesión...

Sr. León. — Prácticamente, entonces, queda afectado *full time* en el servicio exterior.

Sr. Luder. — Salvo la docencia universitaria, en casos excepcionales, cuando no interfiera con la dedicación al servicio.

Sr. León. — Queda claro, entonces, que este inciso c) del artículo 23, que está referido exclusivamente a firmas comerciales o intereses extranjeros, también comprende a los comercios o empresas argentinos.

Sr. Luder. — El inciso b) del artículo 23 y el inciso a) del artículo 49 se refieren al comercio argentino.

Sr. León. — Correcto. El inciso d) del artículo 26 debe ser armonizado, según nuestro criterio, con lo establecido en la Convención de Viena en sus artículos 31 y 32 sobre relaciones diplomáticas, la que ha sido ratificada por nuestro país, por lo que propongo que se teste de dicho inciso lo siguiente: «... o efectuar renuncia de su inmunidad de jurisdicción en su lugar de destino...».

Es decir, propongo para el inciso d) la siguiente redacción: «Entablar acciones judiciales o prestar declaración testimonial ante autoridades del país de destino, prohibición que alcanza a la familia a su cargo».

Sr. Luder. — Si me permite, señor senador, debo decirle que se supone que para renunciar a la inmunidad el funcionario del servicio exterior debe consultar al ministerio, por cuanto compromete al interés del país que su representante renuncie a su inmunidad, que no es personal de él, sino en función de la representación que ejerce. Por lo tanto, con autorización del ministerio se podrá solucionar el problema; pero voluntariamente, y por sí, no puede renunciar a

la inmunidad, porque el funcionario está ejerciendo una representación oficial del país.

Sr. León. — Pero es que el país tiene un tratado firmado...

Sr. Presidente (García, A. A.). — La Presidencia hace notar a los señores senadores León y Luder que están efectuando una discusión en particular muy detallada.

La Presidencia, en esta circunstancia, ha dejado en el uso de la palabra al señor senador León empleando la técnica que habitualmente hemos estado aplicando, de efectuar todos los señores senadores la discusión en general y plantear también las disidencias en particular, para evitar un segundo tratamiento, pero sin ahondar en detalles.

Sr. Luder. — Así es, señor presidente.

Sr. León. — Por eso quiero dejarlo sentado ahora, señor presidente, para no repetir luego la observación.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — En el capítulo IV, «Del Consejo Superior de Embajadores», creemos que se ha deslizado a nuestro criterio, salvo mejor interpretación, un error en el artículo 33, que dice: «Si al tiempo de constitución o renovación del consejo hubiese mayor número de embajadores en situación de revista en la Cancillería, para acceder al mismo, se efectuará un sorteo». Por una parte, establecemos que el embajador se retira a los setenta años, mientras que en este caso debe tener sesenta y cinco. Si en el sorteo no resulta favorecido, el embajador se va a la calle cinco años antes de lo que la ley establece. Es decir, que la estabilidad del funcionario depende de un sorteo. Concretamente, proponemos que se suprima este artículo.

El artículo relativo a las calificaciones establece el secreto de las mismas. Creo que ésta es una disposición peligrosa porque no tiene antecedente en ninguna ley del servicio exterior. En caso de ser aprobada, esta norma será inconstitucional porque se privará al calificado del fundamental derecho de defensa, ya que, si la calificación es secreta, no podrá tener conocimiento de la misma. Además, esto podrá dar lugar a que se ampare la impunidad y, a veces, la arbitrariedad. Al respecto existen antecedentes de ingrato recuerdo.

Consideramos que la publicidad de los actos hace a la esencia del orden administrativo, como lo sostienen uniformemente la doctrina y los autores, en el caso de que el acto afecte al interesado en forma personal, por lo que no se le puede negar su conocimiento. Repito que en ninguna de las anteriores leyes relativas al servicio exterior existía una disposición de este tipo. No la había en las leyes 4.711 y 12.951 ni en los decretos 17.702 y 19.300.

Por ello, solicitamos que se modifique este artículo y se le dé la orientación fijada en la

reglamentación de la ley 12.951, que establecía que la calificación era reservada.

Con respecto al régimen disciplinario, el artículo 43 dice textualmente: «Las medidas disciplinarias se aplicarán en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación».

«Las transgresiones por parte de los funcionarios de la categoría A a las normas y preceptos emergentes de la presente ley, así como también a la conducta ética y moral ejemplar que deben observar constantemente, serán severamente sancionadas de acuerdo con el grado de importancia de la transgresión cometida...» Es decir que se establece una graduación.

Continúa diciendo el artículo: «...previa intervención del tribunal de honor y de la junta calificadora. Esta intervención tendrá lugar mediante disposición expresa del ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que se instruya el correspondiente sumario».

Después dice que las medidas a que dé lugar el sumario podrán ser el retiro obligatorio o la cesantía o exoneración, previo acuerdo de remoción por parte del Congreso.

Sr. Luder. — Pero usted está leyendo el proyecto del Poder Ejecutivo y no el dictamen.

Sr. León. — ¿Y qué dice el dictamen?

Sr. Luder. — Este artículo está modificado.

Sr. León. — ¿Puede leerme la modificación, señor senador?

Sr. Luder. — Es larga; voy a contestar luego sobre eso en el debate en particular. Usted la tiene sobre su banca.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Señor senador León: en la página 5, como artículo 16 del despacho, figura la nueva redacción del artículo 43.

Sr. León. — El artículo 16 dice lo siguiente: «...Las medidas disciplinarias se aplicarán en los casos de negligencia, indisciplina o incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación. Las transgresiones por parte de los funcionarios de la categoría A a las normas y preceptos emergentes de la presente ley, así como también a la conducta ética y moral ejemplar que deben observar constantemente, será severamente sancionada de acuerdo con el grado de importancia de la transgresión cometida, previa intervención de la junta calificadora y/o del tribunal de honor. Esta intervención tendrá lugar mediante disposición expresa del ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que se instruya el correspondiente sumario.» Hasta aquí pensamos igual.

Continúa el artículo: «Las sanciones a que dé lugar el sumario podrán ser: 1. Retiro obligatorio; 2. Cesantía o exoneración, previo acuerdo de remoción por parte del Honorable Congreso de la Nación.»

Y después sigue: «Los funcionarios del servicio exterior de la Nación comprendidos en

las categorías B a G, podrán ser objeto de las medidas disciplinarias siguientes: a) Apercibimiento verbal; b) Apercibimiento escrito; c) Suspensión; d) Disponibilidad; e) Cesantía; f) Exoneración».

Cualquier artículo que tome me sirve para exponer que para el caso de los señores embajadores el sumario respectivo sólo da como posibilidad —aun mediando la junta calificadora y tribunal de honor— el retiro obligatorio y la cesantía o exoneración, en tanto que a mi criterio sería correcto que los señores embajadores, de acuerdo a la gradación de su error, pudieran ser también pasibles de suspensión o disponibilidad. Y digo esto porque no es lo mismo que el señor embajador traicione a su país, por ejemplo, o que bese a la secretaria en público.

Creo que aquí se les crea a los embajadores un rigor que puede no ser justo dadas las circunstancias en que cometan su equivocación, error o negligencia.

El artículo 46 del proyecto de ley, que queda tal como viene del Poder Ejecutivo, establece: «Cuando la gravedad de la imputación requiera apartar al imputado de sus funciones, se podrá disponer la suspensión preventiva por un período no mayor de noventa días».

Nuestro partido es muy respetuoso de los derechos y valores humanos; por ello, pensamos brindar a través de un artículo que propongo una mayor garantía. Sugerimos que en reemplazo de lo establecido se diga lo siguiente: «Cuando la gravedad de la imputación requiera apartar al imputado de sus funciones se podrá disponer la suspensión preventiva, con goce de sueldo, por un período no mayor de noventa días. Si presumiblemente la imputación puede dar lugar a cesantía o exoneración, la suspensión preventiva podrá dictarse sin goce de sueldo. En el caso de tratarse de un hecho que presuntivamente pueda acarrear como medida una suspensión de hasta treinta días la preventiva podrá dictarse sin goce de sueldo hasta ese lapso, que luego se computará para el cumplimiento de la suspensión a que dé lugar. En caso de que en virtud del sumario se aplicase una medida definitiva consistente en el apercibimiento o suspensión por un plazo menor que el de la preventiva dictada sin goce de sueldo, se ordenará la liquidación de los sueldos correspondientes a los días de suspensión preventiva en su totalidad o los que excediesen a la suspensión definitiva».

Celebro que la comisión haya aceptado una preocupación que pusimos de manifiesto en la comisión, orientada a quitarle al señor ministro la facultad de pasar directamente a disponibilidad a los funcionarios, porque después también se establece en el inciso f) del artículo 49 que: «si al cabo del año no fuese reincorporado a la actividad quedará fuera de la carrera». Es decir que estaríamos dejando abierta la puerta para que el señor ministro, con esta facultad, pudiera estar quitando estabilidad al personal. Esto ha

sido aceptado por la comisión, y lo celebro, porque marca una actitud de sensibilidad de los señores senadores de la mayoría.

En el régimen de haberes y designaciones, se establece que serán liquidados y abonados por trimestre anticipado. Al final del primer párrafo del artículo 63, se dispone: «...y en el exterior desde la fecha de partida en la divisa que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el coeficiente y complementos que correspondan al país de destino y que periódicamente fijará o reajustará el Poder Ejecutivo, siempre que la ley no disponga otra forma de pago». Es decir que se abre una puerta para crear otra disponibilidad.

En el régimen de licencias estamos de acuerdo, pero yo quiero agregar un inciso al artículo 73. Propongo que se incorpore en la parte final una resolución que establezca el pago compensatorio en caso de licencias no tomadas, pues actualmente la ley en esto deja un vacío que obliga a recurrir a las normas del decreto 6.666/57, y no es lógico ni justo que, si en el estatuto del personal civil de la Nación existe una disposición de este tipo, ella no esté incluida también en esta ley que queremos perfeccionar para tranquilidad de los miembros del cuerpo exterior de la República.

Entonces, propongo un inciso que diga así: «Las licencias ordinarias no utilizadas por causas que no fueran imputables al funcionario, dan lugar al pago compensatorio».

En el artículo, tal como está redactado se dice que las licencias ordinarias deberán ser usadas en el año calendario correspondiente, caducando al finalizar el año en que debieron ser tomadas. Allí vendría mi agregado, que es similar a lo establecido para el personal civil de la Nación.

Con respecto al capítulo relativo a jubilaciones, retiros y pensiones, tuve una conversación antes de venir al recinto con el señor miembro informante de la mayoría, a fin de procurar modificar el artículo 77. Esa disposición establece que «los funcionarios que sin tener derecho a la jubilación tuvieran una antigüedad de veinte años en la administración pública, de los cuales quince como mínimo cumplidos en el servicio exterior de la Nación, y cesaran en sus funciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la presente ley, tendrán derecho al haber de retiro».

Lo que yo quiero es proponer que se reemplaza la palabra «cumplidos» por «computables». Donde dice «cesarán» pondríamos «hubieran cesado». Aquí se puede dar el caso de que un funcionario declarado prescindible en marzo o en mayo no va a tener derecho a retiro, y uno declarado prescindible en julio o agosto lo tendrá.

Tengo entendido que el señor senador Luder comprende esta situación, y creo que hay acuerdo para modificar este artículo. Por otra parte, hay antecedentes en la legislación con respecto a eso, porque siempre se ha contemplado. La ley

12.951, en el artículo 76, establecía que «Los derechos concedidos por la presente ley, el estado diplomático, los beneficios jubilatorios y de retiro que concede la misma, serán reconocidos a los funcionarios del servicio exterior actualmente jubilados, retirados o que hayan cesado por causas que no les sean imputables».

La ley 17.702, en su artículo 56, establece que «Los funcionarios que sin tener derecho a la jubilación tuvieran una antigüedad de veinte años en la administración pública, de los cuales diez como mínimo cumplidos en el servicio exterior, y cesaren en sus funciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la presente ley, tendrán derecho al retiro».

Podría seguir mencionando otras leyes, como la 19.300, que en su artículo 61 establece que los funcionarios que sin tener derecho a la jubilación tuvieran una antigüedad de veinte años en la administración pública, de los cuales quince como mínimo cumplidos en el servicio exterior, y cesaren en sus funciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, tendrán derecho al haber de retiro.

Con las modificaciones que proponemos, señores senadores —tengo que ser leal—, podemos favorecer a sesenta y ocho o setenta ex miembros del servicio exterior. Por esta ley, tal como está redactada, vamos a crear el retiro incluso para los exonerados con sumario, cesantes con sumario o los dejados cesantes por causas criminales.

En consecuencia, quiero proponer a este Honorable Senado que también creemos la posibilidad de que algunos de los funcionarios declarados prescindibles sin sumario, sin causas criminales y algunos exclusivamente por causas políticas, tengan la tranquilidad y seguridad de que nosotros hemos sancionado una ley que les permite su retiro.

Con respecto al artículo 78 quiero proponer que se modifique el porcentaje establecido, tomando en cuenta las exigencias de la vida actual y el amparo que se debe brindar al funcionario retirado.

El artículo 78 dice: «Los funcionarios retirados en virtud de las disposiciones de la presente ley percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un haber de retiro mensual equivalente al 2,5 % de la retribución correspondiente al funcionario de igual jerarquía en actividad y en la República, por cada año de servicio computable para el retiro». Es decir, que si un funcionario se retira a los treinta años de servicios, recibirá el setenta por ciento. Pienso que es más justo y acertado que este artículo quede redactado así: «Los funcionarios retirados en virtud de las disposiciones de la presente ley u otra causa ajena a su voluntad, percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un haber de retiro de acuerdo con los porcentajes que se indican a continuación, aplicados sobre la retribución correspondiente al funcionario de

igual categoría que percibe en actividad, prestando servicios en la República: de 10 a 15 años, el 60 por ciento; de 15 a 20 años, el 65 por ciento; de 20 a 25 años, el 70 por ciento; y de 25 años en adelante el 75 por ciento».

Es decir que mejora un poco la escala, sin que implique esto romper totalmente el criterio, pero marcando más taxativamente lo que le corresponde a cada uno.

Podría referirme a otros artículos de la ley para marcar algunas de nuestras coincidencias y discrepancias. Pero pienso que a través del informe del señor senador Luder y de algunas diferencias que he señalado, queda expresado el pensamiento de nuestro bloque.

Decía que el radicalismo señalaba que los integrantes del servicio exterior de la Nación deben interpretar y comprender al país, sintiéndose por encima de los avatares de la política. Deben entender que ellos no representan a un partido, por más que haya una coyuntura gubernamental, sino a la Nación en su conjunto.

La política exterior moderna ideal para nuestro país sería aquella que marcara nuestros niveles de cultura, afirmara nuestra personalidad internacional y creara un rumbo moral en lo externo. Quizás esto lo podamos conseguir aplicando una permanente actitud de veracidad y de lealtad en nuestros negocios internacionales, teniendo imaginación y viviendo fuera de lo que dije al comienzo: de las estrategias que siempre recorren la cornisa de la inmoralidad.

Como expresión de lo que no debe ser un diplomático para mi país, podría decir lo que citara Hitler en *Mein Kampf* cuando manifestaba: «Su método debe consistir en “inspirar el fanatismo y, en ocasiones, el histerismo”. Nunca debe sugerirse la posibilidad de que la parte contraria pueda decir nada. No debe contener jamás ni sutilezas ni reservas, sino “solamente afirmación o negación, amor y odio, justicia e injusticia, verdad y mentira, casi nunca medias tintas”. Y, sobre todo, las mentiras deben ser enormes; no tiene objeto, en su opinión, decir mentiras pequeñas; una mentira de propaganda debe ser de proporciones tan gigantescas que los que la escuchan no sospechen jamás que puede ser inventada».

Yo quisiera para un país como el nuestro, que ha heredado su historia y su tradición, que su servicio exterior actúe con generosidad. Pero tenemos que defender valores permanentes. No podemos fijar dentro del país, por ejemplo, principios que después no queremos que se apliquen fuera de la República. Debemos actuar en un mundo de una historia muy dinámica y afirmar un molde propio del país en el exterior. Frente a un mundo que consume más del cuarenta por ciento en armamentos, tal vez el rumbo del común denominador de los argentinos debiera ser proclamar que queremos seguir gastando más en salud que en bombas, debiendo trabajar nues-

tro servicio en favor de un mundo que consuma más en vivir que en matar.

Debemos servir una política generosa que no esté incrustada en el tercer mundo sino en medio de todos los pueblos. Yo nunca estuve muy de acuerdo con esto del tercer mundo, que sirvió para una circunstancia de guerra fría pero que puede no ser la interpretación del pensamiento común de los argentinos en momentos como éste.

Podemos tener alguna coincidencia con Africa en lo político, en lo exterior o en el intercambio comercial; pero se trata de naciones emergentes, casi tribales, que nada tienen que ver con la problemática de un país como el nuestro, con ciento sesenta años de historia como conjunto nacional. Pero esto es harina de otro costal.

El hombre del servicio exterior debe decirle al imperialismo y a los internacionales del odio que si tenemos que elegir nosotros entre ser potencia nuclear o crear un desarrollo que permita una sociedad de paz y entendimiento entre los argentinos, preferimos no ser potencia nuclear para ser la expresión esperanzada del mundo del hombre. Por eso nosotros no pensamos como Clausewitz, que decía que la política interna es una guerra disfrazada. A través de estas expresiones deseo significar que el hombre argentino en el exterior, que nuestra política exterior nunca debe disfrazar nada y siempre debe marcar los ideales que nosotros queremos para nuestro propio pueblo.

Decía al comienzo que nosotros somos una nación joven pero madura por muchas circunstancias internacionales; que somos una joven nación que siempre fue generosa en el ámbito de las relaciones con los otros pueblos.

Tenemos, señor presidente, 163 años de vida independiente, y el mundo no puede señalarnos con una actitud de hegemonía, de egoísmo, porque tendimos un puente y cedimos tierras en homenaje a la cordialidad y a la cooperación internacional.

Si nosotros esta tarde estuviéramos creando las condiciones para que otros hombres, hermanos nuestros, pudieran interpretar esto, creo que estaríamos al margen de nuestras discrepancias parciales estableciendo el rumbo de mejoramiento para los argentinos.

Recuerdo haber leído alguna vez en un libro de diplomacia, cuyo autor fue un ex ministro de Relaciones Exteriores de Italia, una frase que decía: «A otros les es lícito, a ti no». Pienso que nosotros debemos tener como norma en nuestra política exterior esta actitud y pensar que si no queremos la guerra para los argentinos tampoco tenemos que desearla para los demás. Por eso en materia de asuntos internacionales, en estos momentos en que todavía están triunfantes los imperialismos, nosotros rendimos aquí un acto de solidaridad hacia las islas Malvinas, que constituyen indudablemente una expresión del colonialismo todavía vigente, pese a las resoluciones de las Naciones Unidas

tales como la 1.415 y la 2.065, porque las grandes potencias aún no tienen el signado rumbo moral que yo deseo para la política exterior de mi país.

Hechos argentinos están incrustados en cartas internacionales, y recuerdo que Yrigoyen mandó retirarse al embajador en Ginebra porque no querían sentarse en la mesa de deliberaciones los delegados de las naciones vencedoras junto con los de las derrotadas, con lo que le estaba dictando a las Naciones Unidas la filosofía de la universalidad que tiene ese organismo. Es decir, señor presidente, que humildemente la intuición de Yrigoyen no presentía que a través de los años ese acto suyo iba a constituir la filosofía triunfante en medio de la imprescindible e insoslayable solidaridad de las naciones. Esto demuestra que algunas fronteras tienen que empezar a restringirse porque los valores que nosotros queremos para el hombre se han extendido a través de la técnica.

Ahora, cuando torturan a un moreno en el Africa, nos duele a nosotros. Por eso es que las fronteras tienden a restringirse cada vez más y la autodeterminación que defendemos es justa en la medida en que el hombre del mundo no sea masacrado dentro de su propia frontera, y que no padezca el hambre por la acción del imperialismo que aún hoy sigue triunfando sobre la libertad del hombre. *(¡Muy bien! Aplausos.)*

Sr. Culasso Mattei. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Culasso Mattei. — Señor presidente: he firmado el despacho de la mayoría en el tema que nos ocupa, por entender que es necesario dotar al país del instrumento para el logro de sus fines en el trascendente campo de la política exterior.

En ese sentido la República Argentina debe contar con una mejor ley orgánica que contemple todos los factores en juego del asunto en debate, en un mundo cada vez más compenetrado, más comunicado, y en el que las relaciones entre los países obligan no sólo al patriotismo de quienes desempeñan funciones diplomáticas, sino a una alta capacitación por parte de los mismos.

Si en todas las actividades del Estado es de singular importancia mantener una política de continuidad, lo es en grado sumo en las relaciones exteriores.

El país ha contado a lo largo de su historia con figuras señeras que no sólo dieron brillo a la representación que investían, sino que también sentaron doctrinas que en algún caso llevan el nombre del diplomático y lograron quedar inscritas en los anales de la política internacional.

No voy a citar las distintas leyes sobre reglamentación del servicio exterior, porque han sido muy bien analizadas por el miembro informante, ni tampoco voy a referirme al articulado

que ya fuera desmenuzado por los señores senadores Luder y León.

Pero si quiero citar algunos nombres que son orgullo de la historia diplomática argentina. Moreno y Rivadavia, sin dejar de recordar la trascendente obra del general Belgrano, inauguran en tiempos difíciles y, por qué no decirlo, con precarios medios, la labor que a lo largo de ciento sesenta años se ha cumplido en la materia que analizamos.

Amancio Alcorta fue maestro, y a lo largo de muchos años numerosos hombres abrevaron en la sabiduría de su cátedra y en la elocuencia de sus libros.

Luis María Drago sienta, frente a las grandes potencias que paradójicamente dejaban de lado la diplomacia y hacían uso de la fuerza para avasallar la soberanía de un país hermano de América, la doctrina de aceptación universal, mediante la cual los conflictos suscitados, y especialmente aquellos derivados del cumplimiento de tratados económicos, no podían resolverse por la utilización de medios bélicos. La doctrina Drago es piedra angular de la diplomacia y fuente permanente de consulta para quienes tienen a su cargo tan importantes y delicadas tareas.

Citaré también a hombres como Quirno Costa, José A. Terry, Estanislao Ceballos, Roque Sáenz Peña y muchos otros que son permanente ejemplo a imitar por su brillo y capacidad y, sobre todo, por la permanente defensa de los más legítimos intereses nacionales.

Paralelamente se destacan también los argentinos por su prédica o actuación en los organismos internacionales. Carlos Saavedra Lamas y la importante y calificada comisión argentina que lo acompañó lograron concretar la paz entre dos naciones hermanas enfrentadas por la lucha. No en vano esa decisiva mediación mereció el premio Nobel de la paz. Nombres como Isidoro Ruiz Moreno y Antokoletz integran la nómina de argentinos destacados en esa labor.

No puedo tampoco dejar de señalar a otros dos diplomáticos llegados al alto sitial de la Corte Internacional de Justicia, los doctores Moreno Quintana y José María Ruda.

Pero, como dije al principio, y sin perjuicio de las importantes páginas escritas por los hombres que termino de mencionar, el país careció de una real organicidad en materia de tanta importancia. Hay muchos ejemplos por imitar, tanto en Europa como en nuestro continente, donde por encima o sin perjuicio de vaivenes políticos naturales o artificiales se ha mantenido el estricto cumplimiento de una serie de presupuestos básicos que hacen al tema que hoy consideramos.

Si tal actitud tiene alto valor en la política interna, más aún debe ser respetada en materia tan sensible y de características tan peculiares cual es la diplomacia.

Por ello estimo importante que el país tenga una ley que responda a los principios esenciales, es decir, que aparte de la eficiencia del servicio esté dotada de la suficiente imaginación, ductilidad y grandeza para que la Argentina marque rumbos en sus relaciones con los demás Estados y en su participación en cuanto tema se debata en los grandes foros internacionales.

En tal sentido, estimo que el proyecto que analizamos cumple, en líneas generales, esos propósitos, aunque la bondad de sus disposiciones se comprobará seguramente con su próxima puesta en vigencia.

A este respecto es importante señalar que la ley en estudio mantiene la vigencia del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Sin perjuicio de las grandes líneas que son marcadas en el plano político por los respectivos gobiernos, es saludable que las funciones diplomáticas sean desempeñadas por quienes se capaciten específicamente. De allí que en la comisión se haya tenido en cuenta la existencia de casas de altos estudios, como la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Rosario, dependiente de la Universidad del Litoral, que promueve y capacita en la carrera de diplomacia a hombres y mujeres que podrán luego desempeñar, con capacidad profesional, tareas específicas en la Cancillería.

Por ello, creo conveniente que la ley contemple la situación de estos egresados de universidades con títulos en la materia, frente a quienes, simplemente, con no menos valiosos diplomas, ingresan en el Instituto del Servicio Exterior.

En el seno de la comisión presenté algunas inquietudes que fueron recogidas; pero luego de un examen más meditado del despacho, deseo sugerir a la comisión, con el objeto de no intervenir cuando se trate el proyecto en particular a fin de agilizar el trámite, el siguiente agregado al artículo 13: «Los egresados de universidades nacionales con el título de licenciados en diplomacia, en relaciones internacionales o similares, serán exceptuados de cursar y aprobar las materias equivalentes que se dicten en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación ya incluidas en sus respectivas carreras».

Por otra parte, con sentido de estricta justicia, me permito sugerir a la comisión la posibilidad de agregar el artículo 107. En un momento determinado, en la comisión se planteó esa posibilidad. La redacción del artículo es la siguiente: «Los funcionarios del servicio exterior de la Nación cuyo cese de funciones sin sumario previo se hubiere dispuesto desde el mes de septiembre de 1955 hasta la fecha de la promulgación de la presente ley que no tuvieren derecho a la jubilación podrán, por esta única vez, acogerse a los beneficios del retiro en las condiciones determinadas por el artículo correspondiente, siempre que acrediten una antigüedad de veinte años en el servicio de la admi-

nistración pública, de los cuales tres, como mínimo, cumplidos en el servicio exterior de la Nación». En los alcances de este artículo estarían incluidos también los cesantes por la ley de prescindibilidad.

El proyecto trae también una novedad, que es el Consejo Superior de Embajadores, que tiene el propósito, según se señala en el mensaje del Poder Ejecutivo, de aprovechar la experiencia y capacidad de quienes han transitado muchos años en la carrera diplomática. A este respecto, será interesante comprobar, con su funcionamiento, el elevado fin que la iniciativa persigue.

También resulta útil que la Cancillería cuente con un Tribunal de Honor que, garantizando el derecho a la debida defensa, corrija o elimine las fallas en que se incurre en el desempeño de tan delicada función. Tal instituto funcionará en concordancia con la Junta Calificadora.

En resumen, señor presidente, larga sería la enumeración de los aspectos positivos de esta ley, en los que no abundo en atención al fundado y meduloso examen que ha realizado el señor miembro informante.

Destaco, una vez más, la necesidad de que se dé a esta ley la vigencia material y temporal que permita conocer la marcha en sus aspectos positivos y la oportuna corrección de aquellos que no lo fueren. Por sobre todo, será deber del Poder Ejecutivo, compartido en algunos casos por esta Honorable Cámara, no sólo fijar esa política de grandeza a que recién aludía sino mantener una línea de acción en que diplomáticos capaces den una imagen externa del país en su totalidad.

Con estas breves consideraciones, dejo sentado mi voto favorable al proyecto en discusión. Nada más.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente, señores senadores: el proyecto de ley que estamos considerando puede calificarse como bueno en líneas generales, ya que en gran parte se basa en una ley que también fue buena. Me refiero a la 12.951, sancionada el 6 de febrero de 1947 y promulgada el 15 de febrero del mismo año.

Concuerdo con casi todos sus postulados, especialmente en lo referente al ingreso en la carrera diplomática, ya que éste deberá cumplirse por el primer escalón y llenando los requisitos que el proyecto de ley establece.

Estimo que el régimen de promociones está bien y seriamente encarado.

También merecen apoyo los artículos referentes al estado diplomático, donde se detallan claramente las funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones a que están sometidos los integrantes del servicio exterior de la Nación.

El mismo concepto merece todo lo inherente a la junta calificadora, al tribunal de honor, a

las calificaciones, al régimen disciplinario y a todo lo que, en general, hace a la organización del cuerpo diplomático.

En el mensaje del Poder Ejecutivo se dice lo siguiente: «En el proceso de elaboración de dicha ley ha privado esta idea: la estabilidad del cuerpo de funcionarios que lo componen es el requisito esencial para mantener la eficiencia del servicio».

El artículo 19 del proyecto dice textualmente: «El grado de cada funcionario del servicio exterior de la Nación con las funciones, los derechos, obligaciones y prohibiciones inherentes al mismo instituidos por la presente ley y su reglamentación constituyen el estado diplomático, del que no podrá ser desposeído su titular sino por las causales establecidas por la Constitución y esta ley».

Este artículo, con algunas palabras más, es casi idéntico al artículo 14 de la ley 12.951, del año 1947. Es por ello que vería con agrado que, de conformidad con lo que insinúa el artículo 100 del proyecto de ley sometido a nuestra consideración, se tenga en cuenta la situación de aquellos funcionarios que por imperio de la mencionada ley 12.951 gozaban de estabilidad, y que al ser ésta desconocida por quienes usurparon el poder y avasallaron la Constitución y la ley, perdieron injustamente el estado diplomático, que este nuevo instrumento tanto defiende.

En el mes de julio del año pasado, por intermedio de la prensa, la Cancillería convocó a todos los ex funcionarios que fueron separados con posterioridad a la caída del gobierno del general Perón y que deseaban reintegrarse al servicio exterior de la Nación. Se les hizo llenar formularios especiales, y sus respectivos legajos fueron examinados por una comisión ad hoc designada para dictaminar sobre las reincorporaciones. La comisión cumplió su cometido, pero las reincorporaciones, salvo contadas excepciones, no se llevaron a cabo ni se informó a los interesados sobre el resultado de la gestión que iniciaron por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Esa actitud quita autoridad y seriedad a esta nueva ley que se nos solicita, ignorándose además la ley 20.508, de amnistía, votada por este Honorable Senado.

Lo justo y deseable hubiera sido que esta ley sirviera de rehabilitación para todos aquellos que dieron los mejores años de su vida a una carrera que si bien brinda grandes satisfacciones, exige también grandes sacrificios. Que sea una real rehabilitación para todos aquellos que la habían abrazado con fe, fervor, patriotismo. y que se vieron frustrados por el odio, el revanchismo, la envidia y la injusticia.

Por desgracia, nuestro servicio exterior, práctica y realmente, nunca ha llegado a integrarse en un cuerpo coherente, idóneo y dinámico, pues siempre ha estado, en buena parte, supeditado a los vaivenes de la política.

La gran mayoría de los países respetan a sus diplomáticos y evitan que los avatares de la política se inmiscuyan en sus cuadros.

Cuando en Italia cayó el fascismo de Mussolini, que había gobernado durante tantos años, las nuevas autoridades respetaron a sus representantes diplomáticos y consulares y cuando quisieron prescindir de algunos por su evidente concomitancia con el régimen depuesto, debieron enfrentarse con el Consejo de Estado y hasta con la propia justicia, que no permitieron que las leyes fueran violadas sino por causas justificadas.

La misma vecina república de Chile, bajo el gobierno de Salvador Allende, mantuvo intacto el cuerpo estable de su calificada Cancillería, que siguió sirviendo a su país por encima de orientaciones políticas seguramente no compartidas por la gran mayoría de los diplomáticos en actividad.

Esta constante renovación de nuestros diplomáticos hace que nos encontremos en inferioridad de condiciones frente a la experimentada diplomacia de otros países.

Además, señor presidente y señores senadores, ¿nos hemos puesto a pensar alguna vez cuánto le cuesta al país formar un buen diplomático? Por más culta e ilustrada que sea la persona que se designe para ocupar el cargo, deberá adquirir la experiencia necesaria para el buen desempeño de su función, y ella sólo se logra con el andar del tiempo, con el intenso y continuo contacto con los colegas de otras nacionalidades, con los servicios prestados en diferentes países. Esto no se obtiene de un día para el otro. Lleva tiempo, años, formar un diplomático experimentado.

Esto le cuesta mucho dinero al país, y sin embargo ya es una costumbre desgraciada de nuestro medio que cuando cambia el gobierno hay que reemplazar a buena parte del cuerpo diplomático para satisfacer a quienes se quiere favorecer, aunque no tengan ninguna aptitud para la función que están llamados a desempeñar. Por eso es que encontramos por el mundo a diplomáticos argentinos alejados y desvinculados del medio ambiente en que viven, pues ni idioma conocen a veces, y, por otra parte, no quieren tomarse el trabajo de aprenderlo, ya que saben que estarán en esas funciones mientras dure el gobierno de turno y que al cambiar éste también ellos serán substituidos por amigos del nuevo gobierno.

Lo más lamentable es que esta misma ley, que tanto pregona la estabilidad del diplomático, es la primera en violar esta norma con su artículo 100, de las disposiciones transitorias que autoriza designaciones y nombramientos en flagrante contradicción con las obligaciones que establece la propia ley.

Por otra parte, con apresuramiento y antes de que se sancione y promulgue esta ley, se ha estado haciendo designaciones en toda la gama:

del escalafón diplomático de gente que no posee los títulos ni las condiciones requeridas para tan delicada función, con lo que se desvirtúa la esencia de la ley y se posibilita que más adelante se la ponga en tela de juicio y no se logre la finalidad buscada, pues no tendrá la fuerza moral necesaria para ser respetada.

No llego a entender qué finalidad tiene la creación del Consejo Superior de Embajadores, pues considero que el asesoramiento al ministro compete a los funcionarios que están al frente de los diversos organismos de la Cancillería, y que los embajadores, salvo aquellos que tengan un destino específico en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, deben estar al frente de misiones diplomáticas en el exterior, y si por razones de edad o de salud no pueden ejercer esas funciones, es lógico que pasen a la pasividad y dejen su lugar a quienes están en condiciones de cumplir su misión específica, pues entiendo que en el escalafón no han de sobrar cargos de embajador como para darse el lujo de integrar un consejo de embajadores que de acuerdo con lo enunciado no podrá ser muy restringido, si está llamado a funcionar con cinco o más salas, cada una de ellas destinada a una especialidad diferente.

Si se insiste en contar con este consejo asesor, considero que el mismo puede ser formado con embajadores que revisten en el cuerpo permanente pasivo, es decir, que se encuentren en jubilación o retiro. Con esto, no se restarían embajadores al cuerpo activo y esta prestación de servicio no representaría gasto alguno para la Cancillería, ya que todo embajador retirado consideraría un honor desempeñar tal función.

Por otra parte, la obligación que señala el artículo 29 del proyecto, en el sentido de que para integrar el Consejo Superior de Embajadores deberán haber revistado por lo menos durante doce años en el cargo, hará que lo formen solamente aquellos que se hayan desempeñado durante los gobiernos de facto y, en algunos casos, que hayan obtenido la confirmación por parte del actual gobierno.

Deseo destacar una novedad que se ha incluido en el capítulo X, artículo 73, inciso b), relativo al régimen de licencias, que considero atinada. Se trata de la que concede al funcionario destacado en el exterior una licencia, cada dos años, para trasladarse al país con coeficiente y pasaje para él y su familia. Esto permite que quien esté en el extranjero por un largo período pueda así mantener sus vínculos con el país y estar más en contacto con la realidad del quehacer nacional.

También merece mi complacencia la licencia semestral de veinte días que se establece en el inciso d) para quienes están destacados en países de «régimen especial».

En el mensaje del Poder Ejecutivo se anuncia que se contempla un régimen previsional adecuado a las peculiaridades y necesidades propias del sector. En el capítulo XI, relativo

a las jubilaciones, retiros y pensiones, que comprende los artículos 74 a 79, se dictan normas administrativas sobre el particular pero no se entra en el meollo de la cuestión, que es el régimen jubilatorio de los funcionarios del servicio exterior.

En el artículo 104 de las disposiciones transitorias se expresa que dentro de los 180 días de promulgada la presente, se estudiará un régimen previsional que contemple las particularidades y naturaleza de las funciones que presta el mismo.

No soy partidario de que existan discriminaciones, que siempre son odiosas, pero como desgraciadamente en el país —en cuanto a jubilaciones se refiere— éstas existen, no veo por qué razón no se devuelve al servicio exterior el régimen jubilatorio que le otorgó el decreto ley 1.049, del 29 de enero de 1958. Por decreto ley 5.567, del 22 de abril de 1958, dicho régimen se extiende al personal del Poder Judicial. Posteriormente, durante el gobierno del general Onganía, pese a que se mantiene este régimen para el Poder Judicial, incomprensiblemente se elimina del mismo al servicio exterior de la Nación.

Considero que el servicio exterior constituye una carrera orgánica bien definida desde la primera ley del servicio exterior de la Nación, la ya mencionada 12.951, sancionada y promulgada en el año 1947, como hemos dicho.

Las normas que dicta la ley que estamos tratando, referidas al ingreso, promociones, deberes y obligaciones de sus integrantes, indican a las claras que estamos frente a un organismo conocido por carrera diplomática.

Además, los diplomáticos retirados o jubilados siguen formando parte del cuadro permanente del servicio exterior (capítulo I, artículo 20; y capítulo III, artículo 21, inciso h). Este inciso dice: «Los funcionarios en retiro o jubilados forman la reserva del servicio exterior de la Nación y por lo tanto mantienen el uso de los atributos de su categoría».

El inciso p) del artículo 22 robustece mi afirmación en el sentido de que no se puede dudar de que estamos ante una verdadera carrera, pues dice: «Ser convocados cuando revistan en el cuerpo permanente pasivo, si necesidades del servicio así lo aconsejan y continuar sujetos —salvo dispensa expresa— a las obligaciones, limitaciones e incompatibilidades de los funcionarios en actividad».

Esta ley, por el inciso f) del artículo 23, establece que: «Los funcionarios del cuadro permanente activo del servicio exterior de la Nación, que pasen a situación de retiro o jubilación, ...» «... no podrán formar parte de directorios ni ejercer ningún tipo de comercio o funciones de carácter honorario o remuneradas relacionadas con empresas de intereses extranjeros».

Todo esto hace que los diplomáticos que se jubilan, y que por sus vinculaciones y contac-

tos deben hacer frente a muchos compromisos y mantener un cierto nivel de vida, sean acreedores al régimen jubilatorio que habían logrado y que les fuera caprichosamente cercenado.

Por esos motivos, señor presidente, considero que hubiera sido justo que esta ley contemplara tal situación y les devolviera el régimen que les había otorgado el ya citado decreto 1.049. Por otra parte, esto no representa una erogación cuantiosa ya que hoy en día son aproximadamente 550 los funcionarios en pasividad del servicio exterior, considerados los jubilados, retirados y pensionados.

En lo referente al Ceremonial del Estado, capítulo XV, artículo 99, estimo que las atribuciones que se le confieren exceden los límites de sus reales funciones, las que se dejan libradas a lo que establecerá la futura reglamentación.

Al leer el artículo 106 del capítulo XVI, de las Disposiciones transitorias, redactado en forma confusa, recién nos damos cuenta de que se pretende transformar el actual Ceremonial del Estado en un organismo con injerencia directa que vulnera las autonomías provinciales y municipales, no sólo en la parte protocolar sino también en la económica, ya que todos los fondos destinados a gastos protocolares deberán serle transferidos.

No creo que ésa haya sido la finalidad de este articulado. Pero como el mismo se presta a confusiones que pueden acarrear serias divergencias, estimo que debería reverse toda la redacción y darle una nueva que evite ulteriores malos entendidos. No pongo en duda que al Ceremonial del Estado le competen todos los actos protocolares en los que intervengan autoridades y personalidades extranjeras, pero tal como están concebidos los artículos 15, 99 y 106, su injerencia se extendería a todos los actos protocolares de la Nación, tanto en el orden nacional como en el provincial y municipal, cosa inadmisibles, pues, repito, vulnera la autonomía de los últimos poderes mencionados.

Merece también atención la redacción del artículo 100 del capítulo XVI, ya que desvirtúa por completo las disposiciones de la ley con respecto al ingreso al servicio exterior, escalafón y estabilidad de su personal, pues expresa que formarán parte integrante del cuadro permanente activo los funcionarios en actividad, sólo cuando cese la vigencia de la ley 20.549, que es la de prescindibilidad, que ya no tiene vigencia, razón por la cual este artículo no tiene sentido. Además, se refiere a los agentes que puedan ser reincorporados, pero no aclara cuáles son las condiciones que deben regir en la cuestión. Y lo que es más grave aún, es que este artículo autoriza designaciones y nombramientos que, según se deduce de su texto poco claro, vulnera lo que la ley establece para el ingreso a la carrera, y provocará el taponamiento del escalafón, ya que no aclara en qué categoría pueden ser hechos los nombramientos y designaciones a que se refiere.

Son además alarmantes las amplias facultades que otorga al ministro el artículo 103, que permite a éste hasta el 31 de diciembre de 1974, promover a funcionarios que no tengan la antigüedad requerida y no hayan aprobado los cursos que señala la ley para ser merecedores de una justa promoción.

Otro defecto que le encuentro a este proyecto es que omite legislar sobre las remuneraciones de los miembros del servicio exterior. Considero que hubiera sido justo hacerlo fijando la del embajador, de acuerdo con lo que perciben otros funcionarios públicos que protocolariamente tengan su mismo rango. Anteriormente los haberes de un embajador eran similares a los que percibían los ministros de la Corte Suprema, tenientes generales y almirantes. Con el pasar del tiempo, fueron relegados, y hoy, perciben una remuneración que no corresponde ni a su cargo ni a sus obligaciones sociales. El embajador con destino en la República cobra alrededor de 6.500 pesos mensuales. Estimo que esto no puede ser y que debe darse una solución a esa anomalía.

Con respecto a los demás funcionarios del servicio exterior, es fácil establecer una escala decreciente, basada en un porcentaje del sueldo del embajador.

Como ya lo expresara al principio de mi exposición, considero que la ley es buena y merece ser perfeccionada en sus deficiencias, en lo que se refiere a reincorporación de funcionarios injustamente separados, Consejo Superior de Embajadores, régimen previsional, Ceremonial del Estado, remuneraciones, nombramientos y designaciones.

Dejo para el tratamiento en particular una serie de sugerencias; pero quiero hacer moción de orden —por todo lo que he expuesto— a fin de que este proyecto vuelva a comisión, para que sean salvadas las omisiones que he señalado.

Sr. Perette. — ¿Cuál es la opinión de la comisión al respecto?

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Luder. — El reglamento no exige que yo exprese mi opinión. Es obvio que este proyecto ha llegado al Senado hace cuatro meses; hubo oportunidad de estudiarlo y elaborarlo con detenimiento, si los señores senadores hubieran querido hacer llegar sus sugerencias a la comisión. A esta altura, con un dictamen producido y tomadas las posiciones por cada uno de sus miembros, entendemos que la vuelta a comisión no va a redundar en beneficio o mejora de la ley, y por lo tanto nos oponemos a esta moción.

Sr. Bravo. — Retiro la moción, señor presidente.

Sr. Jáuregui. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Jáuregui. — Señor presidente, señores senadores: es evidente que el servicio exterior de la Nación es el espejo de la República en el

mundo, que refleja la imagen del país; a través de él se conocen nuestra historia, tradiciones, costumbres, cultura y forma especial de ser; y, sobre todo, es el instrumento ejecutor de la política nacional más allá de nuestras fronteras.

De la capacitación técnica y profesional, del conocimiento ambiental y del modo de actuar de nuestros representantes dependerá la idea que de nosotros se formen los demás países, razón por la cual es fundamental dotar al servicio exterior de la Nación de los medios idóneos para que pueda cumplir su función cabalmente.

La ley que se encuentra a nuestra consideración debe posibilitar la realización de los medios anteriormente citados; por eso es interesante destacar que la experiencia reunida no ha sido desaprovechada. Se han tenido en cuenta, en la redacción de la presente, las disposiciones de las últimas leyes sobre la materia, habiéndose recogido de todas ellas los componentes principales y agregándosele innovaciones interesantes.

Estamos de acuerdo en que el servicio exterior debe estar formado por funcionarios permanentes que se dediquen con exclusividad a su tarea, habiendo ingresado al mismo previo paso por el instituto que les dará los conocimientos científicos y técnicos necesarios. Una vez egresado del mismo iniciarán la carrera por el primer cargo del escalafón. Así se evitará que ingresen al servicio personas no capacitadas, favorecidas por el azar de la política. Por eso afirmamos, enfáticamente, que uno de los mayores aciertos de la ley es el mantenimiento del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ya que la mayoría de los países avanzados cuentan desde hace años con organismos similares.

El Consejo Superior de Embajadores resultará de suma eficacia en la colaboración a prestar al señor ministro con su asesoramiento, pues las personas que lo compongan gozarán de una vasta experiencia práctica en la función, no desperdiciándose de esta manera su capacidad y permitiendo, a la vez, el acceso de los funcionarios subalternos a los cargos superiores.

La creación del Tribunal de Honor reviste suma importancia, pues es esencial que todo funcionario del servicio exterior exhiba una conducta moral intachable tanto en su vida particular como en el ejercicio del cargo; posibilita además, de esta manera, que los mismos componentes del cuerpo puedan ejercer entre sí una estrecha vigilancia de su comportamiento.

Por estas razones, señor presidente, entendemos que la ley es buena en general. Las consideraciones en particular que se pensaban realizar ya han sido satisfechas por la comisión en un meduloso informe, por lo cual adelanto mi voto positivo.

Sr. Luder. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Luder. — A fin de facilitar el tratamiento en particular del proyecto de ley, voy a contestar algunas observaciones formuladas al mismo.

En realidad, no se trata de una refutación de las exposiciones de los señores senadores, porque todos ellos han coincidido en compartir la orientación de la ley, los objetivos de la misma y su contexto general.

Las observaciones han sido de detalle, pero algunas de ellas merecen ser aclaradas, porque entiendo que podemos, en ese sentido, aportar una mayor información al Senado.

La objeción que hace el señor senador León, que pareciera en alguna medida un poco espectacular, es la del secreto de la calificación. Esta se ha adoptado en procura de mantener la homogeneidad y la unión del grupo humano de la misión diplomática. El jefe de la misma es el que debe calificar a sus subordinados, y ello crea necesariamente, al tomar estado público y conocimiento por todo el personal de la Embajada, una situación de tensión que no ayuda a mantener la cohesión y la unidad de ese grupo humano. Debemos comprender que se trata de un pequeño grupo que actúa en el extranjero, sometido a todas las presiones de orden psíquico que significa estar alejado de su medio y, algunas veces, de su familia. La integración de ese grupo es fundamental para el buen funcionamiento de la misión, y la calificación, que no solamente trasciende al sector de la embajada argentina, sino a todo el mundo diplomático por el trato muy frecuente que tiene, crea situaciones incómodas, como lo ha demostrado la experiencia.

En definitiva, la práctica de la calificación pública se traducía en una gran generosidad por parte del jefe de la misión hacia sus subordinados, porque prefería en la escala de prioridades mantener integrado el grupo a sus órdenes que crear un desfase dentro del funcionamiento de ese grupo, a través de las distintas calificaciones para sus integrantes.

Es decir que el objetivo de la ley —el de la calificación que sirva para una selección rigurosa del personal y, además, como antecedente para las promociones— se veía desvirtuado en función de otras necesidades que el jefe de la misión debía cubrir a toda costa porque de ello dependía el buen funcionamiento de su trabajo.

Si bien es cierto que las leyes anteriores no la establecían, la que ahora consideramos es el resultado de la experiencia de muchos años y tiene sobre aquéllas la diferencia de que crea por primera vez en el estado diplomático una serie de limitaciones a ese personal, que están contrapuestas con algunos derechos que se le acuerdan por encima de los que tenían las otras leyes.

Esa calificación secreta —que no tiene tal carácter para siempre— simplemente le permite al jefe de la misión evitar tensiones y situaciones personales que hagan sentirse incómodos a sus subordinados, lo que a su vez repercute en sus familias. El grupo humano que actúa en el exterior mantiene entre sí una vinculación muy estrecha. Sus familias son amigas y la cali-

ficación puede significar un menoscabo, que si bien no es recibido como una afrenta sí puede considerárselo como una desconsideración de parte del jefe, resintiendo en consecuencia el trabajo del grupo y por sobre todo su homogeneidad.

Estas son las razones por las cuales se ha procurado que la calificación sea secreta, es decir, que el subordinado no conozca cuál es la que el jefe le ha asignado, lo que de ninguna manera significa que nunca en la vida vaya a conocerla.

El señor senador León se ha referido a una calificación reservada. No creo que ésta, reservada o secreta, tenga diferencias substanciales en cuanto a los resultados prácticos en la medida que sea reservada también para el interesado. Repito, señor presidente, que el propósito de esta ley es bregar por un mejor funcionamiento del servicio, además de darle al jefe de misión el margen necesario para que califique a sus subordinados con rigurosa justicia sin pensar en motivaciones de otra índole.

Por otra observación, el señor senador León propone el ingreso, a cualquier nivel de la carrera, de un porcentaje de personas ajenas al servicio. Ya lo había planteado en el seno de la comisión en el sentido de que un cuarenta por ciento del personal del servicio diplomático pudiera ser ajeno a la carrera...

Sr. León. — Un veinte por ciento.

Sr. Luder. — En la comisión dijo cuarenta. Ahora, rebajó (*Risas.*)

A juicio de la comisión, ello conspira contra el espíritu de la ley que es crear una carrera diplomática donde todos tengan el aliciente de la apertura del escalafón. Aceptar aquel otro criterio, es decir, que pueden entrar personas que no sean de la carrera, aunque se trate de elementos valiosos, produciría un desaliento a los miembros del servicio exterior que están sujetos a una serie de inhabilitaciones, por lo que merecen la compensación de una carrera abierta, sin limitaciones de ninguna naturaleza.

Por otra parte, si hablamos de una ley que quiere destacar por sobre todo el espíritu de cuerpo y el estado diplomático, que ha sido elogiado por los señores senadores, es evidente que eso responde a una vocación que se manifiesta a una temprana edad. Es muy difícil que a cierta altura de la vida se despierte la vocación de la carrera diplomática que no significa simplemente tener los conocimientos necesarios de derecho internacional o de buenas formas para manejarse. Lo que se requiere, como dije, es tener cierta formación, ese espíritu de servicio, esa tenacidad y ductilidad, ese espíritu de cuerpo que se consigue a través de un largo aprendizaje y que responde a una vocación personal que se manifiesta en temprana edad. De ninguna manera resulta útil al servicio y a la carrera diplomática introducir en la mitad o en cualquier nivel del escalafón a personas ajenas al área que taponarían los ascensos de los demás y, por

brillantes que fueran, no tendrían el hábito de la diplomacia, es decir, el ejercicio continuado a través de años de aprendizaje en todos los grados anteriores.

Por otra parte, los señores senadores habrán advertido que esta ley procura que el diplomático se integre en todos los niveles al servicio. El diplomático debe cumplir funciones consulares a determinada altura de su carrera para tener una impresión completa de su función. Eso es muy importante, porque ya el diplomático no es el hombre brillante que puede realizar una misión determinada, sino que es el técnico, el hombre idóneo y capacitado para una función que es específica y representa, en suma, una verdadera carrera. Por ello, pienso que introducir a una persona en el nivel de consejero sería lo mismo que a un experto en balística se lo designara capitán o mayor en el ejército por el simple hecho de ser brillante y porque tiene estudios muy importantes realizados en esa área.

Aquí no se trata de poseer aptitudes personales, sino de tener la vocación y las condiciones que surgen del ejercicio permanente de una vida al servicio de una política exterior que, evidentemente, obedece a una conducción que ejerce el Poder Ejecutivo y que nosotros aspiramos a que sea coherente en el tiempo, cualquiera sea el gobierno que esté accidentalmente en el ejercicio del poder.

Si se aspira a que un cuerpo idóneo formado en la disciplina de la diplomacia ejecute la política exterior es porque anhelamos también que nuestra política exterior sea argentina, en función de los intereses nacionales, es decir, que no dependa de los vaivenes ni de los avatares de la política interna, sino que, al igual que en las grandes naciones con real vocación de grandeza, la política exterior sea coherente y no esté sujeta a los cambios de la política. Por eso no podemos introducir en el nivel intermedio de la carrera a nuestros simpatizantes políticos cada vez que el gobierno cambia de mano, porque eso distorsionaría completamente el espíritu de la carrera. De actuar así, en lugar de tener un cuerpo idóneo para el ejercicio de la política exterior tendríamos un cuerpo desalentado que estaría esperando si el próximo cambio de gobierno podría traer un nuevo injerto, quebrando las posibilidades de ascenso en los cuadros. Repito que de esta manera se distorsionaría totalmente la aptitud para el servicio.

Esas son, señor presidente, las razones por las que no aceptamos la moción propuesta por el señor senador León. Estamos de acuerdo, sí, en la reducción del nivel de embajadores que no pertenezca a la carrera a un treinta por ciento nada más, porque estos cargos son temporarios y terminan con el presidente que los designa. Eso responde a una vieja práctica política y al interés que existe algunas veces de designar como jefe de misión a una persona espectable y representativa dentro del país.

—Ocupa la Presidencia el señor senador Pedro Cámpora, presidente de la Comisión de Acuerdos.

Sr. Luder. — Insisto, señor presidente, en que simplemente se reduce al treinta por ciento para no desalentar al personal de carrera e impedir el fluido ascenso hacia los escalones máximos del servicio.

El señor senador León propone además en el artículo 13, que es el que se refiere a los cursos del Instituto del Servicio Exterior, que quienes lo cursen por segunda vez también sean becados. Comprendo y me hago cargo perfectamente del sentido humano que tiene la posición del senador León para el caso en que personas de condición humilde hubieran sido reprobadas en el curso y tuvieran que repetirlo. Quiero hacer entender que el Instituto del Servicio Exterior, que es formativo y que exige una dedicación *full time*, tampoco puede convertirse en una beca que se recibe sin el cumplimiento de la contraprestación que significa el estudio.

Si alguien pudiera cursar dos años gozando del sueldo, que es lo que representa la beca, porque en definitiva es un sueldo para el cargo mínimo del escalafón, al cabo de esos dos años, sin estudiar ni dedicarse y sin mostrarse verdaderamente interesado en la carrera podría volver a cursar y tener así otros dos años de sueldo. Esta situación evidentemente nos parece injusta para las personas que se preocupan y dedican todo su tiempo —tal es el espíritu de la ley— a cursar en el Instituto del Servicio Exterior.

Aceptamos, sí, el agregado que propone el señor senador León en el inciso c) del artículo 18, y en la discusión en particular propondremos la nueva redacción. Creemos que podría completarse el texto sugerido por el señor senador para que respondiera mejor a lo que él quiere resolver con el agregado.

Con respecto al artículo 33, referente al sorteo de los embajadores que no integran el Consejo Superior de Embajadores, debo señalar que los que no resultan sorteados evidentemente deben pasar a retiro. La ley establece que a los sesenta y cinco años los embajadores pasan automáticamente a revistar en la Cancillería, y al no tener destino en esa situación, entran en el sorteo para integrar el Consejo Superior de Embajadores. Los que no salen sorteados deben pasar a retiro.

Debe reconocerse que esta ley eleva el límite de edad a setenta años, lo que significa que debió agregarse también un mecanismo fluido para que eso no cortara las posibilidades de ascenso de las escalas inferiores.

De manera que el embajador prácticamente a los sesenta y cinco años se somete al sorteo, y el que no resulte sorteado debe pasar a retiro. Ello sin perjuicio de que, por resolución fundada del ministro, un embajador con mayor edad

pueda seguir sirviendo en funciones transitorias o permanentes, si las necesidades del servicio así lo exigen.

El señor senador León también considera que en el artículo 43 se hace una diferencia entre las sanciones que se podrán imponer a los embajadores y las que se impongan eventualmente, en los casos de faltas, a los demás miembros del servicio. Nosotros entendemos que el cargo de embajador, que es el rango máximo, rodeado de todo el prestigio y los atributos provenientes de la culminación de la carrera diplomática, no puede ser sometido a sanciones de apercibimiento ni a llamados de atención, porque eso no cabe a tal altura de la carrera.

Si la falta ha sido leve se dispone el retiro del embajador o lo solicita él mismo. Si ha sido grave, evidentemente corresponde la cesantía o la exoneración. Yo no he previsto la sanción que corresponde a un embajador que besa a su secretaria en público, como decía el señor senador León, pero eso será tema de tratamiento del Tribunal de Honor. Yo no puedo entrar a interpretar ni a sentar la jurisprudencia del futuro Tribunal de Honor.

La suspensión preventiva, que el señor senador pide que sea con cobro de haberes, es algo sobre lo cual yo no lo seguí detenidamente en la larga lectura del articulado de su proyecto. Entiendo que, como dice la ley, en los casos de falta muy grave solamente se dispone la suspensión preventiva. El cobro de los haberes en ese caso me parece que contradice la gravedad de la falta y la situación de sumariado del agente.

En definitiva, de la propia ley surge que si del sumario no resultaran probadas las imputaciones, el embajador percibirá todos los haberes que le correspondiesen durante la suspensión preventiva. No alcanzo a comprender cómo en algunos casos se cobrarían los haberes y en otros no. En todo caso, en la discusión en particular el señor senador podría leer nuevamente el artículo para que nosotros lo apreciáramos debidamente.

En el artículo 77, que concuerda con el 18, vamos a aceptar también una modificación en el sentido de que las personas declaradas prescindibles que tuvieran los años de servicio computables que se establecen para el retiro no se vieran privadas de ese beneficio.

Entiendo, efectivamente, que si el retiro corresponde a las personas que han sido declaradas cesantes o exoneradas por causas graves, el caso de la prescindibilidad —que no debe ser necesariamente causa grave, sino por razones de mejor servicio— no puede estar colocado en una situación más difícil. Si la comisión no lo había incluido antes era porque teníamos una duda con respecto a la posibilidad de que la ley rigiera casos ya cumplidos, como son las prescindibilidades decretadas con anterioridad a la vigencia de esta ley.

Voy a sugerir un agregado a la propuesta del señor senador León en el sentido de que el haber de retiro corresponda sólo en los casos en que no se haya percibido la indemnización que establece la ley de prescindibilidad o en que la misma sea reintegrada, porque sería absurdo pensar que puedan percibir los dos beneficios, es decir, que tengan la indemnización por prescindibilidad y luego se acojan al haber de retiro.

Con respecto a las observaciones formuladas por el señor senador Bravo, le agradezco el elogio que ha hecho de la ley. Efectivamente, se inspira en la ley sancionada en 1947. Comparto algunas preocupaciones que ha señalado, pero entiendo que las mismas no son imputables a la ley.

El hecho de que se hayan realizado o no nombramientos o reincorporaciones que a su juicio no son justificados no tiene nada que ver con el régimen legal previsto por este estatuto para el servicio exterior.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, doctor Alberto M. Fonrouge.

Sr. Luder. — Por otra parte, el artículo 103, cuando faculta al ministro, por esta única vez y hasta diciembre de 1974, a efectuar promociones sin ajustarse al régimen del escalafón, prevé las injusticias que el señor senador Bravo ha planteado con referencia a las cesantías injustificadas y a las reincorporaciones todavía no cumplidas porque no hay lugar en el escalafón. Si se ajustara estrictamente al escalafón, tendría que entrar por el último cargo. Por lo tanto, no hay más remedio que facultar al ministro para que, reparando las injusticias y conforme a otras disposiciones de la ley, reordene el servicio exterior y el cuadro de funcionarios sin ajustarse estrictamente a la disposición de ascender grado por grado.

Significa que coincidimos con los propósitos del señor senador Bravo. Falta que coincidamos también en la forma en que se ejercite la facultad que la ley acuerda al señor ministro hasta el 31 de diciembre de 1974.

Con respecto al Consejo de Embajadores, el único que se ha opuesto es el señor senador Bravo. Los demás señores senadores que han intervenido en este debate han considerado útil y óptima la nueva institución que se incorpora en el servicio exterior.

No se trata, evidentemente, de superponer un organismo a los ya creados. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene, lógicamente, sus reparticiones y al frente de ellas hay un funcionario o un embajador que no ha llegado a la edad prevista para integrar el Consejo de Embajadores y pasar a revistar en la Cancillería con esa función. El propósito de la ley es lograr que un grupo de personas que han culminado su carrera, demostrando capacidad y vocación en el ejer-

cicio de sus funciones, puedan ser útiles como asesores, en la conducción, al ministro de Relaciones Exteriores.

No se refiere al ejercicio concreto y diario de la tarea administrativa o técnica que se puede cumplir en las distintas reparticiones; se trata del asesoramiento en la conducción de la política, y las funciones se limitan exclusivamente a ese aspecto.

De manera que no se superpone a tareas ejecutivas que realizan, en cada área, los funcionarios que están al frente de cada una de las direcciones o reparticiones.

Con respecto al régimen jubilatorio, deseo señalar que esta ley no es previsional. Hemos querido mantener la posibilidad del retiro para que los funcionarios del servicio exterior tengan una situación distinta a la que existe en el resto de la administración. Debemos destacar con toda claridad que el retiro con 20 años de servicio no es el común en la administración pública. Consideramos que un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida en el exterior, con todos los problemas que ello supone, especialmente en el ámbito familiar en lo que se refiere a la educación de sus hijos fuera del destino —porque a veces no es posible cumplirla en ese lugar— con esa serie de tensiones y problemas de tipo familiar que a veces ocasiona la vida fuera de nuestra patria, tiene derecho a pedir el retiro a los 20 años, porque su situación es muy distinta a la del funcionario administrativo que nunca ha salido de su medio ambiente, está perfectamente integrado a nuestra comunidad y no ha vivido sufriendo las presiones de tipo psíquico, y hasta físico, que ocasionan destinos a veces no muy placenteros, para los miembros del servicio exterior.

Ese es el propósito por el cual se incluyó esta situación de retiro para los miembros del mencionado servicio, a fin de librarlo de una imprevisión de la ley general de jubilaciones.

Con mucho gusto aceptamos la sugerencia del señor senador León en el sentido de que esta disposición incluya a los que han sido declarados prescindibles.

Y debo señalar —para que el señor senador Bravo tranquilice su espíritu en este sentido— que la ley de amnistía y la que da por computables todos los años de servicio para los que han sido declarados cesantes por razones políticas —leyes que oportunamente sancionamos— cubren perfectamente las necesidades que tienen la mayor parte de las personas que no han podido ser reincorporadas y que ahora tendrán la posibilidad de acogerse al retiro.

Es decir que han sido contempladas, dentro de lo posible —no en forma casuística, porque eso no se puede hacer en el texto de una ley—, las situaciones generales que tantos años de desencuentro argentino han provocado en nuestro país, y específicamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en lo que hace al servicio exterior.

Sr. León. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Luder. — Sí, señor senador.

Sr. León. — ¿Es decir que usted aceptaría modificar —y tomo su último argumento— el texto del proyecto, y que en lugar de decir «cumplidos» diga «computables»?

Sr. Luder. — Sí, señor senador.

Con respecto a las remuneraciones, que el señor senador Bravo considera que son muy bajas, comparto su criterio.

Evidentemente, muchos funcionarios de la administración, y entre ellos los del servicio diplomático, están percibiendo haberes no muy actualizados ni adecuados a las necesidades actuales. Pero debo señalar que el servicio diplomático está equiparado a la escala de funcionarios de la administración pública. Así, el embajador está en la categoría máxima, que es la categoría 24 dentro de la administración pública y que equivale al director nacional; el ministro plenipotenciario, en la categoría 23; el consejero, en la 22; el secretario de primera, en la 21; el secretario de segunda, en la 19; el secretario de tercera en la 16, y el agregado, en la 13.

O sea, que están escalafonados en función del escalafón general de la administración.

Por otra parte, como ésta no es una ley de presupuesto, evidentemente no podía prever las remuneraciones, pero comparto su opinión de que las retribuciones de los miembros del servicio exterior deben ser mejoradas, y estoy seguro de que lo serán cuando la oportunidad lo haga posible.

Quiero referirme ahora a lo expresado por el señor senador Culasso Mattei, quien apoya la ley y ha sido un gran colaborador en el seno de la comisión. Hemos compartido algunas de sus inquietudes, y hemos tratado de darle cauce a las mismas dentro de la nueva redacción del proyecto.

El señor senador propone que los que tengan título habilitante de diplomacia sean exceptuados de cursar las materias en el Instituto de Servicio Exterior. Deseo señalar que aunque nominalmente las materias puedan parecer lo mismo —me refiero a las que se han cursado en la facultad y las que se han cursado en el instituto—, en el espíritu y en la orientación con que se encaran los estudios del Servicio Exterior son distintas.

El Instituto de Servicio Exterior es un organismo formativo también en el plano ético, moral, y es el que despierta las vocaciones para el ejercicio de la profesión, no para la teoría de la materia diplomática.

Las materias se imparten en el Instituto de Servicio Exterior de acuerdo con la orientación de política exterior que el gobierno imprime a su actuación en el plano internacional, y no con un sentido teórico y generalizado; es decir, se canalizan hacia lo que entendemos que es la defensa de los intereses nacionales, implemen-

tando determinadas políticas nacionales para alcanzar esos objetivos.

Suprimir el estudio de esas materias crearía en realidad una falencia en ese aspecto y, por otra parte, haría casi inútil cursar en el instituto, porque serían muy pocas las asignaturas que deberían analizarse.

Es evidente que un doctor en diplomacia probablemente ha cursado más materias específicas de la carrera que las que deben estudiar los alumnos del Instituto de Servicio Exterior, pero el enfoque y propósito que se da en este último es distinto. Lo que se procura establecer es si después de cursar dos años en el Servicio Exterior ese joven hombre —porque la edad de ingreso es hasta los 33 años— tiene verdadera vocación o ha captado cuál es la finalidad de la carrera y cuáles las obligaciones que ella le impone, y no simplemente el conocimiento teórico de la disciplina que ha encarado en su juventud al estudiar diplomacia.

Estas son las razones de orden práctico por las cuales vamos a mantener el despacho en ese sentido.

Señor presidente: en la discusión en particular he de hacer las aclaraciones que requieran los señores senadores, y con lo dicho doy por terminadas estas breves consideraciones.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, doctor Américo Alberto García.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (García, A. A.). — En consideración en particular. Si no se hace uso de la palabra, se votará en primer término el punto 1º del dictamen, por el cual se suprime el Acápite del proyecto.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar en particular el artículo del proyecto de ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación.

—Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 1º a 17 con las modificaciones introducidas por la comisión.

—Se lee el artículo 18 con las modificaciones introducidas por la comisión.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Ya había anticipado que solicitaría la modificación del inciso c) de este artículo. El señor senador Luder manifestó que la comisión aceptaría el nuevo texto, que diría: «Aquellos funcionarios a quienes se aplicara a resulta

de un sumario la sanción de cesantía o exoneración o separados por razones ajenas a su voluntad.»

Sr. Presidente (García, A. A.). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta por el señor senador León?

Sr. Luder. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo 18 del proyecto con las modificaciones introducidas en el punto 4º del dictamen y la propuesta por el señor senador León, que fuera aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se votan y aprueban los artículos 19 a 32, con las modificaciones introducidas por la comisión.

—Se lee el artículo 33 con la modificación introducida por la comisión.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Insisto, señor presidente, en solicitar la supresión de este artículo. Aun tomando como medianamente valederos los argumentos del señor senador Luder, no puedo votar una ley que crea inestabilidad a través de un sorteo.

Sr. Luder. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Luder. — No se crea ninguna inestabilidad. Se trata simplemente del cumplimiento de otra disposición que dice que a los 65 años los funcionarios del servicio exterior pasan a revistar automáticamente en la Cancillería. Como no se puede tener a todos los embajadores mayores de 65 años en la Cancillería pisándose los unos a los otros, se efectúa un sorteo para constituir el Consejo de Embajadores. Lógicamente, la ley puede prever que haya más embajadores mayores de 65 años que cargos en el consejo.

Por lo tanto, no se trata de inestabilidad sino de la culminación de la carrera del funcionario con todos los honores, con la posibilidad de que, por resolución fundada del ministro, continúe en función.

Sr. León. — Es decir, que los únicos que se retirarán a los 70 años serán los sorteados.

Sr. Luder. — Efectivamente, salvo los que por resolución del ministro continúen en funciones. Este mecanismo tiende a asegurar una mayor fluidez en el movimiento en la cúspide, porque llevar a 70 años la edad para el retiro de los embajadores supondría, en alguna medida, retardar el ascenso de los demás.

Por lo tanto, el mecanismo que se propone tiene por objeto aprovechar la experiencia y, al mismo tiempo, dar mayor agilidad al sistema de ascenso al más alto grado. Tanto es así que el embajador que ha culminado su carrera tiene la posibilidad de terminarla a los 65 años, mientras que el ministro plenipotenciario que no la ha concluido tiene derecho a seguir hasta los

67 años porque no ha visto culminada su aspiración de llegar al más alto rango del escalafón y entonces se le permiten dos años más para ver si concreta esta posibilidad. Pero si todos los embajadores están en su puesto, es decir, ninguno deja su posición, es evidente que va a resultar muy difícil llegar a los niveles superiores. El propósito es crear realmente un mecanismo fluido para el ascenso a la cúspide sin perjuicio de aprovechar la experiencia de los embajadores de más edad y la facultad del ministro de mantener en servicio a los que juzgue necesarios.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Los argumentos no me convencen porque buscando el rumbo de la fluidez creamos una contradicción dentro de la propia ley, ya que por un artículo se dice que se retiran a los 70 años y por otro creamos la posibilidad de que se retiren a los 65.

Sr. Presidente (García, A. A.). — La Presidencia entiende que no habiendo acuerdo con la comisión el artículo debe ponerse a votación. Está a consideración el artículo 33 con el agregado propuesto por la comisión en el punto 11 del dictamen.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos 34 a 41 con las modificaciones introducidas por la comisión.

—Se lee el artículo 42.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Es para reiterar mi pensamiento en el sentido de que pese a los argumentos vertidos acerca de que la situación de un hombre fuera del país crea actitudes de amistad que pueden dar lugar a distorsionar las relaciones con el embajador que va a efectuar la calificación, prefiero que se mantenga la palabra «reservado», porque me parece que preserva más el derecho constitucional de defensa, ya que este hombre tiene que estar informado por lo menos de su calificación.

Sr. Luder. — Si a la palabra «reservado» le da el carácter de que esa persona esté informada de su calificación, lógicamente me opongo, porque la exposición que realicé tenía el sentido de que el calificado no debe estar informado de su calificación por el calificador para evitar un enfrentamiento y una erosión de sus relaciones personales. De manera que la comisión mantiene el texto del despacho.

Sr. León. — En su exposición anterior hablaba de la similitud entre los términos «reservado» y «secreto»...

Sr. Luder. — Hasta escuchar la interpretación que usted le da al término «reservado», y entonces me di cuenta que le da el sentido de «comu-

nicárselo al calificado», cosa que dije expresamente no debía hacerse.

Sr. León. — Yo le doy la interpretación que le da la ley 12.591 con su reglamentación.

Sr. Presidente (García, A. A.). — La Presidencia entiende que los señores senadores están suficientemente informados de las respectivas interpretaciones con que deberán votar, por lo cual va a poner a votación el artículo 42 propuesto por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 43, modificado por la comisión.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Es para proponer un agregado: después de donde se señalan las sanciones a que pueda dar lugar el sumario, retiro obligatorio, cesantía o exoneración, propongo agregar: «suspensión o disponibilidad».

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — En dicho artículo, para la segunda sanción, cesantía o exoneración, dice que será «previo acuerdo de remoción por parte del Honorable Congreso de la Nación». Pienso que debería decir: «...del Honorable Senado de la Nación».

Sr. Presidente (García, A. A.). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Luder. — La comisión no acepta la modificación que propone el señor senador León; en cambio, sí acepta la del señor senador Bravo que diga «Honorable Senado» en vez de «Honorable Congreso».

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo 43 del dictamen, con la modificación propuesta por el señor senador Bravo y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se votan y aprueban los artículos 44 y 45 con las modificaciones introducidas por la comisión.

—Se lee el artículo 46.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Yo había propuesto agregados en este artículo, pero los voy a omitir. Y para evitar esa superposición de ideas que explicaba el señor senador Luder, sólo propondré que se agregue «con goce de sueldo» luego de «la suspensión preventiva».

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra del señor miembro informante de la comisión.

Sr. Luder. — La comisión no acepta porque las razones que di se referían a que la gravedad

de la imputación hacía necesaria la separación, y el goce de sueldo corresponderá una vez que se levanten los cargos.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo 46 tal como ha sido redactado.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se votan y aprueban los artículos 47 a 72, con las modificaciones introducidas por la comisión.

—Se lee el artículo 73.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Yo he propuesto un texto, señor presidente, para ser agregado al final de este artículo. Dice así: «Las licencias ordinarias no utilizadas por causas que no fueran imputables al funcionario, darán lugar al pago compensatorio».

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Luder. — Las licencias ordinarias deben ser usadas como aquí se establece, precisamente para evitar que se pretenda no usarlas y luego cobrar el pago compensatorio. Además, hay que tener en cuenta que cuando no se usan es por razones de servicio, y está previsto que se puedan tomar al año siguiente. Dentro de la estructura de la ley y del propósito que guía este estatuto legal, la licencia debe ser tomada necesariamente, si no en ese año en el siguiente. La compensación por pago no se incluye dentro de lo que el estatuto quiere para el servicio exterior.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo tal como ha sido propuesto por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 74.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Propongo que se reemplace el texto del artículo 74 por el siguiente: «El régimen de jubilaciones y pensiones establecido por las leyes 18.464 y 20.433 se aplicará también a los funcionarios y ex funcionarios del servicio exterior de la Nación».

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Luder. — Es de público conocimiento que se ha hecho una concertación entre entidades profesionales y el Estado para estudiar los problemas de la seguridad social y que se está elaborando un régimen jubilatorio. Me parece que no es conveniente volver a plantear por vía de un artículo sistemas jubilatorios que pueden no ser adecuados a las actuales necesidades. Reitero

que esta ley no es una norma previsional sino que se refiere a la organización y estructura del servicio exterior y a las obligaciones y deberes de sus miembros. Por ello la comisión no acepta lo propuesto por el señor senador.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 74.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se vota y aprueba el artículo 75.

—Se lee el artículo 76.

Sr. León. — Pido la palabra.

Nosotros vamos a proponer la supresión de este artículo que, a nuestro juicio, crea una posibilidad de discrecionalismo. Dijimos antes que habría una especie de contradicción entre el embajador que se retira a los setenta años y el otro funcionario que por sorteo lo hace antes y no ingresa al Consejo de Embajadores. Este artículo faculta ahora a jubilar de oficio; entonces, aquí también se crea la posibilidad de que so pretexto de dar una mayor fluidez se permitan situaciones de injusticias y de desigualdad ante la ley.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Luder. — La posibilidad de la jubilación de oficio no crea dificultades. Se entiende que el embajador ha de tener los años de servicio necesarios para la jubilación, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Se está ante la presencia de una mera facultad que se acuerda para casos excepcionales. La comisión entiende que no la podemos eliminar, y mantiene el despacho.

Sr. León. — Quiero aclarar que el artículo dice que «sin alcanzar los límites de edad previstos».

Sr. Luder. — De edad, pero no de servicios, señor senador.

Sr. León. — Estamos hablando de edad.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 76.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 77.

Sr. León. — Con respecto a este artículo, habíamos propuesto una modificación. De acuerdo con ella —si me permite el señor senador— y según lo conversado y ratificado anteriormente, el artículo quedaría redactado así: «Los funcionarios que sin tener derecho a la jubilación tuvieran una antigüedad de 20 años en la administración pública, de los cuales 15 como mínimo computables en el servicio exterior de la Nación y hubieren cesado en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la presente ley, tendrán derecho al haber de retiro».

Quisiera proponer —y la exposición del señor miembro informante mostró su sensibilidad para comprender los problemas de los hombres en

servicio— que los 15 años sean rebajados a 10. En todo caso, por esta única vez, con todo este esfuerzo que estamos haciendo, creamos las condiciones de mayor justicia para personas separadas del servicio que —entendiendo— no pasan de setenta u ochenta; con ello se posibilitaría mejorar la situación de otras veinte o veinticinco.

Apelo a la sensibilidad del Senado para modificar este artículo y posibilitar que la medida comprenda a hombres separados del servicio que puedan hacerse acreedores al retiro.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Es para agregar en este artículo lo siguiente: «También gozarán de este derecho aquellos que reuniendo estas condiciones hayan sido declarados prescindibles en virtud de la ley 20.549».

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Luder. — En el artículo 18 que hemos modificado ya está prevista la situación que plantea el señor senador Bravo, es decir que por causas ajenas a su voluntad haya sido separado del servicio. Evidentemente la causa ajena a su voluntad es la de la prescindibilidad, y yo aclararé, anteriormente, que si aceptamos el retiro para quien hubiera sido declarado cesante o exonerado, con mayor razón debe ser para el declarado prescindible. No creo que debamos mencionar la ley, porque puede haber otra ley de prescindibilidad si la Cámara de Diputados aprueba la que cuenta con mediación del Senado. De manera que no agregaría nada a lo ya resuelto y parecería que resultara de una defectuosa técnica legislativa citar una ley que puede volver a ponerse en vigencia en cualquier momento. Creo que limita el concepto, en vez de ampliarlo. Es decir lo limitaría para los incluidos en una ley anterior y dejaría una duda para quienes lo estuvieran en la nueva disposición.

Respecto de la propuesta del señor senador León, entiendo que lo que se trata es el haber del retiro del diplomático. Este, para ser tal, debe haber cumplido, por lo menos, más de la mitad de su carrera administrativa en el servicio exterior. Quien no lo ha hecho en el servicio exterior, evidentemente, no es un diplomático; es un hombre que accidentalmente, por los azares de la política, ha pasado al servicio exterior; pero eso distorsiona el propósito de la ley.

Acepto el cambio de la palabra «cumplido» por «computables», por entender que es un concepto más amplio, pudiendo ingresar también aquellos que, por las leyes de amnistía, consiendan cumplidos sus años cuando han sido separados por razones políticas.

Sr. León. — También propongo reemplazar la palabra «cesaran» por «hubieren cesado».

Sr. Presidente (García, A. A.). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Luder. — Sí, señor presidente.

Propongo que se agregue, después de «retiro», «... siempre que no hubieren percibido ningún tipo de indemnización, en razón del cese de funciones y en su caso la reintegrarán».

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo 77 con las modificaciones propuestas por los señores senadores León y Luder.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 78.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Es para proponer reemplazar la palabra «retirados» por «separados», más un agregado posterior, de modo tal que la primera parte del artículo 78 quedara redactada de la siguiente forma:

«Los funcionarios separados en virtud de las disposiciones de la presente ley, u otra causa ajena a su voluntad, percibirán del Ministerio...», continuando el artículo en la forma en que está redactado.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Luder. — Al figurar la palabra «retirados», el artículo lo hace en su acepción jurídica, es decir, el que tiene derecho al retiro. Lo que este artículo prevé es la suma que va a recibir por ese retiro; pero éste está previsto en otras disposiciones. Ahora, simplemente se establece cuál es el haber del retiro y por eso se emplea la palabra «retirado», en su acepción jurídica. En consecuencia, señor presidente, la comisión mantiene su despacho.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Yo comprendo que en este artículo lo del retiro tiene una acepción jurídica, pero estamos tratando una ley que intenta recuperar un poco el tiempo perdido en muchos aspectos de nuestra política. Y uno de ellos es poder lograr tranquilidad para un sector muy pequeño de argentinos que han vivido, como bien lo dijo el señor senador Luder, las vicisitudes siempre acuciantes de nuestra política. Por eso pienso que reemplazando las palabras «retirado» por «separado» o agregando «u otra causa ajena a su voluntad», puede incorporarse este sector que, al rechazarse mi proposición de que en el artículo 77 se disminuya el mínimo de 15 años de antigüedad a 10, vería concretado un mínimo de seguridad para su existencia. Lo digo con toda lealtad, señor senador.

Sr. Luder. — No lo dudamos, señor senador. La palabra «retirado» es aquí omnicomprendiva de las causales que la ley admite para tener derecho al retiro. Esas causales están especificadas en el artículo 18 que contiene muchos incisos y nosotros hemos agregado uno más, que es el de

la prescindibilidad. Esto significa entonces que expresar aquí «separado por causas ajenas a su voluntad», lejos de esclarecer el sentido de la ley lo confundiría, porque se parte de la base de que los prescindibles están retirados por imperio del artículo 18 y aquí se establece cuál es su haber de retiro. Por eso nos oponemos, señor presidente.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 78.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se votan y aprueban los artículos 79 a 98, con las modificaciones introducidas por la comisión.

—Se lee el artículo 99.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Desearía preguntar al señor miembro informante si en la redacción de este artículo, que está vinculado con el 106, no sería preferible introducir una modificación que lo haga más claro para evitar una eventual vulneración de las autonomías provinciales.

El artículo 99 está vinculado, como dije en mi exposición en general, con el 106 al establecer que «los distintos ministerios, secretarías de Estado u organismos descentralizados nacionales, provinciales o municipales adoptarán los recaudos necesarios para instruir a sus dependencias respecto a lo determinado en el artículo 96, dentro de los treinta días...» y más adelante hace referencia al traspaso de los créditos correspondientes.

Me parece, señor presidente, que estos dos artículos pueden ser redactados de otra manera.

Sr. Luder. — Propongo una modificación mínima a fin de aclarar el concepto y eliminar así la preocupación que tiene el señor senador Bravo con respecto a que esto alcance a lesionar las autonomías provinciales.

Podríamos dejar el artículo 99 tal como está redactado porque en él simplemente se dice que Ceremonial del Estado va a pasar a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el artículo 106 se observa que el primer párrafo es inofensivo en ese aspecto, porque se trata simplemente de comunicar a las provincias que Ceremonial del Estado pasa a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no ocurre lo mismo con el segundo párrafo, donde para evitar cualquier preocupación de que se pretenda transferir oficinas provinciales de protocolo se debe decir «todas las dependencias del Estado nacional». Es decir, se agrega «nacional».

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si el señor senador Bravo está de acuerdo continuaríamos con la votación y cuando lleguemos al artículo 106 se considerará su preocupación.

Sr. Bravo. — De acuerdo, señor presidente.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 99.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 100 a 105.

—Se lee el artículo 106.

Sr. Luder. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Luder. — Propongo que en el segundo párrafo se añada la palabra «nacional» después de «Estado».

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo 106 con la modificación propuesta por el miembro informante de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 107 y 108.

—El artículo 109 es de forma.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

men en cuenta, en la medida compatible con el ordenamiento mismo, las opiniones vertidas por la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), en las reuniones y debates realizados durante los meses de febrero y marzo de 1973 en el ámbito de la Secretaría de Energía, sin perjuicio de atender similarmente las demás opiniones de los otros sectores intervinientes.

29) Se pondere la importancia de lo realizado por las cooperativas de electricidad en orden a la emancipación en el área eléctrica y contribución a la electrificación del país, especialmente en pueblos de campaña.

30) Se evalúen asimismo en su justa medida las aspiraciones del Congreso Nacional de Cooperativas de Electricidad, realizado durante los días 6 y 7 de setiembre de 1973 en esta Capital Federal.

49) Dentro de aquel ordenamiento a que se refiere el punto 19), se defina el rol que corresponderá al cooperativismo eléctrico coordinadamente con las necesidades resultantes del programa técnico y de las cambiantes exigencias del desarrollo socioeconómico.

59) En la concepción de la alta función social del servicio público de electricidad se haga ex-